

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
Tesis Licenciatura en Ciencia Política

Los fundamentos deliberativos de la democracia.
Una revisión teórica de los potenciales democráticos de la
deliberación pública en contextos de pluralismo, complejidad
y desafección política

Diego García da Rosa
Tutor: Javier Gallardo

2007

INDICE GENERAL.

Agradecimientos.

Introducción.....	1
Capitulo I. La deliberación en una perspectiva histórica: el retorno de viejas preguntas ante el desafío del pluralismo y la complejidad.....	6
Capitulo II. Las teorías decisionistas y agregativas de la política: la relativización de los componentes discursivos en la teoría política contemporánea.....	14
1. Las nociones de ciudadanía y el valor de la racionalidad profana para el sistema democrático.....	17
2. Complejidad técnica e inmunización discursiva en ámbitos decisorios.....	23
3. El problema del método democrático y la toma de decisiones.....	27
4. La consideración de la autonomía y el carácter dado de las preferencias.....	40
Capitulo III. Dos modelos normativamente exigentes de la deliberación democrática: John Rawls y Jürgen Habermas.....	49
Capitulo IV. El rol deliberativo en una sociedad bien ordenada: el constructivismo político de John Rawls y la perspectiva deliberativa.....	52
1. Las potencialidades del sujeto: los argumentos no deliberativos de la Teoría de la Justicia.....	54
2. La Teoría de la Justicia revisada: hacia un concepto de deliberación acotada en contextos de desacuerdos públicos razonables.....	62
Capitulo V. Bases y fundamentos para la formación discursiva de la voluntad democrática: el modelo procedimental de Jürgen Habermas.....	78
1. Las premisas del modelo: racionalización de los mundos y potencialidades del lenguaje en las democracias plurales.....	79
2. La redefinición de la soberanía popular en la teoría del discurso.....	85
3. En busca de la institucionalización deliberativa: las dimensiones de lo político en Facticidad y Validez.....	91
4. El autogobierno como influencia: el rol de los espacios públicos no formales.....	111
Consideraciones Finales	116
Bibliografía.....	120

INTRODUCCIÓN.

Las razones para discutir acerca de las formas y arreglos más convenientes que una democracia debe sustentar y de esa manera lograr perfeccionar los términos de la convivencia política parecen no tener fin. No obstante, podríamos sostener que ese indeterminismo de la idea democrática constituye su rasgo más saludable.

Debemos partir por aceptar que las certidumbres últimas en un debate acerca de nuestra convivencia moral y política, se tornan escasamente posibles en un contexto caracterizado por la existencia de un profundo pluralismo religioso, político y filosófico, que además opera en un proceso de progresiva complejidad técnica y sobre la base de sedimentadas desigualdades.

Este dato en particular nos obliga a desestimar una búsqueda ontológica del consenso en nuestras democracias haciendo que la discusión, el intercambio argumentativo y la fundamentación mediante actos de habla de nuestras decisiones más relevantes, vuelvan a recobrar un rol decisivo. Solo después de superadas las ambiciones racionalistas que entendían el desacuerdo como un error o una equivocada comprensión de determinados axiomas primeros, una teoría de la argumentación en claves democráticas podía cobrar nuevamente relevancia para la filosofía política.

En este contexto, desde hace ya varios años asistimos en el debate académico especializado de la filosofía y la teoría política contemporánea, a una rehabilitación de los componentes dialogicos y discursivos, como aspectos esenciales a los que el proceso democrático debe aspirar y consolidar. Bajo el rótulo "*Democracia Deliberativa*", presenciamos a partir del artículo de J. Bessette, tal vez el primer intento serio de abordar esta noción aparecido a principios de los años ochenta, un crecimiento exponencial de las publicaciones y de los intelectuales que abordan la deliberación como objeto de estudio desde las mas diversas perspectivas teóricas.

El objetivo central de esta tesis lo constituye el esfuerzo por sistematizar el resultado de esos debates y que el lector se encuentre en un mismo volumen con los principales aspectos en los cuales se concentra el debate. En esa tarea, persigo el fin heurístico de armar un puzzle académico y fundamentalmente teórico que se ha caracterizado por la dispersión de sus principales argumentaciones. Quien se tome la titánica tarea de completar sus paginas, podrá encontrarse con los principales fundamentos que sostienen una perspectiva discursiva de la política, los ámbitos institucionales interpelados para su

consolidación, las principales fuentes teóricas que apoyan o desestiman la práctica dialógica, así como también las limitaciones y críticas sustantivas imputadas al concepto. No obstante, los objetivos de esta tesis no se agotan en una labor meramente descriptiva y políticamente operando bajo criterios de neutralidad. Quien escribe estas páginas es un confeso deliberativo que se encuentra sosteniendo una obviedad: **la deliberación es un componente inherente a la práctica política de la convivencia de los ciudadanos que operan en el contexto de las democracias pluralistas. Tal es la premisa fundamental de la que parte este trabajo monográfico.**

Pero antes de presentar la estructura argumental de esta tesis, permítame el lector enumerar brevemente las razones que explican el regreso de lo dialógico y su relevancia para la discusión académica actual.

En primer lugar, las últimas décadas marcan la consolidación del sistema democrático como forma de coexistencia política que se volvió hegemónica en el occidente gozando de un mayoritario apoyo a las instituciones y valores de la democracia. Este rol protagónico, profundizado a partir del derrumbe soviético, viene unido a una profunda revisión crítica de sus principales postulados, mecanismos e instituciones que la sustentan. Luego de entender superada la etapa de consolidación, se redoblan los esfuerzos teóricos e institucionales por reflexionar acerca de lo que la literatura especializada ha denominado “calidad democrática”. La profunda revisión de los paradigmas políticos que se produjeron a partir del escenario post-soviético, impactaron también en los modelos explicativos que se volvieron relevantes en las ciencias sociales, que concentran ahora su interés en el estudio de la racionalidad de las decisiones políticas, en el análisis de los procesos de toma de decisiones así como también en los esfuerzos por pensar la virtud y la participación ciudadana en las esferas decisorias. Los actores políticos y el rol de las instituciones vuelven a cobrar relevancia explicativa y por consiguiente, el valor y trascendencia del diálogo y lo discursivo retoma su olvidado alcance.

Una segunda razón vinculada a la anterior, sostiene que el proceso de consolidación democrática ha ido acompañado, paradójicamente, con una profunda transformación de las relaciones existentes entre ciudadanía y política. Entre las pautas que determinan esta nueva forma de vínculo público, resulta evidente el retiro cada vez mayor de los ciudadanos hacia la esfera privada en detrimento de un foro público que cada vez logra captar menos atención. La despolitización de la opinión pública, el creciente privatismo

ciudadano y las redefiniciones normativas de estos hacia el espacio público hacen que la política y el sistema democrático precisen de una nueva problematización acerca de conceptos caros a la teoría y a la filosofía política como son: la legitimidad del proceso democrático, qué entendemos por soberanía popular y como revitalizar la vieja promesa clásica de la democracia como convivencia política basada en el autogobierno del demos. Como ha sostenido Bruce Ackerman con cierto escepticismo: "...cualquiera que haya sido la verdad en Atenas, los ciudadanos modernos en general tienen mejores cosas que hacer con su tiempo que debatir asuntos públicos en el foro".

Como mostraré a lo largo de este trabajo, algunos de los esfuerzos teóricos más ambiciosos han abordado esta "agorafobia" y las posibilidades de una reinvitación al foro público, a partir de alentar una discusión pública ciudadana que pueda lograr influir sobre los ámbitos administrativos y de toma de decisión colectiva. Otros, en cambio, en una apuesta normativa más ambiciosa señalan que el esfuerzo debe estar orientado hacia el diseño de instituciones dialogicas a fin de acortar la distancia entre gobernantes, representantes y la ciudadanía profana.

El hecho del pluralismo razonable, constituye la tercera razón por la cual existe un relativo consenso acerca del carácter imperativo que asume el diálogo en el espacio público. **Esta no existencia de una perspectiva moral, religiosa o filosófica de carácter abarcativa y la falta de un consenso básico que sirva de base para la legitimidad y la estabilidad de las decisiones colectivas, caracteriza a las culturas públicas de las democracias modernas.** Este pluralismo irreductible, que resulta de una mera contingencia histórica y que por tanto debemos considerarlo como un dato para nuestra reflexión, consolida la progresiva erosión de las fuentes normativas de acción de carácter no reflexivo, haciendo que la discusión argumentada y los recursos del habla sea con todo lo que contamos para poder tratar de conocer y eventualmente resolver nuestros desacuerdos primarios.

La cuarta razón que podemos señalar proviene de una vieja sentencia de Aristóteles vertida en su *Retórica*, en la que expresaba que para que una tesis contraria al común de las opiniones o que se encontrara retirada al ostracismo al cual son condenadas ciertas ideas, precisa para su rehabilitación la voz de un ilustrado filósofo. Ciertamente, no podemos obviar en este trabajo la influencia que para la reacción deliberativa en el debate académico contemporáneo, han tenido los trabajos filosóficos de John Rawls y de Jürgen Habermas en las últimas tres décadas. Esta relevancia es apreciable en el hecho de que

prácticamente ninguna publicación que aborde el tema, deja fuera de consideración las referencias a ambos autores.

Finalmente, lo discursivo y su relevancia, parecen correr parejo con la desconfianza hacia las teorías agregativas e instrumentalistas de la democracia. Frente a las estrategias teóricas deflacionistas del proceso político, que terminan por reducir el proceso político a un conjunto de métodos de elección de élites políticas o propugnan el fortalecimiento de los mecanismos del mercado en el ágora pública, las propuestas deliberativas reaccionarán a sus principales postulados al tratar de mostrar las insuficiencias normativas de tales formulaciones.

Presentadas así algunas de las razones de lo que podríamos denominar el *revival* deliberativo en el panorama de la filosofía y la teoría política actual, es momento de presentar la estructura argumental de la presente tesis.

En el capítulo primero, presento una revisión de la importancia que ha adquirido las prácticas deliberativas desde una perspectiva histórica que se remonta a la Atenas clásica y llega a nuestros días. Tiene incorporado además, una aproximación al análisis del rol deliberativo en la teoría contractualista que aborda los trabajos de Hobbes, Kant y Spinoza y que solo pude reproducir allí de una manera acotada.

En el capítulo segundo, expongo los principales puntos de desacuerdos entre la perspectiva deliberativa y las teorías decisionistas, racionalistas y competitivas de la política. En esta tarea, emprendí una ampliación de los puntos cruciales de la polémica (que suelen acotarse a las perspectivas agregativas) e incluyo los debates sostenidos con las premisas del decisionismo y de las posturas que defienden una racionalidad acotada del ciudadano. Resultan fundamentales en este capítulo, además, las objeciones mutuas emprendidas con las teorías racionalistas de la elección social.

La segunda parte de esta tesis se encuentra integrada por los capítulos que van desde el tercero hasta el quinto. En esta segunda parte, la estrategia argumental cambia significativamente concentrándose exclusivamente en la discusión de los modelos normativamente exigentes de la deliberación democrática. En un intento primero y heurístico de clasificación de estas perspectivas, el capítulo tercero presenta un intento básico de caracterización de estos enfoques maximalistas, al tiempo que expone la razón fundamental por la cual integrar los esfuerzos deliberativos de John Rawls y Jürgen Habermas.

El capítulo cuarto ingresa directamente en el abordaje de el rol deliberativo en el constructivismo político de John Rawls a partir de la discusión de sus premisas fundamentales, tanto en su *“Teoría de la Justicia”* como en las posteriores transformaciones acaecidas en *“Liberalismo político”*.

Cierra este trabajo monográfico, la presentación del modelo procedimental discursivo de Jurgen Habermas que ocupará el esfuerzo analítico de todo el quinto capítulo. En este caso, opté por presentarle al lector un formato compuesto en cuatro pasos que buscan arribar a un esquema general de su modelo y que incorpora elementos teóricos para su explicación que son novedosos con respecto a la literatura que ha abordado el tema. También en ese apartado, intento refutar la tesis de que la teoría discursiva del alemán se construye de espaldas a la disputatividad política y se sustenta en la unanimidad.

Hasta aquí es suficiente con la tenacidad de los prólogos. Como dijo acertadamente el sabio Bioy, ahora el autor se aleja y como fatalmente ha de suceder, el libro deberá enfrentar su destino.

Salto, Invierno de 2007.

CAPITULO I.

LA DELIBERACIÓN EN UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA: EL RETORNO DE VIEJAS PREGUNTAS ANTE EL DESAFÍO DEL PLURALISMO Y LA COMPLEJIDAD.

“Es imposible razonar justamente sin entender perfectamente la idea tocante a la cual razonamos; y es imposible entender perfectamente alguna idea sin seguirle la huella hasta su origen y examinarla”.

David Hume.

La importancia de una extendida y robusta deliberación para el proceso democrático de toma de decisiones colectivas, carece de novedad tanto académica como institucional.

Con más de veinticinco siglos sobre sus espaldas, la reivindicación del diálogo público y la discusión previa a la toma de decisiones colectivas, estuvo presente desde la consolidación misma de la democracia ateniense. Su importancia para la vida pública y democrática la podemos apreciar especialmente a través de la centralidad que ésta adquirió en los debates sostenidos, tanto por los principales actores políticos de la época, así como por parte de los representantes de las tendencias intelectuales hegemónicas en Atenas. Precisamente, ésta característica ha hecho que Hanna Arendt denominara a los atenienses “...el mas charlatán de todos los cuerpos políticos”.¹

La gran mayoría de los textos académicos que dedican su estudio a la “Democracia Deliberativa” reservan, casi sin excepción, un espacio no menor a la reseña histórica de las prácticas discursivas de los atenienses, alternándose en ellos la cita de la oración fúnebre de Pericles en la versión de Tucídides, las potencialidades de la “isonomía” pensada y expresada a través de los dialogos de Protágoras o las sentencias de Aristóteles sobre la virtud y los límites de la palabra en el ágora. Aquí, no obstante, opto por citar a Isócrates que durante el siglo IV ateniense se constituyó en uno de los mayores defensores de la discusión pública y sus potencialidades para el buen funcionamiento del cuerpo político. En su tratado “*A Nicocles*” expresaba:

“La capacidad que ha sido puesta en nosotros de convencernos mutuamente y llegar a inteligencia entre nosotros mismos acerca de todo lo que queremos, no solo nos libera del tipo de vida de las bestias, sino que nos permite agruparnos para vivir en común y fundar estados, crear leyes e inventar artes. Ha permitido estatuir normas sobre lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo sin cuya ordenación no seríamos capaces de convivir unos con otros. *Pues la capacidad discursiva es el signo mas importante de la razón humana*”²

¹ Arendt, Hanna; “*La condición humana*”. Paidós. Pág. 40

² Isócrates; “*A Nicocles*”. Tomado de Jaeger, Werner. “*Paideia*” FCE.1987. La cursiva es mía. Compárese esta afirmación con la expresada por Habermas: “Lo que nos saca de la naturaleza es la única cosa cuya naturaleza podemos conocer, a saber, el lenguaje. En virtud de su estructura se instituye para nosotros la emancipación”. Habermas Jürgen, “*Conocimiento e Interés*” Tecnos. 1986.

Pero llegados a este punto debemos preguntarnos; ¿qué validez tiene para nuestra actual reflexión, el citar prácticas intelectuales y políticas con más de dos milenios? ; ¿qué puede aportarnos una discusión en estos términos para la reflexión normativa y practica de nuestras democracias contemporáneas y no caer en un simple ejercicio de erudición académica?

Sin animo de generar ambigüedades, las respuestas a estas interrogantes no constituyen otra cosa que preguntas, dudas e inquietudes. A diferencia de la ciencia que ha podido cancelar definitivamente preguntas formuladas hace siglos y pasarlas definitivamente a la historia de la ciencia, en filosofía política y más precisamente en la reflexión sobre los alcances y potencialidades de la democracia, nos siguen desvelando inquietudes milenarias. Estas aún poseen una relevancia clave para pensar nuestra convivencia política y moral y precisamente la deliberación, como objeto de análisis de este trabajo, no escapa a esta lógica. Los principales términos de la discusión actual sobre la democracia deliberativa, sus objeciones y principales controversias, sus virtudes y también sus límites, todavía siguen dando vueltas sobre preguntas tan añejas como la democracia misma. Áreas especialmente controvertidas del debate contemporáneo como son el carácter manipulador e instrumental de todo uso retórico, los límites del espacio público y la calidad de las razones pertinentes a ser admitidas en el foro, la autonomía presupuesta de los agentes, el papel revelador que todo uso moral del intercambio argumentativo produce, así como las bondades que una discusión profana aportan para el sistema democrático, constituyen preguntas que aún hoy nos siguen desafiando desde Atenas.

Para mostrar un claro ejemplo de la vigencia Ateniense volvamos brevemente a Isocrates. Encontramos en el mayor representante de la sofística y la retórica post-socrática, fundamentalmente en la polémica sostenida con la tradición platónica, el planteo de esas cuestiones cruciales sobre las que actualmente los teóricos aun discrepan. Gran parte de su esfuerzo analítico, lo dedicó a construir argumentos capaces de responder a las objeciones de aquellos que veían en la discusión publica, un poderoso instrumento de persuasión y manipulación del demos.

Ante ese desafío, se embarcó en la compleja tarea de dotar a su retórica con un fundamento de moralidad y responsabilidad que la tradición platónica le reprochaba por su escasez.³ (Finley, 1980; Chambers, 2006)

Postuló además, las bondades democráticas de una doxa ejercidas por profanos en claves dialogicas, en detrimento de un *logos* ultimo accesible solo a una elite esclarecida, viendo en la educación un potencial enorme para el fortalecimiento discursivo de la ciudadanía. Desestimó los modelos teóricos y filosóficos que depositaban esperanzas utópicas en la deliberación y sostuvo que resultaba preferible asumir criterios más pragmáticos para la gestión de los conflictos, rescatando de esa forma el carácter inherentemente político que parece desvanecerse en los grandes cuerpos teóricos. Ciertamente, decía Isocrates, la política no debía agotarse en la consideración realista de actores motivados por la búsqueda interesada de poder, pero al mismo tiempo no podía negar su realidad, resultando imperioso asumir el conflicto como intrínseco a la constitución de todo cuerpo político.

También en Aristóteles, con quien muchas de las polémicas de Isocrates se concentraban, encontramos el abordaje de preguntas que revisten una actualidad sorprendente, tales como los límites y la neutralidad que debe sustentar un espacio público deliberativo o la presunción de racionalidad que a las decisiones les aporta la discusión pública.⁴

No obstante, las preguntas relevantes no se agotaron en Atenas y aspectos primordiales para nuestra actual discusión quedan fuera de las consideraciones atenienses. Podemos señalar dos que son de especial relevancia para nuestra presente argumentación.

En primer lugar, la importancia de las libertades comunicativas y de su libre expresión para la construcción de un orden que busca cumplir con los requisitos de legitimidad y estabilidad, tal como la teoría clásica del contractualismo abordó en las versiones de Hobbes, Spinoza y Kant. (1). En segundo lugar, la discusión sobre una institución política

³ Un ejemplo magnífico de acusación a la retórica como arte persuasivo sin justicia lo vemos en las intervenciones de Polo en las discusiones con Sócrates, tal como lo retrato Platón en el *Georgias*. No obstante, **actualmente se ha venido reivindicando las raíces deliberativas de Platón. Según Simone Chambers, la principal objeción a la retórica por parte de Platón no es que esta apela a las pasiones por sobre el uso de la razón, sino que la retórica es exclusivamente monológica y no dialógica.** Así sostiene: “Plato drew a close connection between rhetoric and democracy; arguing that democracy by its very nature always suffers from too much rhetoric and too little dialogue”. Para un excelente desarrollo de los usos retóricos en la democracia ver: Chambers, Simone “*Rhetoric, Public Opinion and the ideal of a Deliberative democracy*”. Princeton University .2006.

⁴ Señala Pablo da Silveira al respecto: “Aristóteles podía pretender rehabilitar la vieja tradición isonómica pero ya no podía suponer que un conjunto de ciudadanos razonables, discutiendo en el foro público y decidiendo en libertad fueran a tomar necesariamente buenas decisiones. Legislar con autonomía no es sinónimo de legislar bien”. Da Silveira, Pablo. “*Política y Tiempo*”. Taurus. Pág. 94.

fundamental para la comprensión de nuestras modernas democracias y ajena completamente a los griegos: la representación política (2). En ambas construcciones el rol deliberativo y las posibilidades de institucionalización de la discusión argumentada cobran especial relevancia.

1. La teoría contractualista de Thomas Hobbes es un ejemplo que nos ilustra por la negativa, es decir, por las consecuencias inferidas de una consideración restrictiva del dialogo publico y la libre comunicación discursiva de los agentes. Dos consideraciones fundamentales son las que determinan la exclusión dialógica en Hobbes.

En primer lugar, el inglés adhiere a un concepto de deliberación que excluye *prima facie* a la reciprocidad , y por tanto, lejos de entender ésta como un dialogo entre actores que procuran entenderse sobre algo en el mundo, la concebirá como un solitario ejercicio del actor consigo mismo. Esta forma de entender la deliberación “*in foro interno*”, se presenta como un careo que el agente realiza entre las diversas consecuencias que pueden surgir de la elección de un determinado curso de acción, pero que en ningún momento implica a otros en ese dialogo. En cierto sentido, con Hobbes podemos ver por primera vez en la filosofía política, como la imputación de una racionalidad estratégica del actor determina un modo que exonera a éste del debate y de ejercicios discursivos sustentados en la reciprocidad:

“ *Cuando en la mente de un hombre surgen alternativamente los apetitos y las aversiones, esperanzas y temores que conciernen a una y la misma cosa, y diversas consecuencias buenas y malas de nuestros actos u omisiones respecto a la cosa propuesta acuden sucesivamente a nuestra mente, de tal modo que a veces sentimos un apetito hacia ella, otras una aversión, en ocasiones una esperanza de realizarla, otras veces una desesperación o temor de no alcanzar el fin propuesto, la suma entera de nuestros deseos, aversiones, esperanzas y temores, que continúan hasta que la cosa se hace o se considera imposible, es lo que llamamos deliberación*”⁵

En segundo lugar, la idea de una razón publica y de un espacio político deliberativo en el corpus filosófico de Hobbes, se desvanece al negar a la libre comunicación de las opiniones un rasgo saludable para la estabilidad del orden político. Más aún, Hobbes observa en el pluralismo irreductible de las opiniones una causal desestabilizadora de los regimenes políticos y por tanto, le asigna a la libre expresión y a la discusión en claves

⁵ Hobbes, Thomas. “*Leviatán*”. 1651. FCE. Pág. 47. La cursiva es mía.

públicas, una capacidad subversiva: **un poder legítimo en el Leviatán debería reprimir todo espacio de razonamiento público a fin de lograr un orden justo.** (Hobbes; 1651).⁶

En definitiva, el problema con el que carga la libre discusión en Hobbes, se encuentra estrechamente vinculado a la noción antropológica de una naturaleza egoísta y auto interesada del hombre que se traduce en que cada sujeto entiende que su opinión prevalece más que cualquier otra, generándose así una intolerancia insalvable que destierra la posibilidad de llegar a acuerdos razonables para la convivencia política:

“Dada la diversidad que existe de pareceres privados, que se traducen e otras tantas opiniones particulares, forzosamente se producirá confusión en el Estado y nadie se ocupara de obedecer al Poder soberano mas allá de lo que parezca conveniente a sus propios ojos”⁷

En todo caso, la posible deliberación que tiene lugar en el pacto Hobbesiano nos exige lo que Bruce Ackerman ha denominado “una estrategia relativizadora”, esto es, si tomamos como dato el irreductible pluralismo de intereses y valores que atraviesan una sociedad, debemos buscar relativizar nuestros desacuerdos morales en base a un único valor compartido, que en el caso de Hobbes, lo constituye el temor de la muerte. Pero esta exigencia no se la puede satisfacer sin una previa renuncia a criterios normativamente valiosos y por tanto, la deliberación plausible en el *Leviatán* debe pagar altísimos costos que termina provocando la imposibilidad de todo dialogo razonable. (Ackerman, 1998)

En contraste con esta concepción y a escasos años de publicado el *Leviatán* de Hobbes, su contemporáneo Baruch de Spinoza en su “*Tractatus theo-logico politicus*”, concedía a la libre expresión de las opiniones políticas y al respaldo institucional necesario que ese poder comunicativo requería, un carácter fundamental para la legitimidad de cualquier orden político. De esta forma, la libertad de pensamiento y de expresión de las opiniones son los requisitos primeros para la construcción de un espacio público y deliberativo:

“Mientras ninguno pueda actuar contra el derecho de la potestad soberana, a cualquiera le esta permitido pensar y juzgar y **por tanto hablar contra su decreto con tal que hable y sostenga lo que dice siguiendo a la razón**”⁸

Sin embargo, fue con Emmanuel Kant que el uso público de la razón y de las libertades comunicativas en el foro adquirió una nueva dimensión que condicionó los debates

⁶ Manin ha insistido en el vínculo existente entre la comunicación horizontal y su posibilidad de expresarla libremente y el tipo de régimen al cual se aspira. En este sentido sostiene: “Una de las mas antiguas máximas del despotismo es evitar que los súbditos se comuniquen entre si”. Manin, B. “*Los principios del Gobierno representativo*”. Pag 211. Ed. Alianza.

⁷ Hobbes, Thomas. “*Leviatán*”. Op Cit. Pag 265. La libre opinión como causa desestabilizadora de los regimenes se puede también encontrar en “*De Cive*”. Cap. XII.

⁸ Spinoza, Baruch. “*Tractatus theo-logico politicus*” Cap. XX

posteriores acerca de las bondades y límites que podemos esperar de la razón pública. En su clásico texto, “¿Qué es la Ilustración?” afirmaba que “... para la ilustración no se requiere otra cosa que la libertad... la de hacer uso público de la razón”.⁹

Este poder coercitivo que ejerce lo público en Kant, no radica su originalidad en la denuncia sobre la ofensiva de la dominación totalitaria o la negación de los derechos básicos, sino que se aprecia en tanto la discusión pública incluiría ahora cuestiones que anteriormente estaban reservadas a autoridades revestidas de tradición. (Kant, 1798).

La discusión y la exposición de razones en forma pública incluirían los temas más trascendentales para la constitución de un orden social; la justicia, la educación, la moral, etc. Si el concepto de razón pública es por tanto, una idea legitimadora de decisiones, esta precisa una razón comunicable y una sociedad con contextos de comunicación sin restricciones.¹⁰

2. Si bien la teoría contractualista profundizó en la importancia que posee un espacio público discursivo, ya sea para generar un ámbito deliberativo y de libre expresión o como potencial desestabilizador de los regímenes políticos, la deliberación volvió a estar en el centro del debate nuevamente en la discusión sobre una de las instituciones políticas más importantes de las democracias modernas: la representación política del demos. La noción misma de la representación política supuso un desafío crítico a las nociones clásicas de soberanía popular y legitimidad del orden político, así como también una radical reformulación de la concepción y alcance de la autonomía política heredada del libreto democrático clásico. (Dahl, 1989; Manin, 1987).

En donde encontramos en primer lugar la deliberación como centro de las controversias en el contexto de las instituciones representativas, fue en la discusión mantenida acerca de los mandatos imperativos y su rol en el proceso político (Elster, 1998; 1991). En esta disputa, conservadores de escasa filiación democrática fueron quienes reclamaron con mayor firmeza la importancia de una amplia autonomía deliberativa para el cuerpo de representantes, en contraste con la mordaza que para la libre comunicación y el entendimiento, implicaban las claras y reguladas instrucciones de los mandatos.

⁹ Kant, Immanuel. “Que es la ilustración”. Madrid .1989.

¹⁰ Sin embargo y como veremos más adelante los fundamentos de la razón pública Kantiana cuando es adoptada por el constructivismo liberal de Rawls, genera modelos deliberativos acotados al proponer restricciones dialogicas en actores, temas y ámbitos en donde esta puede ser ejercida plenamente.

La discusión de los alcances de estos, también ocupó la agenda de las asambleas constituyentes Francesas y Alemanas, en las que los defensores de la autonomía deliberativa de los representantes hicieron celebres apologías de la discusión argumentada. (Elster; 1998). Edmund Burke, en su ya clásico discurso a los electores de Bristol, expresaba:

“El parlamento no es un conjunto de embajadores de intereses diferentes y hostiles, los que cada uno deberá sostener como representante y defensor contra otros; el parlamento es la asamblea deliberativa de una nación con un único interés, el del conjunto y en la que no deben primar ni propósitos ni prejuicios locales, sino el bien común, que resulta de la razón en su conjunto”¹¹

La discusión tampoco estuvo ajena en los procesos de creación constitucional norteamericana. En ese sentido, Bernard Manin ha venido trabajando extensamente sobre los debates ocurridos en la Asamblea Constituyente de aquel país y que tenían como objeto de disputa, entre otros, la conflictiva relación entre representación y autonomía deliberativa. Tal como lo expresa:

“La cuestión del tamaño de la asamblea de representantes y representados (**que en cierta medida fue un problema técnico sobre el número óptimo para unas deliberaciones adecuadas**) adquirió enorme importancia política, concernió a la relación entre representantes y representados, al mismo núcleo de la representación”¹²

Presentando la oposición entre federalistas y antifederalistas, Manin coloca el problema de los “mandatos” como una demanda exclusiva de los antifederalistas al tiempo que los federalistas (Hamilton y Madison) defendieron la autonomía deliberativa en los representantes.¹³ Precisamente, fue Hamilton quien defendió más enérgicamente las bondades de una discusión argumentada como forma de tener decisiones democráticas más saludables y racionalmente mejor justificadas:

“Cuanto mas a menudo se somete a examen una medida, cuanto mayor es la diversidad en las situaciones de quienes la han de examinar, tanto menor será el peligro de esos errores que brotan de la falta de la debida deliberación”¹⁴

¹¹ Tomado de Elster, Jon. “*Democracia deliberativa*” Gedisa. 1998. Pag 15.

¹² Manin, Bernard. “*Consideraciones sobre el gobierno representativo*”.

¹³ Roberto Gargarella le asigna un rol bastante mayor que el otorgado por Manin a la deliberación en los debates constitucionales norteamericanos. Ver Gargarella, Roberto. “*Crisis de representación y Constituciones contramayoritarias*”. Isonomia. Num 2. También en “*Representación plena, deliberación e imparcialidad*” En Elster, Jon. “*Democracia Deliberativa*”. Gedisa. 1998.

¹⁴ “*The Federalist*”. 1988. Nueva York press.

Pero la práctica de la representación política también ha logrado distender y hacer mas laxas las relaciones entre representantes y representados. La teoría democrática del primer siglo XX ha sido dominada por perspectivas que compartieron una comprensión instrumentalizada de la política, abrigando serias dudas sobre las potencialidades racionalizadoras de la participación popular y los beneficios de una discusión ampliada e institucionalizada. Eso ha provocado la revitalización de tradiciones teóricas que buscan paliar el déficit participativo y deliberativo que los mecanismos representativos parecen fomentar. Desde el republicanismo se ha venido insistiendo sobre la importancia de alentar el fortalecimiento de las virtudes ciudadanas y la participación política del demos, tanto en ámbitos formales como informales, como buenas formas de reaccionar políticamente a los efectos no deseados de la representación. En este aspecto es claro Cass Sustein cuando expresa:

“Desde el punto de vista republicano...los problemas mas importantes respecto a la representación política, es que amenaza con ratificar, perpetuar y estimular una comprensión del proceso político como una lucha egoísta entre intereses por recursos sociales escasos, que puede desanimar a que los actores políticos asuman y comprendan las perspectivas de los otros **y que esto devalúe los rasgos deliberativos y transformadores de la política**”¹⁵

Pero la representación *per se* no constituye la única causante del privatismo ciudadano y la agudización de los caracteres competitivos de la lucha política: **la representación también es el ámbito desde donde la institucionalización de la deliberación pública puede impulsarse y perfeccionarse.** La imaginación institucional nos debe obligar a pesar contrapesos a las tendencias no deseadas de la representación y tratar de mitigar sus deficiencias. La **reacción deliberativa**, tal como la denomino en este trabajo, no solo constituye un desafío a los supuestos teóricos del decisionismo competitivo, sino que supone además un esfuerzo reflexivo para lograr el mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia política intentando presentar alternativas, vía fortalecimiento del dialogo y la discusión razonada, a los déficit políticos que hoy afrontan nuestras democracias en contexto de pluralismo.

¹⁵ Sustein, C “*Beyond the Republican Revival*”. En Miller. “*Sobre la Nacionalidad*” Paidós 1997.

CAPITULO II.

LAS TEORÍAS DECISIONISTAS Y AGREGATIVAS DE LA DEMOCRACIA: LA RELATIVIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DISCURSIVOS EN LA TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORANEA.

Desde el punto de vista normativo,
la decisión nace de la nada
Carl Schimitt.

Para una mejor exposición de las características de la concepción deliberativa de la democracia, una estrategia argumental atractiva consiste en presentarla frente a las perspectivas agregativas y hacer dialogar los dos enfoques en referencia a puntos críticos de desacuerdo. Sin embargo, esta forma de presentar el debate no resulta novedosa y constituye un lugar común en los textos académicos que se ocupan del tema. (Cohen, 1998; Fearon, 1998; Knight y Jonson, 1994; Gutmann y Thompson, 2004). La pertinencia de una estrategia de este tipo, resulta significativa al constatar que la rehabilitación deliberativa surge, entre otras razones, como reacción frente a los supuestos clásicos de las teorías decisionistas del proceso democrático y a las derivaciones racionalistas que de éstas se desprenden. Los trabajos teóricos de Max Weber, Carl Schimtt, Joseph Schumpeter, la teoría de clásica de las elites, el decisionismo sistémico de Luhmann, los paradigmas democráticos de Robert Dahl y Norberto Bobbio, el modelo económico de la democracia de Anthony Downs y los desarrollos posteriores de la teoría de la elección racional, parten de premisas sobre aspectos centrales de nuestra comprensión del sistema democrático que son objeto de controversia y ante los cuales, los teóricos apologeticos de la deliberación levantan su voz critica.¹⁶

Una definición brindada por Joshua Cohen y que intenta caracterizar estas perspectivas, nos ayuda a comenzar a entrever algunos de esos aspectos cruciales en que se situará la controversia entre ambas visiones:

“De acuerdo a concepción agregativa de la democracia, las decisiones son colectivas siempre que surgen de disposiciones de elección colectiva vinculante que otorguen igual consideración a los intereses de cada persona vinculada por la decisión”¹⁷

¹⁶ Entre los diferentes adjetivos que encontramos en la literatura deliberativa para referirse a estas perspectivas podemos encontrar: visiones estratégicas, competitivas, agregativas, decisionistas, disputativas, minimalistas, etc. En este trabajo las usaré indistintamente.

¹⁷ Cohen, Joshua. “*Democracia y libertad*” En Elster, Jon (comp) “*Democracia deliberativa*”. Gedisa Editores. 1998. Pag 236.

Es a partir de esta definición, en la que Cohen no insistirá analíticamente, que el autor plantea los límites a lo que esta noción se enfrenta y bosqueja las principales preocupaciones de su teoría deliberativa. Se destacan en particular, dos aspectos especialmente controvertidos para el proceso democrático. En primer lugar, la centralidad que adquieren los procesos mismos de elección y toma de decisiones colectivas y en segundo orden, el concepto y alcance otorgado a la autonomía de los sujetos que serán afectados por las decisiones tomadas mediante esos mecanismos agregativos de preferencias.

En cuanto a la primera dimensión y frente al desafío que supone la existencia del pluralismo valorativo, Cohen sostendrá que resultaría tentador otorgar a la democracia un valor únicamente procedimental. Ante la presencia de numerosas visiones de la vida buena y la reproducción de múltiples intereses en pugna, las perspectivas agregativas se recostarán sobre las bondades de un procedimiento que privilegie el desarrollo de instancias neutrales de agregación de intereses. Contra este reduccionismo procedimentalista, argumentará que un ámbito de toma de decisiones que dependa del razonamiento dialógico y de la deliberación, aportará no solo virtudes epistémicas a la decisión, sino que también permite la inclusión de aspectos sustantivos en el proceso decisorio, ambas ausentes en los modelos agregativos de democracia.¹⁸

En cuanto a la consideración de la autonomía que se presuponen de los agentes, el principal déficit de las concepciones agregativas para el autor, radica en que fallan al no otorgarle relevancia, no tanto a la intensidad de las preferencias que los ciudadanos emiten, sino a las demandas y exigencias que tales convicciones exigen a las personas *en virtud de su contenido*. (Cohen, 1998, 1999). Son precisamente estas exigencias las que alientan a dar razones para desafiarlas y en ese sentido, una concepción deliberativa de la democracia presenta mejores argumentos normativos para operar en el contexto de pluralismo razonable que caracteriza nuestras sociedades democráticas.

No obstante, Joshua Cohen deja aspectos sustanciales fuera de consideración. No quiero decir con esto que tanto el método de toma de decisiones y el grado de autonomía que suponemos de los ciudadanos carezca de relevancia, sino que estos aspectos deben ser complementados por el estudio reflexivo de otros significativos conceptos.

¹⁸ Para un mejor desarrollo de estos dos ítems ver Cohen, Joshua “*Democracia y Libertad*”. En Elster, Jon (comp) “*Democracia deliberativa*”. Gedisa. 1998.

Por ejemplo, no cobra mayor relevancia en su análisis los posibles efectos que un procedimentalismo agregativo de intereses y con pretensiones de neutralidad, ejercen sobre la dinámica de la vida política en una comunidad democrática. En este sentido, Javier Gallardo ha prestado una mayor atención analítica sobre las repercusiones políticas que tienen las lógicas agregativas sobre la acción política. Así, sostiene que:

“...si bien la democracia competitiva se rige , o al menos debería regirse, por principios de libre elección y de igualdad en el trato de las preferencias de todos los votantes , por normas de publicidad y de discusión abierta, suele tener magros rendimientos desde el punto de vista de un genuino escrutinio publico de las propuestas y actuaciones publicas, tiende a fomentar una instrumentalización de los procesos participativos, a minimizar las oportunidades de ejercicio de un poder deliberante en la esfera política convencional, disminuyendo, en definitiva, las posibilidades de acumulación de un saber y un poder compartidos”¹⁹

En pro de incluir esos aspectos, que entiendo Cohen deja fuera de consideración, es que identifico cuatro áreas especialmente controvertidas en donde los defensores de la deliberación se enfrentan a postulados competitivos y decisionistas. Estos ítems a discutir son: 1) El rol del ciudadano en el proceso político y el valor asignado a su racionalidad cuando este opera en el ámbito de lo público. 2). La relación entre complejidad social, expulsión de los mecanismos participativos y exclusión deliberativa de las esferas decisorias, 3). El proceso democrático y los mecanismos de toma de decisiones y finalmente, (4) La consideración de la autonomía de los agentes y el carácter dado de las preferencias.

A través de la discusión profunda en cada una de esas áreas problemáticas, el lector podrá ir registrando la aparición de heterogéneos y disímiles postulados deliberativos, que lejos de sustentarse en un consenso, registran grandes desacuerdos tanto de carácter teóricos así como políticos. Subyace en ese ejercicio la clara intención de este autor de registrar la gran multiplicidad de tradiciones teóricas y políticas que conviven en esa perspectiva. En diferentes issues y en torno a diferentes problemas, tendrán voz los que optan por una visión mas amplia y normativamente mas exigente de los potenciales discursivos, aquellos que se apegan a una noción mas pragmática y realista acerca de las posibilidades del dialogo en contextos de complejidad y pluralismo, deliberativos de corte republicano clásico, republicanos revisionistas, liberales, procedimentalistas y deliberativos sustancialistas. Además de esto, la exposición de referencias empíricas y experiencias

¹⁹ Gallardo, Javier. “*El dialogo en la Republica*”. En Polis. Vol 1. N° 1. Pag 67-68. 2005.

institucionales novedosas, en las que se ponen en práctica gran parte de los postulados que aquí aparecen bajo un formato exclusivamente teórico, cobran relevancia y fueron especialmente relevados a fin de lograr la curiosidad institucional del lector.

1. Las nociones de ciudadanía y el valor de la racionalidad profana en el sistema democrático.

El papel asignado al ciudadano, la consideración de sus virtudes y limitaciones así como la racionalidad que suponemos de él, se convierte en parte fundamental de toda teoría que se proponga la empresa de pensar la convivencia democrática. Ciertamente, la historia de la teoría de la democracia contiene en sus relatos más prestigiosos, diferentes modos de apelar a las aptitudes morales de los ciudadanos y a su racionalidad como aspectos fundamentales para la comprensión del proceso político. (Offe y Preuss, 1990).

En ese sentido, la teoría de la ciudadanía que se desprende de la obra de Joseph Schumpeter se ha transformado en un clásico exponente de las teorías competitivas de la democracia. Frente a los postulados del primer pluralismo, que sostenía un enfoque de la sociedad fragmentada en innumerables intereses contrapuestos y conteniendo en un relativo equilibrio por la conquista de las arenas administrativas y parlamentarias, la teoría Schumpeteriana implicó una revisión profunda de sus postulados básicos.

En “*Capitalismo, Socialismo y Democracia*”, se sirvió de poderosos argumentos para señalar que la participación de los miembros en las organizaciones es escasa, que la estructura y funcionamiento de estas generan pocos incentivos participatorios y que la pluralidad de grupos de intereses contrapuestos compitiendo en relativo equilibrio no se constataba empíricamente. En definitiva, las asimetrías de recursos y de poder desafiaban todo acceso equitativo a las instancias decisorias. (Schumpeter; 1958).

Sin embargo, las reservas contra los supuestos pluralistas no solamente se apoyan en un cambio de paradigma teórico que intenta romper con los fundamentos clásicos del pensamiento democrático, sino que **están vinculadas a una radical reformulación de los supuestos cognoscitivos de los participantes**. Precisamente, todo su esquema teórico se sustenta en una mirada particular del ciudadano común y su papel para el proceso democrático. Un sujeto desinteresado y escasamente reflexivo del cual tenemos muy poco que esperar en lo que concierne a la *res publica*, es lo que termina especificando los sistemas democráticos en la visión de Schumpeter. La construcción teórica de éste, nos termina por presentar un retrato del sujeto mermado en sus capacidades críticas y que

utiliza primitivas inferencias lógicas cuando lo sitúa en la acción pública-política: así, la sombra de Platón sobrevuela nuevamente la reflexión democrática:

“El ciudadano normal desciende a un nivel inferior de prestación mental tan pronto como penetra en el campo de la política. Argumenta y analiza de una manera que el mismo calificaría de infantil si estuviese dentro de sus intereses efectivos. Se hace de nuevo primitivo.”²⁰

De esta manera, Schumpeter invierte las lógicas de lo público y privado en relación a la racionalidad esperada del ciudadano que nos dejara la teoría clásica de la democracia. Las bondades del “*zoon politikon*” aristotélico son vaciadas de todo contenido de virtuosidad y como contrapartida, se lo resignifica atribuyéndole aquel idiotismo que era reservado para caracterizar ciudadanos que solo se movían en las lógicas de lo privado. Esto mantiene una estrecha relación con las posibilidades asignadas a la discusión entre profanos y su importancia vital para el desarrollo de buenas y fortalecidas comunidades políticas. (Arendt,1998; Sartori,1987) De hecho, el estar fuera de la polis no solo quitaba la posibilidad de voz a los hombres, sino que se lo privaba de una cualidad política fundamental, tal como lo señalara Hanna Arendt:

“...todo el que estaba por fuera de la polis era desprovisto, no de la facultad del discurso, sino de una forma de vida en la que el discurso y solo este tenía sentido y donde **la primera preocupación primera de los ciudadanos era hablar entre ellos**”²¹

Por tanto, este supuesto de una ciudadanía idiotizada e incapaz de hacer de la reflexión crítica un insumo fundamental para la toma de decisiones, termina por hacer que el modelo se oriente hacia una visión elitista de la política. Entendida así, la democracia se torna en un juego mínimo de reglas que tienen la presunción de *fair*, solo si la clase dirigente es reclutada a partir de elecciones libres y competitivas. Esto, no obstante, implica aceptar algunos supuestos normativamente débiles. En primer lugar, debe explicar como los intereses de aquellos que no pertenecen a la clase dirigente logran ser incorporados y legitimados políticamente, pero fundamentalmente, no revela cómo podemos esperar racionalidad proveniente de un sistema institucional de toma de decisiones que depende de un conjunto de electores irrazonables, primitivos y manipulables. Esperar decisiones razonables a partir de la elección de ciudadanos

²⁰ Schumpeter, Joseph. “*Capitalismo, Socialismo y Democracia*”. Ed. Folios.1958. Pag 335.

²¹ Arendt, Hanna. “*La condición humana*”. Paidós. 1998. Pag 41.

irrazonables, es como pretender buscar un efecto sin su causa necesaria. (Offe y Preuss,1990)

En síntesis, una visión tan pesimista sobre las potencialidades de la racionalidad profana en los asuntos públicos, no puede tener otra consecuencia que no sea la expulsión de toda posibilidad de considerar la discusión argumentativa y la deliberación entre pares: **la discusión pública, por tanto, carece de sentido.**

Cabe aquí hacer una distinción. La teoría liberal, que parte de premisas normativas poco exigentes hacia el ciudadano, ha propuesto modelos democráticos que parten de la constatación de una real desafección pero sin asumir por eso el supuesto de una ciudadanía idiotizada. Estos deben preocuparse por perseguir su felicidad y su propio interés, el sistema político debe renunciar a todo intento de tomar parte o declararse confesional de una visión del bien común, y finalmente, las instituciones deben ser diseñadas de tal forma que depuren y filtren los insumos que le provienen de una ciudadanía competitiva y autointeresada para transformarlas en virtud pública. Asignándoles una posición de portador de derechos subjetivos y situando los límites de su acción en los márgenes establecidos por las normas, **los ciudadanos, en la comprensión liberal, no siempre son eximidos de responsabilidades cívicas discursivas.**²²

Un claro ejemplo de una construcción teórica a partir de supuestos liberales pero con un componente deliberativo entre sus imperativos, es la propuesta del profesor Bruce Ackerman. Con algunos puntos de contacto con la obra de A. Hirschman, sostendrá que debemos considerar esos momentos de exaltación ciudadana que impulsan al pueblo a salir de su privatismo como base para dotar de legitimidad ciertas prácticas e instituciones fundamentales de nuestras sociedades. Esta forma de considerar la legislación democrática, debe incluir esos momentos de masiva participación mediante una legislación superior diseñada para contemplar esos raros momentos en que un partido o movimiento político se gana el derecho de *hablar* por la mayoría.

²² En sentido, creo que es refutable la apreciación de Habermas de que la teoría de la ciudadanía en claves liberales exonera del diálogo público a los ciudadanos. Al otorgarles en su descripción una orientación puramente estratégica y de acuerdo a sus intereses, Habermas propone una lectura unilateral y sesgada de la teoría liberal. La misma objeción puede formularsele cuando hace lo suyo con las perspectivas republicanas y la descripción teórica de sus principales supuestos. Esto como veremos termina por omitir importantes desarrollos teóricos como el caso de Ackerman en la tradición liberal y los trabajos republicanos de Pettit, Mansbridge y Gallardo. Para la síntesis de las propuestas liberales en la obra de Habermas ver: “*Tres modelos de Democracia. Sobre el concepto de una Política Deliberativa*”. En Ágora. 1994. Nº 1. “*Facticidad y Validez*” Trotta. Op cit.

La otra punta de esta estructura constitucional dualista, tal como ha denominado Ackerman a su propuesta, la compone la legislación que es producida en esos calmos momentos de la vida política en la que no podemos hablar de un mandato claro de la ciudadanía a sus representantes. (Ackerman, 1998). Si bien la desafección no implica el primitivismo ciudadano, si sostendrá que las destrezas comunicativas de éstos en cuanto al foro público, no deben esperarse sino en esas raras excepciones de convulsión política. Además como buen liberal, y rechazando pretensiones deliberativas amplias, Ackerman entenderá que un contexto de pluralismo valorativo y de predominio de la esfera privada, tratar de pensar la presencia dialógica en los procesos de autodefinición moral resultan irrelevantes y fundamentalmente peligrosos. Este dato sin embargo no implica negar el rol que tiene el debate público y las instancias de dialogo abierto para las democracias liberales. De hecho, el hablar con otros se transforma en el imperativo primero para el hombre cuando este actúa como ciudadano:

“El dialogo es la primer obligación que entraña la condición de ciudadano...El liberalismo nos reclama reflexionar sobre el imperativo practico de hablar tanto a los extraños como a los propios; y decidir si, pese a la incomoda alteridad del otro, tenemos todavía algo razonable que decirnos en nuestros esfuerzos por vivir juntos sobre la faz de este complejo planeta”.²³

En este punto de la discusión son pertinentes preguntas como: ¿el desarrollo de ámbitos de discusión y de prácticas intersubjetivas de comunicación entre los ciudadanos, estimula la participación de estos en el espacio público? ¿aumenta, en definitiva, la racionalidad de los participantes el involucrarse en intercambios discursivos con sus pares?; ¿cuál es en definitiva, la relación entre ejercicios deliberativos y los aspectos cognoscitivos de los participantes?.

Muchos autores intentan despejar analítica e institucionalmente estas dudas. Una concepción deliberativa patrocinará una postura crítica hacia los modelos excepcionalistas liberales, señalándoles entre otras cosas, que el entender de esa forma la relación entre ciudadanía y proceso de legislación, termina por otorgar desde la teoría un margen de maniobra demasiado amplio al sistema político.

²³.Ackerman, Bruce. “*Por que Dialogar?*”. Rev. Metapolitica. Vol 2. Num 6. Pag 222.

La correlación entonces, se propone como inversamente proporcional: a mayor retiro ciudadano, mas amplio es el margen que el sistema político y las élites tienen de decidir, debilitando así las exigencias de una “accountability pública”²⁴

Por ejemplo, el inmovilismo y la desafección ciudadana son tratados desde contiendas republicanas de un modo totalmente diferente. Si bien el realismo que supone el privatismo político es innegable, la apuesta teórica se redobra al entender que mediante ejercicios reflexivos y diseños institucionales que patrocinen la deliberación pública, se puede lograr re-invitar al foro a una ciudadanía que se encuentra en las “comodidades de lo domestico”.²⁵ La visión republicana en su formato normativamente más exigente, ha venido insistiendo sobre la importancia que tiene para la calidad del proceso democrático el contar con virtudes cívicas robustecidas y una ciudadanía con buenas capacidades discursivas. El uso continuado y calificado de la discusión argumentada en los más diversos ámbitos, fomenta la participación de los ciudadanos en los asuntos político-vinculantes y proporciona estímulos eficaces a los implicados para encontrarse en el ágora. (Michelman, 1988)

Sin embargo, los prerrequisitos que se exigen de cohesión y unidad social para el desarrollo de esos objetivos se condicen mal con el contexto postradicional y pluralista de justificación en nuestras actuales democracias. Un ejemplo destacado de estas pretensiones normativamente exigentes de la tradición republicana, la encontramos en un autor como F. Michelman cuando sostiene:

“Argumentos persuasivos y discusiones persuasivas parecen irreconciliables sin una referencia conciente por parte de los implicados a su mutuo y reciproco apercibirse de ser coparticipes, no justamente de ese debate particular, sino de una vida en común mucho mas comprensiva, que exhibe también las huellas de un pasado común, dentro de la cual y partir de la cual surgen y cobran sentido los argumentos, pretensiones y demandas”.²⁶

No obstante, resulta falaz presuponer que al interior de la doctrina republicana existe un consenso acerca de esta vinculación entre deliberación, consenso social y participación

²⁴ Algunos autores han remarcado esta distancia como necesaria para el mejoramiento de los patones de legitimidad y de estabilidad democrática en un contexto de sobrecarga decisoria por parte de las administraciones. Ver Almond, G y Verba, S. “*La cultura cívica: estudio sobre la participación política democrática en cinco Naciones*” Madrid. EuroAmerica. 1965.

²⁵ El privatismo entendido como una reacción a los patrones asistenciales del bienestar es una lectura eurocentrica de la apatía. En este sentido, las *incomodidades de lo domestico*, producto de exclusiones y vulnerabilidades estructurales y que producen también apatía y desencanto, se condice mejor con nuestra realidad social .

²⁶ Michelman. F. “*Law’s Republic*”. Tomado de Habermas. J. “*Facticidad y Validez*” Op cit Pag 354

ciudadana. En esta dirección, los últimos trabajos de Cass Sustein, Philip Pettit, Javier Gallardo y de Jane Mansbridge, han demostrado que es perfectamente compatible una apelación a la deliberación democrática como una instancia capaz de revitalizar capacidades participativas, aún cuando esta deba operar bajo contextos de pluralismo, competitividad y acciones estratégicas auto interesadas.

La deliberación, de acuerdo a estas perspectivas solo puede generar actitudes participativas siempre y cuando los afectados que se involucran en las discusiones pueden apreciar los impactos de su participación en políticas concretas que transforman aspectos sustanciales de su vida cotidiana.²⁷

En estas perspectivas normativamente menos exigentes, la deliberación es asumida como una eficaz herramienta pragmática de resolución de conflictos y solución de problemas; ámbitos estos, en donde parece mostrar los mejores desempeños de razonabilidad y legitimidad. Como ha sostenido James Bohmann, precursor de los modelos pragmáticos de deliberación democrática:

“La tarea básica de la razón publica critica debe ser pensada en términos mas prácticos: el punto central de la deliberación democrática consiste en resolver los problemas sociales y solucionar los conflictos políticos. El criterio de una deliberación exitosa es, pues, la restauración de las condiciones para una continua cooperación en situaciones problemáticas”.²⁸

La deliberación también ha sido elogiada por aquellos autores, que basados en los resultados de experiencias concretas, muestran como se eleva la racionalidad de los participantes que someten sus pretensiones de validez a la crítica de otros actores.

Recientemente, varios teóricos se han ocupado del análisis de lo que han dado en llamar el “*knowledge street-level*”, es decir, las potencialidades que la racionalidad profana posee cuando en contextos precisos de toma de decisiones, se constata un aumento en la calidad y legitimidad de las decisiones si estas fueron precedidas por la discusión entre ciudadanos comunes. (Schmitter, 2004, Fung y Wrigth, 1999)

Originales experiencias institucionales en ciudades Italianas y del Brasil, en Turquía en el contexto de su incorporación a la Unión Europea, en la Sudáfrica Post-apartheid y en

²⁷ Al respecto sostiene Mansbridge -, “The most important incentive is making sure that when the group does come to a deliberate it will have as big an effect as possible on the participants’ lives” tomado de Fung, Archon “Six questions for iris Marion Young and Jane Mansbridge” En: *National Civic Review*. Pag 48. Año 2004.

²⁸ Bohman, James. “La democracia deliberativa y sus criticos”. Tomado de J. Gallardo “El dialogo en la Republica”. Polis Vol 1 N°1. 2005.

el medio este norteamericano, muestran los beneficios participativos y de legitimidad que generan la discusión profana en políticas públicas puntuales tales como, la regulación ecológica, la política educativa en escuelas, la seguridad pública, violencia doméstica, presupuestos participativos, etc.

La concepción de la Asamblea ciudadana deliberativa, propuesta por Schmitter para los países nórdicos, pensada originalmente como ámbito de discusión nacional de la legislación sancionada por los representantes, recoge las experiencias de los sondeos deliberativos sosteniendo que, la racionalidad de los ciudadanos desafía la complejidad de la toma de decisiones cuando recibe los insumos adecuados.(Schmitter, 2004).

El mismo Habermas en sus últimos abordajes sobre el tema, usa como referencias empíricas para demostrar los resultados racionalizadores que posee la deliberación pública, las experiencias con focus group de Michael Neblo y James Fiskin. Ambas contribuyen a concluir que los procedimientos institucionalizados logran generar resultados más razonables, al tiempo que reducen la polarización y acortan las brechas del desacuerdo. (Habermas, 2006).

En definitiva, las prácticas discursivas, con sus requerimientos especiales y sus límites bien precisos, parecen poder mejorar nuestras aptitudes públicas, constituyéndose en una alternativa democrática factible para la tarea de desafiar los déficit de legitimidad, fomentar la invitación al foro público y mejorar las cualidades cognoscitivas de los implicados.

2. La creciente complejidad técnica y la inmunización de los ámbitos decisorios de la discusión pública.

Los que adhieren a una perspectiva decisionista, comparten la premisa que sostiene la estrecha relación entre el aumento de la complejidad de lo político-social y la pretensión de resguardar la administración de toda intromisión deliberativa en la toma de decisiones. Solo bajo esta pauta de exclusión se puede lograr una administración eficiente, siendo este, el valor principal al que en última instancia se deben remitir los sistemas complejos. Esta correspondencia entre eficiencia y expulsión de los componentes discursivos-participativos, tiene una larga trayectoria en la teoría social y puede remontarse desde Max Weber a las teorías sistémicas de Parsons y Luhmann, pasando por los extensos trabajos efectuados por Jurgen Habermas. Este último, a partir de la senda trazada por

Weber, fue quien ha estudiado con mayor profundidad la paulatina racionalización de los ámbitos decisorios y la implantación de una racionalidad instrumental- técnica en éstos, mostrando la estrecha relación existente entre dichos procesos y el paulatino extrañamiento de la ciudadanía con respecto a lo público.(Habermas,1981, 1990)

Sin embargo, es con la obra de Niklas Luhmann que el decisionismo alcanza su punto álgido. A partir de una relectura en claves sistémicas de los procesos de racionalización, sostendrá que a los sistemas políticos y administrativos encargados de domesticar una complejidad creciente, se les impone con mayor urgencia la necesidad de establecer una separación entre las decisiones y programas específicos de acción y las eventuales participaciones discursivas de los ciudadanos.

Expuestos en forma brillante, los alcances del decisionismo de Luhmann son en este pasaje esclarecedores.

“La potencia de un sistema político para la función específica de generar decisiones vinculantes, ha de elevarse a medida que crece la complejidad de la sociedad y que tal complejidad genera problemas que ya no pueden resolverse recurriendo a verdades o a convicciones comunes, por mutua simpatía o por vía del intercambio argumentativo, sino solo ya por decisión... Y en lo que a aceptación de decisión se refiere, ya no puede basarse en determinados motivos individuales, grupales o específico de la situación, sino que ha de combinar motivos incompatibles del mas diverso tipo e igualarlos de suerte tal que se produzca una aceptación inmotivada de las decisiones individuales.”²⁹

Precisamente contra este modelo democrático, basado en la premisa de una distancia necesaria entre decisiones y participación deliberativa, es que Habermas se enfrentará a lo largo de toda su obra, reprochándole a Luhmann **el justificar normativamente la restricción sistemática de las comunicaciones que pudieran ser relevantes para una mayor legitimidad democrática.** En cierto sentido, la “*Teoría de la acción comunicativa*” puede leerse como un intento de buscar, por medio de una reubicación de la razón centrada en las potencialidades del lenguaje, las pautas necesarias para garantizar un acuerdo racionalmente motivado en un contexto democrático participativo, complejo y postradicional.³⁰

²⁹ Luhmann, Niklas. En “*Discusión con Niklas Luhmann*” Tomado de “*La lógica de las ciencias sociales*” Ed. Tecnos Pag 306.

³⁰ Señala Habermas: “La alternativa a la que me refiero es la democratización de todos los procesos de decisión importantes para la sociedad global, democratización que sustituirá por primera vez la legitimación en sentido de legitimación ficticia y que permitirá tomar la palabra a las normas de acción que pretenden validez, para verificar esa pretensión o rechazarla” Habermas Jürgen, en *Discusión con Niklas Luhmann*. Op cit Pag 400.

Sostener que para el logro eficiente de los fines propuestos, los sistemas decisorios deben estar inmunizados contra las intervenciones discursivas de los afectados, tiene implícita la premisa que la fundamentación de las normas remite en última instancia a un carácter técnico-científico y por tanto, imposible de ser discernidas por ciudadanos comunes. Un ejemplo claro de esta exoneración del debate, lo constituye el reclamo de ciertos economistas tecnocráticos que suelen ponerse nerviosos al pensar la posibilidad de que áreas relevantes de la toma de decisiones puedan ser debatibles o sujetas a controversias. Carlos Pareja retrató esto de manera excelente en un texto aún inédito y en el que discute las trayectorias económicas y su relación con la cultura política nacional:

“Como combatir una mentalidad fanática inmune a las argumentaciones y cuyas anticipaciones están sustraídas a la falsificación empírica de sus consecuencias?. No solo sería imposible encontrar un terreno de dilucidación racional de sus pretensiones sino que no habría contenido sustantivo debatible: lo que esta en juego no se prestaría a un dialogo genuino, capaz de rescatar y reformular las exigencias enfrentadas, el recurso a la ciudadanía no haría mas que confundir mas las cosas ya que esta no dispone de ningún criterio confiable para discernir entre propuestas populistas y las voces responsables que señalaban la senda estrecha y univoca de las restricciones económicas”³¹

No obstante, el problema de la complejidad también desafía a la autocomprensión democrática en lo concerniente a las capacidades y competencias cívicas que podemos esperar de los ciudadanos. En un texto poco conocido de Robert Dahl, “*The problem of civic competence*”, el norteamericano explora entre otras variables, las implicaciones que este aumento de la complejidad supone en relación con las destrezas cívicas de los ciudadanos y las posibilidades que se presentan para la participación de éstos en ámbitos decisorios estratégicos. Dahl manifiesta ciertos recelos frente al desafío que la complejidad le carga a la racionalidad del ciudadano, entendiendo que la especialización técnica y científica que las decisiones requieren en el contexto de democracias de gran escala, alejan y profundizan las brechas entre cúpulas decisorias y ciudadanía. La deliberación en esta versión, tiene intensas dificultades a sortear y requeriría de una profesionalización de los ciudadanos deliberantes así como el auxilio paternalista de expertos.³²

³¹ Pareja, Carlos. “*La cultura política uruguaya enfrentada a los dilemas económicos*” Texto inédito.

³² Señala Dahl: “As the scale of political association increases, the percentage of fellow citizen with whom one can directly engage in discussion and deliberation, necessarily shrinks. Moreover because of the greater complexity of public issues, the level of competence that a group of average citizen can achieve merely by deliberating among themselves is severely limited: they cannot themselves provide the technical information and analysis they need in order to make the competence decisions. Consequently, if deliberation is to enhance the competence of citizen and not merely ratify prevailing opinion, it will require

Varias décadas antes de la formación de Dahl, quien más se ocupó de esta relación y de la importancia que deberían adquirir robustas instancias de debate y discusión pública para la realización del proyecto democrático como autogobierno, fue el pragmatista John Dewey.

Dewey dedicó gran parte de su obra política de madurez al estudio de las posibilidades de participación pública en claves discursivas, de forma de hacer viable la noción de autodeterminación ciudadana en un contexto de creciente complejidad. (Honnet, 2002)

El concepto central manejado por el autor para esa tarea, es el desarrollo y estímulo de la cooperación social. La participación de los ciudadanos cooperativamente en ámbitos de pertenencia local y con impacto inmediato en su vida cotidiana, co-ayuda a la realización de fines en común. Además, esa multiplicidad de públicos puede a través de mecanismos de integración discursiva como la opinión pública, modificar y alterar estructuras burocráticas complejas y acercar la gestión de las decisiones al profano:

“Así inevitablemente se aleja de los intereses comunes a una clase de expertos como para convertirse en una clase con intereses privados y conocimientos privados, lo que en materia social no es conocimiento en absoluto. El voto es, como a menudo se ha dicho un sustituto de las balas. Pero lo que es mas significativo es que el recuento de opiniones, obliga primero a acudir a los metidos de discusión, de consulta y de persuasión, mientras que la esencia del recurso a la fuerza es abreviar el recurso a esos métodos...**La necesidad esencial en otras palabras, es el mejoramiento de los métodos y condiciones del debate, discusión y persuasión. Ese es el problema del publico**”.³³

La deliberación y los ejercicios discursivos en esta versión, deberían multiplicarse a lo largo y ancho de toda la sociedad civil, tratando de revitalizar una tradición que es cara a los norteamericanos, a saber, la formación de públicos locales y municipales. De acuerdo con Dewey, solo a través de ellos y su fortalecimiento, es que resulta posible producir el retorno en democracias complejas y tecnificadas de la lógica de “la gran comunidad”, una verdadera apología de la democratización sustentada en las bondades democráticas de la política local³⁴.

Hoy en día Archon Fung, un joven académico de Harvard, es quien retoma la tradición deliberativa del pragmatismo norteamericano de John Dewey. Este ha venido trabajando

the participation of expert. Here again, the institutions of democratic countries seem to me inadequate” Dahl, Robert: “*The problem of civic competence*” En *Journal of democracy*. Vol 13. pag 53.

³³ Dewey, John. “*El publico y sus problemas*” Ed Ágora. 1958. Pag 165.

³⁴ Al respecto afirma: “¿es posible restablecer la realidad de las organizaciones locales menores y penetrar y saturar sus miembros con un sentido de la vida comunal?...La democracia debe empezar en el hogar y su hogar es la comunidad amigable del buen vecino” Dewey, John. Op cit pag 168.

sobre la flexibilización de los aparatos administrativos, mostrando como la descentralización del poder de estos en gestiones básicamente de política local y a través de consejos deliberativos, aproxima la democracia a la noción de autolegislación en claves discursivas que Dewey propugnaba (Fung, 2001; Fung ; 2004).

La complejidad en la toma de decisiones no es ignorada pero se redoblan los esfuerzos por tratar de domesticarla y hacer que no se convierta en un obstáculo para la construcción de una democracia participativa. Fung ha venido insistiendo además, sobre el componente “revolucionario” que toda comprensión deliberativa de las instituciones posee cuando trastoca nociones claves como, soberanía popular, autolegislación y participación democrática. (Fung, 2006). Ciertamente, su modelo de *“Deliberación por mandato”* constituye un serio intento de construir diseños institucionales, en los que el componente deliberativo es una de las tres aristas, (junto con la descentralización y la participación), y que aplicadas a instancias locales de decisión muestran un rendimiento mas que aceptable en cuanto a los logros en la racionalidad de los participantes, en los caudales participativos y por tanto, en la legitimidad de las decisiones. (Fung y Wright,; 1999).

3. El problema del método democrático y la toma de decisiones.

Me ocuparé ahora de la discusión que los defensores de la democracia deliberativa han sostenido con las teorías racionales de la elección social. Estas últimas han sido protagonistas de un desarrollo vertiginoso en el análisis de la toma de decisiones y gran parte de la literatura sobre la deliberación está hoy concentrada en las controversias entre ambas perspectivas. El objetivo principal de este apartado es examinar cuáles han sido las objeciones fundamentales que estas visiones han realizado a los procesos de toma de decisiones en un contexto democrático y presentar las principales respuestas deliberativas a éstos.

Para una mejor exposición de los diferentes argumentos presentaré por separado tres modelos emblemáticos pertenecientes a esta tradición teórica. En primer lugar, me centraré en los desarrollos analíticos propuestos por Kenneth Arrow y su teorema de la imposibilidad, en segundo lugar abordaré la lectura politológica que de la obra de éste realizó William Riker y finalmente, los estudios teóricos de Austen-Smith sobre la comunicación estratégica y los problemas de la decisión en los ámbitos deliberativos. (3.1). Presentados en líneas generales sus principales argumentos, expondré luego las críticas fundamentales que desde contiendas deliberativas se le han realizado a cada uno

de estos modelos explicativos. (3.2.) Finalmente, concluyo el apartado con un breve excursio en el cual propongo que las objeciones se deberían concentrar en al menos tres de los presupuestos centrales en los que se sustentan estos enfoques.

3.1. Los desafíos de la teoría racional de la elección social en las visiones de Kennet Arrow, William Riker y los modelos de comunicación estratégica de Austen Smith.

La segunda mitad del siglo XX fue escenario de algunos golpes maestros a las teorías de democráticas que se erigían con pretensiones normativas exigentes, tanto en las virtudes esperadas del ciudadano así como en la capacidad del proceso para generar procesos de virtud y de transformación moral sustantiva.

La democracia, como vimos a partir de la obra de Schumpeter, ya no podría respaldarse en ningún atributo enaltecedor en cuanto al ámbito de la moralidad ni tampoco podía partir de requisitos de virtuosidad de sus ciudadanos. Las deficiencias cognitivas de éstos cuando operan en el ámbito de lo público y el carácter potencialmente manipulable de las preferencias en la instancia de su formación, llevó a la conclusión que la democracia debería renunciar a la pretensión de aspirar a ser algo más que un instrumento de captar elites. Por esta razón, la lógica del foro publico debía importar desde el mercado su racionalidad específica a fin de generar resultados óptimos en lo que concierne a lo publico- político. (Elster, 1997). Como ha sostenido Félix Ovejero, para las concepciones instrumentales de las democracias post –schumpeterianas:

“...la democracia no sería otra cosa que un instrumento imparcial, un conjunto de reglas que permite traducir muchas voluntades en pocas, una función matemática que tiene como dominio las preferencias de los individuos y como rango una voluntad general”.³⁵

Sin embargo, esta pretensión de reducir las exigencias democráticas a un procedimiento capaz de poder lograr una voluntad general a través de la suma de preferencias, terminó por desmoronarse ante dos verdaderos golpes de *knoc-out* dados por la aparición del teorema de la imposibilidad del premio Nóbel Kennet Arrow y posteriormente, por la lectura politologica que hizo de éste William Riker en su “*Liberalism against Populism*” Comencemos en primera instancia por los desarrollos analíticos de Arrow.

³⁵ Ovejero, Felix. “*Teorias de la democracia y fundamentaciones de la democracia*”. Doxa. N°19. 1996. Pág. 314.

La imposibilidad demostrada en su teorema, se basa en la constatación de que no existe un mecanismo que simultáneamente se enfrente a un conjunto de criterios normativos inobjetables y además produzca decisiones colectivas coherentes, sin evitar que un individuo imponga sus propias preferencias y se constituya de esta forma en un dictador. El insumo clave para su fundamentación se respalda en la ya conocida paradoja de la votación de Condorcet. El mayor logro analítico del francés fue demostrar que en determinados escenarios, la votación mayoritaria podía producir mayorías cíclicas por las cuales el requisito de la transitividad es violado y como consecuencia, habilitaba la institucionalización de la incoherencia en los procesos de toma de decisiones. Partiendo de las mismas preferencias individuales, el método de agregación mayoritaria produce diferencias sustanciales en los resultados.

Así, en un escenario con tres votantes y tres opciones a decidir podría suceder lo siguiente: que el votante 1 prefiera la opción x a la y y la y a la z , en tanto el votante 2 prefiere la y a la z y la z a la x y finalmente el votante 3 prefiere la z a la x y la x a la y . En este escenario la opción x logra la mayoría frente a la opción y , la cual obtiene la mayoría con respecto a la opción z y esta a su vez obtiene la mayoría frente a la opción x . De esta manera, se viola el criterio de transitividad y se produce una incoherencia en los resultados. El aporte fundamental de Arrow en este sentido, es sostener que cualquier método de agregación de preferencias, y no solo el de la mayoría, que respete los requisitos de transitividad, dominio universal, independencia de las alternativas irrelevantes y ausencia de dictadura, son imposibles partiendo de las preferencias individuales. En palabras del propio Arrow:

“If we exclude the possibility of interpersonal comparisons of utility, then the only methods of passing from individual tastes to social preferences which will be satisfactory and which will be defined for a wide range of sets of individual orderings are either imposed or dictatorial”³⁶

Como consecuencia de sus hallazgos, este teorema y su demostración promovió una serie de lecturas acerca de las posibilidades y expectativas que podríamos esperar de la democracia a la hora de pensarla como el ámbito privilegiado de la formación de una voluntad común. Claramente el desencanto fue ganando espacio y tal vez sus aportes fueron la piedra de toque para la fundamentación, de lo que se podría denominar, la

³⁶ Arrow, Kenneth. “Social Choice and Individual Values”. New Haven. 1963. Pag.59.

“ciencia del pesimismo democrático” (Ovejero,1996). Como un ejemplo ilustrativo de las múltiples reacciones que la aparición del teorema de la imposibilidad supuso para la reflexión democrática, este pasaje de Mashaw resulta esclarecedor:

“At it most extreme, Arrowian public choice predict that literally anything can happen when votes are taken. At its most cynical, it reveals that, trough agenda manipulation and strategic voting, majoritarian processes can be transformed into the equivalent of a dictatorship. In a more agnostic model, it merely suggests that the outcomes of collective decisions are probably meaningless because it is impossible to be certain that they are not simply an artefact of decision process that has been used”.³⁷

Pero tal vez de todas estas lecturas, la más polémica ha sido la efectuada por William Riker en su *“Liberalism against Populism”*. Partiendo de la premisa de que diferentes métodos de agregar preferencias producen resultados sociales diferentes, concluyó que la votación (tal vez el principal mecanismo democrático), debía afrontar dos graves inconvenientes que resultan endémicos al proceso mismo de votación y a los cuales denominó, el problema de la inestabilidad y de ambigüedad respectivamente.

Por una parte, la inestabilidad imputada por Riker a los mecanismos agregativos sostiene que, bajo ciertas condiciones, la votación puede generar ordenamientos sociales cíclicos y no transitivos. Sobre la base de esta indeterminación, que parece resultar inherente al mecanismo, Riker sostendrá que mediante la utilización estratégica del voto, el control de la agenda que precede a la votación y la introducción de nuevas temáticas, **los resultados obtenidos caigan siempre bajo la sospecha de la manipulación**. (Riker, 1982). Se suma a esta razón, dada la imposibilidad de conocer las preferencias ultimas de los participantes, el saber cuando un resultado es producto o no de una manipulación predeterminada.

En tanto, la ambigüedad como segunda dificultad atribuida por Riker a los métodos de agregación, implica que los resultados de las votaciones están estrechamente vinculados a los procesos por los cuales los votos son contados.

De esta forma, la votación, un aspecto decisivo de nuestro proceso político democrático, es a la luz de estas conclusiones un dispositivo que lejos de ser neutral y representativo

³⁷ Acerca de la influencia de Riker sobre los posteriores desarrollos de la ciencia política y su influencia sostiene Dryzek “...The most influential social choice theorist alter Arrow is Wlliam Riker, who is also founder of the Rochester School of Rational Choice theory, wich now dominates the pages of the American political science . Riker radicalized social theory to attack any notion of authentic democracy, particularly what he called “populism”. Tomado de Mackie, Garrie. “ *The democracy Defended*” Cambridge Press. 2003

de las preferencias de los afectados, termina por traducir serios elementos de tergiversación de las voluntades iniciales. Así planteado, Riker concluye que la noción misma de una voluntad popular carece de sentido y toda teoría que se sustente sobre esta pretensión resulta inevitablemente en una apelación populista de las bondades de la democracia.

“When there exist a modest diversity of preferences which is after all, the bare necessity for political controversy, then cycles are ubiquitous – there are “too many majorities”. The actual social state chosen by the legislature is determined not by some process that yields an alternative presumably better than all the rest, but by the order in which the alternative arise for a vote. The absence of equilibrium implies that the person in control of the agenda can bias legislative choice in favour of his or her most preferred alternative. Thus, there is a fundamental arbitrariness to social choice under majority rule...Similarly, strategic voting, typically secret, is always possible. Although strategic voting occurs often, it is hard to discover...**All of this shows that the notion of a “will of the people” has no meaning.**”³⁸

No obstante, estos desarrollos teóricos efectuados por las teorías racionales de la elección social han provisto paradójicamente a los defensores de la deliberación con argumentos eficaces para criticar las perspectivas centradas únicamente en la agregación de preferencias. Si los mecanismos de votación y suma de voluntades agotan el proceso democrático y estas son plausibles de manipulación y afrontan problemas endógenos de incoherencias en el proceso mismo, entonces dichas constataciones abonarían la idea de que las instituciones deberían ser complementadas con la consolidación de lógicas deliberativas y de intercambios discursivos previos a la toma de cualquier decisión.

Como han sostenido Knight y Johnson, los desarrollos de estas teorías deberían generar un doble aprovechamiento por parte de los teóricos de la deliberación en su esfuerzo de mostrar las debilidades a las que se enfrenta todo procedimiento de agregación de preferencias. Por una parte, provee insumos relevantes para la crítica de los modelos puramente agregativos y por otra parte permite a los defensores de la deliberación clarificar los obstáculos y debilidades de sus propios argumentos. En este sentido, todos los esfuerzos analíticos de los teóricos de la discusión deberían estar volcados al estudio de cómo pueden evitarse en los arreglos deliberativos, aquellas dificultades que resultan

³⁸ Riker, William “*Constitutional Regulation of Legislatives Choice*” Virginia Law Review.372-402. 1986.

inherentes a los mecanismos de agregación de preferencias. (Knight y Johnson, 1994; Johnson, 1998)

Sin embargo, los primeros esfuerzos por estudiar cuales eran las dificultades a las que se enfrentaban los mecanismos deliberativos partieron desde la misma teoría racional de la elección social en su variante de los modelos de interacción estratégica. En este sentido, los esfuerzos teóricos de Austen Smith se han orientado a demostrar, a través de los insumos metodológicos utilizados por Riker y Arrow, que podemos imputarle a la deliberación el efecto similar a los producidos por los mecanismos agregativos.

Cuestiones como el control del orden oratorio, la introducción de nuevos debates y la utilización del voto estratégico en las asambleas, hacen que la deliberación sea susceptible de padecer las mismas inestabilidades endógenas de los arreglos agregativos. A través de un lenguaje riguroso y de instrumentos analíticos de carácter lógico deductivos, los modelos de comunicación estratégica de Austen- Smith intentan demostrar los atolladeros a los que el uso instrumental del habla se enfrenta. (Austen –Smith, 2006; Dimitri Landa y Catherine Hafer, 2006).

3.2. Las debilidades de los modelos instrumentales y la crítica deliberativa a la teoría racional de la elección.

Estos tres desarrollos teóricos proveniente de la teoría racional de la elección social han sido blanco de duras críticas. Desde la carencia de realismo de sus premisas de trabajo a la irrelevancia empírica de sus principales postulados pasando por la fundamentación normativa de modelos autoritarios de convivencia política, las críticas recorren el más amplio espectro de la teoría política y social. Sin embargo, aquí me concentraré únicamente en las críticas que fueron esgrimidas desde contiendas deliberativas, quedando fuera de estas páginas importantes argumentos críticos que se sostuvieron desde otras tradiciones teóricas.

Una objeción fundamental con la que se carga a estas perspectivas bajo un formato deliberativo, parte de sostener que los arreglos agregativos carecen de los recursos morales requeridos para generar mayor legitimidad de las decisiones y de las instituciones encargadas de tomarlas. (Offe y Preuss, 1998; Ovejero, 1996, Gallardo, 2005)

En esta dirección, algunos autores han insistido en que la posibilidad de que los diferentes mecanismos de agregación tienden a generar diferentes resultados (dadas unas preferencias iniciales iguales), es estrictamente hablando, irrelevante para la cuestión de

si los resultados obtenidos deben o no ser *justificados*. Precisamente, esta pretensión de relativizar todo componente de justificación, constituye una de las principales críticas, que entre otras, le imputa Félix Ovejero a estas perspectivas:

“...la fundamentación instrumental a) subordina la fundamentación al valor que sirve para fundamentar y con ello desprovee a la democracia de contenido moral, b) no establece una vinculación fuerte, necesaria, entre democracia y moralidad, c) reconoce la pertinencia de la pluralidad pero al precio de asumir un relativismo incondicional que hace imposible el discurso moral...d)[finalmente] el irrealismo empírico de los presupuestos implícitos en la idea de individuos que eligen según sus preferencias”³⁹

En lo que concierne específicamente a la crítica al teorema de Kenneth Arrow y su principal tesis, esto es, la imposibilidad de lograr un mecanismo que simultáneamente se enfrente a un conjunto de criterios normativos inobjetables y además produzca decisiones colectivas coherentes, ha sido refutado desde diversas teorías y de acuerdo a diversas estrategias. Algunas de ellas buscan relativizar sus hallazgos a partir de debilitar algunos de los criterios normativos que el autor propone como inobjetables y otros en cambio apelan a desafiar las premisas mismas sobre las que se levanta el modelo. Un ejemplo de la primera estrategia es la formulada por James Johnson al sostener que la imposibilidad que postula el teorema de Arrow se vería debilitada si atenúamos el efecto de dominio irrestricto, a saber, el hecho que resulta inadmisibles cualquier restricción previa del contenido de las preferencias.

“Si eliminamos una de las condiciones suprimimos la imposibilidad y como resultado, eliminamos una base principal del tipo de escepticismo que sostienen y otros defensores de la deliberación expresan acerca de la factibilidad de los dispositivos agregativos. De modo que, en el caso que nos ocupa, moderar o eliminar la condición de dominio irrestricto redundaría en un avance significativo hacia la disminución del escepticismo”⁴⁰

Pero aun así, esta sería una jugada teórica arriesgada. Lo es, en tanto cualquier intento que se oriente a disminuir las dificultades del mecanismo agregativo por medio de la restricción del contenido de las preferencias de los afectados, debilitaría el compromiso normativo de la inclusión que constituye un prerrequisito básico de toda fundamentación deliberativa de la democracia.

³⁹ Ovejero, Félix. Op cit. Pág 324.

⁴⁰ Johnson, James. “Argumentos a favor de la deliberación. Algunas consideraciones escépticas”. Tomado de Elster, Jon. (Comp). *La democracia deliberativa*. Gedisa. Pág 211.

Un tratamiento excelente de las limitaciones del teorema de Arrow basado en estrategias del segundo tipo, esto es, objetar las bases mismas sobre la que sustenta el modelo, es la presentada por el también premio nóbel Amartya Sen. Para el autor, la imposibilidad del teorema es debilitada si ampliamos las bases de información de quienes participan en la decisión. **Es empíricamente contrastable el hecho de que las principales decisiones económicas y sociales se apoyan únicamente en ordenaciones individuales de las opciones relevantes y en cambio otras fuentes de información apartes de estas resultan determinantes en el proceso decisorio.** (Sen, 2002)

Precisamente, sin negar la brillantez del teorema de Arrow, Sen sostendrá que el debate público y la deliberación previa a la toma de decisiones relevantes, adquiere un papel fundamental al someter a las preferencias individuales a un proceso de revisión de sus bondades y limitaciones. Los ámbitos tomadores de decisión no solo se sustentan en las preferencias dadas como insumos claves, sino que apelan a aquellas preferencias que han sido sometidas a una previa deliberación, en donde el intercambio de razones y argumentos cobran especial importancia:

“Las políticas de consenso social no solo requiere que las decisiones se basen en unas preferencias individuales *dadas*, sino también que las decisiones sociales sean sensibles al desarrollo de las preferencias y las normas individuales. **En este contexto, hay que conceder especial importancia al papel del debate público y de las interacciones sociales en la formación de unos valores y compromisos compartidos**”.⁴¹

Pero más que con el teorema de Arrow, las críticas más duras desde las contiendas deliberativas se han concentrado en los postulados teóricos de William Riker.

Gerrie Mackie, por ejemplo, formula claras objeciones al autor de “*Liberalism against Populism*” en una doble estrategia que incluye; por un lado objeciones de índole teóricas en referencia a los supuestos de los que parte su obra y por otro lado, arroja duras críticas al autor por las consecuencias que una teoría de ese tipo tiene para la autocomprensión democrática en tanto ámbito de moralidad pública. Como un muestra de esta última, Mackie le imputa a Riker que mas allá que sus postulados teóricos son refutables y empíricamente incorrectos (como veremos mas adelante en su formulación), sus escritos trascienden la discusión académica y **terminan por aportar una justificación**

⁴¹ Sen, Amrtya . “ *Desarrollo y Libertad*” Capitulo 11. “*Elección social y conducta individual*” Pag 4. Editorial Planeta. 2002.

normativa de regimenes no democráticos en donde se privilegian los valores de la estabilidad y el orden público.⁴²

En cuanto a las críticas específicas referentes al contenido teórico de los supuestos Rikerianos, Mackie le realiza tres impugnaciones fundamentales. En primer lugar, a la afirmación de que distintos ordenamientos de agregación producen diferentes resultados partiendo de unas preferencias iniciales iguales, Mackie argumenta que esto no se sostiene cuando existe una ligera similitud en el orden de las preferencias de los que participan del proceso. En segundo lugar, las conclusiones derivadas de la paradoja de Condorcet en el que se apoyan los argumentos de ambigüedad sostenidos por Riker, resultarían razonablemente improbables cuando se constata también una similitud de las preferencias⁴³. Finalmente, el control de la agenda del día y la utilización estratégica del voto en las asambleas carecen de relevancia empírica. . Ciertamente, esta falta de realismo de los postulados teóricos propuestos por Riker, Mackie lo demuestra al objetar 16 de los casos empíricos en los que Riker sustenta su argumento de como la votación estratégica y el control de la agenda confirman la tesis de la manipulabilidad de los resultados. (Mackie, 1998, 2003).

En tanto, los modelos de comunicación estratégica de Austen –Smith y en particular su tratamiento sobre los problemas endógenos que afrontan los actos de habla estratégica, también son objetados tanto en la pertinencia de sus premisas así como en la carencia de realismo de sus conclusiones. Las propuestas de Austen –Smith, Dimitri Landa y Catherine Hafer entre otros, parten de sostener que los oradores en un foro público están determinados por una orientación estratégica de su acción y por tanto quienes hagan uso de la palabra, harán afirmaciones verdaderas o falsas acerca de sus preferencias y deseos en tanto sirvan a la consecución de un objetivo preestablecido.

A partir de esto se infiere que la comunicación pública en un foro deliberativo no es creíble, y que por tanto, existen poderosos estímulos al engaño y a la restricción de la

⁴² En este sentido Mackie sostiene: “The proposition that democratic voting is arbitrary and meaningless can be used not only to justify a constitutional libertarianism Such as Riker’s, it can also be udes to justify a dictatorship that appeals to the values of stability and order...I worry that authoritarian movements might find comfort in Riker’s irrational credo”. En Mackie, Gerrie. “*Democracy Defended*” Op Cit Pag 4

⁴³ Paramio en cambio basa su critica a los mecanismos de agregación, no basándose en la posibilidad de la similitud de estas sino en las serias dificultades de agregarlas cuando se multiplican las identidades colectivas. Paramio, L. “ *Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de preferencias*”. Revista Española de Ciencia Política. N° 1. 1999.

información privada. Consecuentemente, aquella objeción que le imputaba a los mecanismos agregativos el hecho puntual de quien controla el orden de la votación podría eventualmente manipular los resultados obtenidos, también valdría para los arreglos deliberativos en los foros públicos, en que la alteración del orden de los oradores en una asamblea, eventualmente podría modificar los resultados esperados del debate.⁴⁴

No obstante, será a partir de estas premisas que asumen los esquemas de interacción estratégica del habla, que Mackie le formulará cuatro objeciones fundamentales:

En primer lugar sostiene que en los contextos de interacción política no es posible partir del supuesto de una interacción única, esto es, un acto de habla entre un emisor y receptor que establecen un vínculo comunicativo en una sola ocasión. Los foros públicos de discusión y toma de decisiones se sustentan en comunicaciones reiteradas entre varios actores y por un periodo de tiempo que puede ser prolongado de acuerdo a la característica de cada espacio dialógico.

En segundo lugar, al anular el supuesto de la interacción única y partir de que las comunicaciones entre actores suelen ser reiteradas, **la reputación del emisor queda seriamente comprometida**. En este sentido, Mackie afirmará que toda información dada por un emisor puede ser verificada posteriormente al acto de haberla recibida y en el caso de que la decisión a tomar haya dependido de la veracidad de la información en cuestión, existen métodos fehacientes para saber si ésta al final resultó falsa o no. La información privada brindada bien puede ser falsa, pero tras una votación adversa luego de tomada la decisión en base a datos engañosos, nos permitiría descubrir el engaño y por tanto sentar precedente sobre la calidad de los insumos de información que adquirimos previo a la toma de una decisión.

En tercer lugar, el supuesto de un emisor único se contradice con la práctica política corriente en los foros deliberativos, en donde a la hora de tomar una decisión la base informativa previa suele provenir desde diversos ámbitos y actores.

Como sostiene el autor:

⁴⁴ Una buena síntesis de los modelos estratégicos de habla en los foros deliberativos se encuentran en Austen-Smith y Feddersen, Timothy “*Deliberation, Preference Uncertainty and voting rules*” Northwestern University. 2005. Sobre los constreñimientos que producen las normas que regulan los debates públicos y su efecto sobre la calidad de las informaciones que se brindan ver: Hafer, Catherine y Landa, Dimitri. “*Rules of Debate*” Conference on Deliberative Democracy “ Princeton University. 2006.

” la presencia de múltiples emisores con intereses opuestos puede forzar a una disciplina de veracidad entre ellos, porque cada uno tiene un incentivo para corregir al otro...**la sospecha siempre vigila las practicas del interés**”⁴⁵

Finalmente, el modelo es refutado empíricamente por numerosos experimentos controlados en toma de decisiones que hacen caer la hipótesis de que los individuos solo se comunican sustentados en una racionalidad estratégica e instrumental. (Mackie, 1998). Una misma clase de objeción de los postulados por su no contrastación con la realidad la expresa el mismo Jurgen Habermas. En un texto reciente, sostiene que aun pese a la tesis que devalúa los procedimientos democráticos de elección y toma de decisiones, los ciudadanos aun siguen participando y acudiendo a ámbitos en donde seria plausible la tergiversación de los resultados como en el caso de una corte judicial o elecciones democráticas. Los potenciales cognitivos de la deliberación sobre las preferencias primeras superan su formulación en un plano ideal (siempre restrictivo y acotado) y es posible de ser verificada en casos empíricos concretos. (Habermas, 2006)

Tres comentarios últimos sobre este aspecto. Mas allá de la relevancia que pueda tener la discusión en los términos que anteriormente se planteó, entiendo que los defensores de la deliberación yerran el camino en tanto no pongan en cuestión, los supuestos mismos de los que parte la teoría de la elección social. **Agentes racionales que maximizan su beneficio y evalúan los cursos de acción en base a una estrategia de beneficios y pérdidas, resulta una simplificación significativa de las motivaciones de los agentes en la acción pública.** Como señala Elster:

“Buena parte de la teoría de la elección racional, con su supuesto de una conducta universalmente oportunista, simplemente parece fuera de contacto con el mundo real, en el cual se da una buena dosis de moralidad y sentido del deber. Si los individuos emprendiesen conductas de tipo oportunistas siempre que pudiesen salir adelante con ellas, no existiría la civilización tal como la conocemos”⁴⁶.

En cambio, una estrategia diferente la encontramos en los desarrollos teóricos de Habermas y el Rawls del “*Liberalismo Político*”, en la que ambos autores contemplan una alternativa a esta estrechez de la mirada racionalista ampliando el concepto de

⁴⁵ Mackie, Gerrie. “ *Todos los hombres son mentirosos: ¿carece de sentido la democracia*”. En Elster , Jon. “Democracia deliberativa”. Op cit. Pag 116.

⁴⁶ Elster, Jon. “*The possibility of Rational Politics*”. Tomado de Habermas, J. “*Facticidad y Validez*”. Trotta 1992. Pag 416. En esta dirección Amartya Sen esgrime un argumento similar cuando sostiene: “¿Qué ocurre con la tesis de que los seres humanos son inflexiblemente interesados?. Creemos que ese escepticismo es injustificado. El interés personal es un motivo extraordinariamente importante pero sin embargo, que hay actos que reflejan valores que tienen componentes sociales y que nos llevan mucho más allá de los estrictos confines de la conducta egoísta”. Sen Amartya. “*Desarrollo y Libertad*”. Cap 11.Op Cit. Pag 9

racionalidad a la capacidad que disponen los agentes de cooperar. Mientras que Habermas presenta un concepto de racionalidad que antepone a la acción estratégica o instrumental, una acción orientada al entendimiento basada en la cooperación lingüística entre agentes que buscan el logro de acuerdos razonables, en el Rawls del Liberalismo Político se presentara la categoría “razonable” como una capacidad moral de los agentes que los motiva a la cooperación en contextos de pluralismo razonable.⁴⁷

En segundo lugar, entiendo que aporta poco al debate una discusión en términos de suma cero, quiero decir, no se trata de enfrentar la deliberación a los mecanismos de votación y que por tanto, la opción por uno implique la exclusión del otro. Como ha sostenido recientemente Philip Pettit, toda concepción deliberativa lleva en si incluidos componentes típicamente agregativos y es indisociable de ellos. (Pettit, 2006). **Ciertamente, los componentes utópicos de los modelos deliberativos se potencian cuando ignoran la relevancia de arreglos agregativos en el seno de los diseños institucionales.** En esta dirección, Javier Gallardo ha sostenido una visión del republicanismo atenuado en donde si bien otorga un rol fundamental a la deliberación en tanto fuente de legitimación y de virtudes epistémicas que aporta a las decisiones, no descarta la relevancia que poseen los procesos adversativos y de disputa política sin perspectivas de consenso y que hacen a la vida política de una comunidad democrática plural.

El dilema entre una y otra opción resulta falaz y en cambio, nuestros esfuerzos analíticos deben concentrarse en como generar diseños institucionales que contemplen en sus estructuras, las virtudes de ambos arreglos y logren resguardarse contra sus principales deficiencias:

“ El dialogo en la republica estaría en condiciones de habilitar, en fin de cuentas, una complementación dignificadora de los procedimientos de disputabilidad política con las normas y las reglas de una discusión argumental, en la medida en que logre conjugar ambos elementos como una permanente recreación del habla y la comunicación políticas, como una abierta y productiva contrastación publica del mas amplio espectro de opciones y practicas sociales, reforzando, mas que recortando, la autonomía y el poder común de los ciudadanos.”⁴⁸

⁴⁷ Al referirme al segundo Rawls lo hago en consideración al giro hecho por el autor en Liberalismo político, en donde corrigió algunos supuestos de su “*Teoría de la Justicia*” agregando la categoría “razonable” como capacidad de cooperación de los agentes que se encuentran en la posición original. Este tema será clave en la próxima sección.

⁴⁸ Gallardo, Javier. “ *Dialogo en la Republica*”. Op cit Pag 85.

Por ultimo, entiendo que **el talón de Aquiles de las concepciones agregativas de la democracia sigue siendo la aceptación del supuesto de tomar las preferencias de los agentes como dadas y externas al proceso político.** Es contundente el argumento que sostiene que en espacios de libre discusión, circulación de información y actores dirigidos por una racionalidad que privilegia el entendimiento, pueden resultar en transformaciones significativas de las preferencias. Pero aún así, no se trata de exaltar las bondades de la deliberación al costo de minimizar y resguardar su análisis de los potenciales problemas a los que se enfrenta. La deliberación produce resultados normativos deseados solo si se realiza bajo determinados requisitos y en ámbitos adecuados y resulta normativamente necesaria, que sea previa a cualquier instancia que termine en una votación.

Pero también es cierto, y hay para eso argumentos concluyentes, que los ejercicios deliberativos no están exentos de distorsiones y problemas normativos. Entre ellos cabe destacar, las importantes asimetrías sociales, culturales y de recursos, que son muchas veces esgrimidas como causantes de severas distorsiones en los intercambios argumentativos y pueden producir efectos no deseados en sus resultados. (Young, 1991; Sanders, 1997; Gambetta, 1998,).

La tarea fundamental sigue siendo entonces, en reflexionar como la deliberación puede evitar a través de precisos diseños institucionales, esas dificultades a la que los mecanismos agregativos le resultan inherentes.

Como un claro ejemplo de estos esfuerzos analíticos se encuentran las reflexiones de Phillip Pettit. Este autor de corte republicano muestra que aun si partiéramos no de las preferencias iniciales de los agentes sino de los juicios razonados en cuanto a algún problema a decidir, la democracia deliberativa se enfrenta a problemas de consistencia y de agregación de dichos razonamientos. Tal es núcleo central de lo que Pettit ha dado a llamar “el dilema discursivo” y que ocupa parte de las reflexiones del próximo apartado.

4. La consideración de la autonomía de los agentes y el carácter dado de las preferencias.

Una de las objeciones mas compartidas por los defensores de la deliberación democrática hacia los modelos competitivos agregativos es la consideración que estos hacen de las preferencias abordándolas como algo dado y exógeno al proceso político mismo. De todos los desacuerdos trabajados hasta aquí, tal vez el status de las preferencias por la que optan una y otras perspectivas (tanto en su proceso de formación así como en el la expresión pública de éstas y su posterior problema de agregación) resulte en la principal

línea divisoria que separa ambas teorías de la democracia. (Ovejero,1996). Mientras que las concepciones de corte agregativo se inclinan por reducir el proceso democrático a la agregación de estas tomándolas como ya dadas, los defensores de la deliberación democrática logran consensuar en la importancia pública de su formación y la relevancia que adquiere su expresión en lógicas de corte comunicativo.

Para comenzar, el carácter dado de las preferencias como insumo fundamental del que debe partir todo proceso político es visible en la definición que Robert Dahl nos brinda en su obra *“La Poliarquía”*, en la que sostiene:

“Para mi el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de los ciudadanos, sin establecer diferenciaciones políticas entre ellos.... Creo que para que un gobierno responda durante un periodo de tiempo dado a las preferencias de sus ciudadanos sin distinciones políticas, todos ellos deben tener igualdad de oportunidades para: a) Formular sus preferencias, b) Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno, individual y públicamente, c) Recibir por parte del gobierno igualdad de trato, es decir, este no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales preferencias.”⁴⁹

Esta pretensión de validar las respectivas preferencias como externas al proceso político no está exenta de problemas. De acuerdo a esta perspectiva, las instituciones deben procesar las preferencias tomándolas como ya dadas, no reparando en el potencial transformador que ejercen los ámbitos públicos de discusión. Es razonable deducir que un sistema construido en base a estos prerrequisitos, se vea mermado en su capacidad deliberativa y por tanto la democracia se reduzca a la consideración de procedimientos imparciales que logren agrupar las preferencias bajo criterios de neutralidad. Detrás de estas consideraciones, se encuentra una concepción de la autonomía política que presupone que el proceso por el cual alcanzamos una preferencia se produce en aislamiento, guardando este proceso una clara semejanza con la formación de nuestros juicios morales primarios tal como lo considero Kant. Sin embargo, esta comprensión de la autonomía lograda a través de un yo aislado y racional es refutada por autores que sostienen la intersubjetividad de toda formación democrática de la voluntad y en el que el pleno goce de la autonomía se realiza en los intercambios argumentativos razonables entre los afectados. (Habermas, 1992; Nino; 1988).

⁴⁹ Dahl, Robert. *“La.Poliarquía”* .Tecnos. 1971. Pag 14.

Sostengo por tanto, que la idea que subyace a toda consideración discursiva de la democracia es considerar a las decisiones vinculantes como una variable dependiente del proceso deliberativo, en que no solo el ejercicio continuado e institucionalizado de esta le otorga legitimidad, sino que le aporta la presunción de racionalidad dialógica, ausentes ambas en los modelos de formación de preferencias basados en la autonomía moral del sujeto. En ese sentido es claro Habermas cuando expresa que:

“...las preferencias que los individuos manifiestan cuando se les pregunta por sus preferencias, en modo alguno reflejan fiablemente las preferencias que estos efectivamente tienen, si por preferencias se entienden las que manifestarían tras sopesar las informaciones y razones pertinentes. Pues el cambio político de valores y actitudes no es un proceso de adaptación ciego sino mas bien resultado de una forma constructiva de la opinión y la voluntad”.⁵⁰

Pero es a partir de estas consideraciones que resulta tentador asignarle al intercambio discursivo el rol transformador de las preferencias, condición ésta que resultaría inherente a la naturaleza misma del proceso discursivo. (Della Porta, 2004). Ciertamente, si consideramos estrictamente la función retórica de todo acto de habla, no debemos dejar de subrayar que también se esta buscando lograr convertir las nociones primeras de los participantes y procurar cambios en la opinión de estos. (Perelman, 1989). Las tesis que consideran los potenciales transformadores de lo dialógico, señalan que resulta posible desde puntos de vista teóricos y conceptuales asumir que el uso deliberativo aspira a cambiar las preferencias de los miembros y de esa manera reducir el desacuerdo, fomentando el logro de consensos en contextos de pluralismo competitivo.⁵¹

Pero esta apelación a un consenso a través de la persuasión discursiva, sostiene una versión lo suficientemente abstracta de las posibilidades del acuerdo y resulta especialmente problemática en las condiciones pluralismo valorativo.

⁵⁰ Habermas. “*Facticidad y Validez*” Op Cit Pag 415. Con respecto a como la información y la consideración de diversas razones afectan la naturaleza de las preferencias iniciales ver Cohen, Joshua “*Democracia y libertad*”. Op Cit. Pag 253 ss.

⁵¹ La transformación de las preferencias es un componente implícito en las definiciones de argumentación y esta tesis lo acepta como premisa. No obstante aquí lo que discutirá es que en contextos de pluralismo valorativo y de escenarios de competitividad y adversidad, la labor deliberativa no se agota en la tarea de transformación de las mismas. En este sentido son útiles las definiciones de Manin en “*Los principios del Gobierno representativo*”. Ed. Alianza. También en Elster, Jon : “*Arguing and Bargainig. In the federal Convention and the Assemblée Constituante*” Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe. Working paper N° 4.

Tras estas disgresiones, sostendré que la deliberación no tiene como finalidad esencial e inherente a su empleo, el cambio de preferencias con vistas a lograr consensos últimos. La presentación de nueva información, el sopesar diferentes tipos de razones o la fuerza coactiva de los mejores argumentos, pueden generar transformaciones en las emisiones primeras de los implicados, pero no se agota la labor deliberativa allí ni fracasa en su intento si no lo logra. Este supuesto que asumo para el desarrollo de todo este trabajo, me permite realizar una objeción fundamentada a las críticas que Adam Przeworsky ha sostenido en su texto *“Deliberación y dominación ideológica”*. En la medida que las opiniones críticas del autor se refieren a aspectos sustanciales del debate que serán problematizados en siguientes secciones, me ocupare aquí de un punto específico.

Przeworsky imputa a las prácticas deliberativas, que estas pueden llevar a la gente a sostener creencias que no corresponden a sus mejores intereses. Correspondientemente, las discusiones inducen y estimulan a la manipulación ideológica a favor de aquellos que cuentan con mayores recursos económicos o de poder y que terminan por inclinar una balanza siempre desfavorable al profano. Para rebatir la tesis de que la deliberación puede generar mayores conocimientos y legitimidad de las decisiones, Przeworsky tiene que mostrar que el intercambio dialógico produce una erosión en la calidad cognoscitiva de las decisiones:

“Cuando leo algunos comentarios sobre deliberaciones me sorprendo que nunca tomen en cuenta que la calidad del proceso democrático se deteriora a causa de este proceso. Específicamente ninguna descripción que yo conozca admite que una persona que ya posee una creencia técnica verdadera incorpora una falsa”⁵²

La deliberación, por tanto, nos induce a la manipulación ya sea porque la mayor disponibilidad de recursos acrecienta las posibilidades de la persuasión a favor de quien dispone de ellos, o porque cuando sostenemos una creencia que es verdadera, el proceso deliberativo nos logra convencer de la falsedad de la misma.

Pero Przeworsky arriba a esta conclusión porque parte toda su argumentación de una definición de la deliberación que entiendo, padece de cierta miopía sobre las posibilidades de lo político en contextos de pluralismo. En ella sostiene que: “la deliberación es ***una forma de debate cuyo objeto es cambiar las preferencias*** que permiten a la gente decidir como actuar”⁵³

⁵² Przeworsky, A. *“Deliberación y dominación ideológica”* En Elster, Jon (comp) *“Democracia deliberativa”* Op cit. Pag 189

⁵³ *Idem.* Pag. 182

Creo que esta definición peca de estrechez política y puede ser objetada. Mas precisamente, entiendo que deja fuera de consideración las potencialidades de la discusión para operar en un contexto de pluralismo profundo, en que diferentes doctrinas comprensivas e intereses competitivos se encuentran disputando sus pretensiones de validez. En un escenario planteado en esos términos, la deliberación podría estar condenada al fracaso si lo que pretendemos como objetivo fundamental, es el cambiar las preferencias sustanciales del otro y lograr la unanimidad.

La **deliberación por tanto no necesariamente debe desembocar en un acuerdo**. De hecho hay razones contundentes que demuestran que luego de participar en un ejercicio discursivo, más que llegar a un consenso podemos encontrar nuevos puntos de desacuerdo y de controversia sobre los cuales deberíamos de trabajar. **Sin embargo, resulta una ventaja para la cooperación justa en las democracias plurales, que los términos, alcances y límites de las controversias quedasen claramente expuestos.**

Este fundamento de la deliberación como herramienta eficaz para ilustrar los desacuerdos, resulta en cambio, poco novedoso para la teoría deliberativa y es visible ya en los textos clásicos. En el *Georgias* de Platón, Sócrates, en referencia a la importancia del tratamiento de las emisiones problemáticas y conflictivas expresaba:

“...comparémoslas[nuestras argumentaciones] entre si y veamos si no difieren en nada; **porque los puntos acerca de los que no estamos de acuerdo no son de escasa importancia, por lo contrario, no hay quizás ninguno mas digno de ser sabido ni que sea más vergonzoso el ignorarlo**”⁵⁴.

Como vimos hasta aquí, entre las perspectivas agregativas y las deliberativas operan una serie de desacuerdos que van desde el rol del ciudadano y su racionalidad en el ámbito publico, la autonomía de los sujetos y la consideración de las preferencias, las características procedimentales y sus requisitos normativos así como la fuente principal desde donde emana la autorización política para ejercer el poder público y la toma de decisiones vinculantes. Pero si bien a partir de estos desacuerdos, se suele presentar las perspectivas agregativas y las deliberativas en una relación dilemática, algunos autores refutarán tal oposición al sostener que entre ambos arreglos democráticos opera una relación de complementariedad. Tal es el caso de Phillip Pettit, que proveniente de la tradición republicana patrocinará una posición que busca superar los antagonismos entre ambas nociones y en cambio propone abordarlas desde su estrecha vinculación tanto en

⁵⁴ Platon. “*Georgias o de la Retórica*” en Platón “*Dialogos*” . Ed. Mexicanos Unidos. Pag 71.

lo que hace al plano normativo así como en sus posibilidades de aplicación institucional. Así, al comienzo mismo de su artículo "*The Aggregation Problem for Deliberative Democracy*", Pettit expone:

"Deliberative democracy may require that people deliberate with one another, but it will also need to have them put the results of their deliberations together in aggregative mode"⁵⁵

Resulta un utopismo exagerado pretender sustentar los diseños institucionales de nuestras democracias en base a los criterios rectores de una sola de las perspectivas en cuestión. No lo permite el contexto de alta complejidad y pluralismo valorativo que caracteriza nuestras comunidades políticas, sino que además se condeciría mal con una vida política que guarda entre sus características inherentes, la disputatividad, el conflicto, la pluralidad y las orientaciones estratégicas.

Así como hemos tratado anteriormente que la deliberación se enfrenta a problemas si su labor se agota en el cambio endogenos de preferencias, también cabe destacar, que aun cuando superáramos la instancia primera de someter a estas a un debate publico y lograr ciertos acuerdos básicos, la deliberación se enfrenta a serios inconvenientes.

De hecho, las perspectivas deliberativas caen en la misma trampa que los arreglos competitivos cuando intentan agrupar, ya no las preferencias primeras de los afectados en una decisión, sino los juicios razonados y argumentos a favor o en contra de una proposición y se procede luego a la agregación de esos juicios. Aun después de un filtro deliberativo, la toma de decisiones puede generar inconsistencias, establecer incoherencias y caer en mayorías cíclicas similares a los procedimientos descritos por Condorcet y K. Arrow. Tal parece ser el hallazgo de Philip Pettit y que ha dado en llamar "*el dilema discursivo*". Permítame el lector exponer brevemente sus lineamientos básicos a fin de esclarecer la comprensión de este punto crucial en nuestra argumentación. Para Pettit el problema de la incoherencia imputada a los modelos agregativos aún persiste si superamos la consideración de las preferencias primeras y en cambio introducimos los juicios públicos razonados y argumentos a favor de una proposición. El hecho principal radica en que sobre cada una de las opciones podrán presentarse una serie de razonamientos que operan a favor o en contra de la adopción de una medida, ya sea sobre los meritos relativos de cada una o sobre las consecuencias posibles de adoptar dicho

⁵⁵ Pettit, Philip. "*The aggregation problem for deliberative Democracy*". Princeton University. 2006 Pag 1.

curso de acción.(Pettit, 2006) Aún luego de someter nuestras preferencias al intercambio argumentativo y aclaradas las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, llega una instancia en la cual tendremos que decidir. Como las unanimidades son escasas en la vida política y parecen tener un valor únicamente en el plano de la teoría, deberemos adoptar algún mecanismo para zanjar la discusión. En caso de que optemos por una decisión mayoritaria es posible encontrarnos con una inconsistencia y la posibilidad de mayorías cíclicas: así, la imposibilidad imputada a los arreglos agregativos se vuelve ahora contra los supuestos deliberativos. Veamos un ejemplo grafico del siguiente dilema. Supongamos que un legislativo departamental debe decidir si aprobar la instalación de una planta de agroquímicos en las afueras de la ciudad. Para eso y previo a un debate logran consensuar que al menos dos razones deberían ser las relevantes para la toma de la decisión final. En primer lugar, si la planta creará nuevos puestos de trabajo calificados que impacten en la realidad laboral del departamento y en segundo lugar si su instalación no afectará la calidad ambiental de la zona en la cual se implantará. Supongamos además, por mor de la simplicidad, que al aceptar una de las dos premisas llevarían a dar el sí por la decisión final de la instalación. De esta manera la matriz se presentaría de la siguiente forma.

	Aumenta la demanda Laboral	Preserva la calidad medioambiental	Aprueba su instalación.
Legislador 1	Si	No	Si
Legislador 2	No	Si	Si
Legislador 3	No	No	No
Mayoría	No	No	Si

Note el lector que si se opta por una decisión mayoritaria basada en las conclusiones y sustentadas en las preferencias individuales de cada actor, el resultado seria afirmativo en cuanto a la construcción de las planta. Pero si en cambio se opta por una votación mayoritaria en base a cada una de las premisas o razones que justifican la decisión final tendríamos un resultado claramente negativo. En la instancia de agregación de los juicios razonados entonces, es plausible también la consolidación de incoherencias.

Pettit descarta al menos tres estrategias para poder resolver este dilema. En primer lugar el grupo podría estar dispuesto a renunciar al ideal de lograr un juicio razonado acerca de cada uno de los issues que se presentan ante la elección de una opción determinada. A fin de eliminar la inconsistencia que genera la agregación mayoritaria de los juicios, podría optarse por eliminar aquellos en donde es posible identificar la fuente que determina la incoherencia del resultado. Sin embargo, esta no parece ser una opción normativa deseable ya que cualquier restricción a algunas de las proposiciones a favor o en contra de una iniciativa lograría afectar la calidad de la decisión tomada al impactar tanto en la legitimidad de ésta como en su calidad cognitiva.

Una segunda estrategia posible consistiría en disminuir el requisito del dominio universal, esto es, la imposibilidad normativa de no restringir previamente el contenido de los juicios. Una manera de poder hacerlo podría ser el estipular determinados constreñimientos procedimentales en el mismo proceso deliberativo con el fin de reducir las emisiones problemáticas. No obstante, al implementar una cláusula de este tipo, un arreglo deliberativo podría caer bajo las mismas objeciones normativas que le señalamos a los arreglos agregativos: la apertura del debate a las diferentes voces y razones es un prerequisite fundamental de la legitimación democrática y por tanto su restricción termina por afectar sustancialmente el pilar clave de la inclusividad.

Tampoco parece ser factible una estrategia resolutoria del dilema que implique la delegación de la formación de los juicios por parte de los afectados a ciertos individuos, comisiones, tribunales y otras formas de delegación del poder. De esta forma se pondría en jaque la pretensión de construir instituciones en las cuales las decisiones son una variable dependiente de la participación de los miembros y producto de sus intercambios razonados comunicativamente.

Más allá de la resolución técnica de este dilema y la propuesta de un procedimiento capaz de permitir una salida al atolladero que este se enfrenta⁵⁶, Pettit adscribirá un esquema democrático de corte republicano que incorpora los elementos sustantivos tanto de las perspectivas agregativas como las de corte discursivo-deliberativo.

La democracia en términos de su republicanismo atenuado debe aspirar, aún frente a los desafíos que a esta teoría le supone el pluralismo y la complejidad, a perseguir el bien

⁵⁶ Pettit propone un modelo estático y otro dinámico para la resolución de este dilema y que involucra una serie de intentos y contraintentos para resolver aquellas pretensiones que resultan problemáticas. Para esto Ver Pettit “. *“The aggregation problem for deliberative Democracy”*. *Op cit.*

común de la comunidad. Claro está que el autor no está pensando en una idea del bien común de corte clásico que podría ser objetado por los mismos argumentos con los que Schumpeter demolió los esquemas teóricos tradicionales de la democracia. En esta dirección, es claro Pettit al rechazar las nociones de bien común que se asocian, tanto con la suma de voluntades empíricas, así como en aquellas perspectivas que se sustentan en estrategias reduccionistas que optan por un procedimiento imparcial capaz de alcanzar un bien común bajo el soporte de la neutralidad. El republicanismo atenuado de Pettit propondrá entonces, considerar que el capital político común de una comunidad lo constituye su acervo argumentativo, un reservorio de argumentaciones y valoraciones que el poder político y los ciudadanos deben considerar como un patrimonio político y que determina los límites y restricciones de los ámbitos decisorios cuando se enfrentan a la toma de decisiones vinculantes:

“Cada vez que hay un debate público acerca de lo que nuestro gobierno debería hacer, las diferencias de opinión entre nosotros serán generalmente equilibradas por la emergencia de un repertorio de consideraciones que cada cual reconocerá como relevante para el debate que mantenemos. Las consideraciones que sustentamos de esa manera son nuestras evaluaciones compartidas. No son cuestiones sobre las que pensamos muy frecuentemente o explícitamente tratamos de consignar, pero ellas cristalizan como un derivado de la discusión pública, aun cuando la discusión tienda generalmente a la diferencia. Se acumulan a lo largo de los años y llegan a constituir una forma de capital discursivo compartido”⁵⁷.

Finalmente, la relación que aquí nos importa aclarar es como el autor resuelve al interior de su republicanismo revisado la integración de los componentes típicamente agregativos y aquellos arreglos deliberativos en los diseños institucionales democráticos de nuestras comunidades.

La opción de Pettit pasará por un diseño institucional de tipo dual. Por una parte se deben fortalecer las instituciones de tipo electoral-agregativas, que además de ofrecer una autorización política para el ejercicio del poder, vinculen seriamente a los que ocupan cargos electos a ofrecer justificaciones públicas de las decisiones de política, esto es, que hallen su sustento de fundamentación en el acervo común de razones legitimantes. **Si algo deja claro el dilema discursivo anteriormente expuesto, es que la justificación de las decisiones sin la explicitación pública de las razones que las asisten pueden encubrir inconsistencias y falta de coherencia interna.**

⁵⁷ Pettit, Philip. “*Democracia y Evaluaciones Compartidas*”. En *Isonomia*. N° 23. 2005. Pag 55.

Evitar en los diseños institucionales democráticos tales vicios de fundamentación implica propiciar diseños institucionales que privilegian ámbitos contestables y desafiantes de las razones expuestas por los organismos de toma de decisión más relevantes de la comunidad política que operen fundamentalmente en aquellos periodos de calma política. La ciudadanía debe operar en base al acervo de razones, argumentos y evaluaciones compartidas, constituyendo su acción contestable en un continuo y permanente desafío a las lógicas competitivas de la vida política.

Precisamente, la importancia de invocar el rol central que adquieren para nuestras democracias, la apelación a las razones publicas compartidas así como las posibilidades que se le presentan a la ciudadanía profana cuando trata de inquietar las estructuras burocráticas tomadoras de decisión, nos prepara el camino para el tratamiento analítico de los modelos democráticos de John Rawls y Jurgen Habermas y que insumen todo el esfuerzo analítico de los capítulos siguientes.

CAPITULO III.

DOS MODELOS NORMATIVAMENTE EXIGENTES DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA: JOHN RAWLS Y JURGEN HABERMAS.

Al estudiar un filósofo, la actitud adecuada consiste en no profesar adoración ni desprecio, sino más bien una especie de simpatía hipotética, hasta que sea posible ver lo que deba creerse de sus teorías, y solamente entonces pasar a la actitud crítica, que debe parecerse en lo posible al estado de ánimo de una persona que abandona las opiniones que hasta ahora profesaba. El desprecio impide la primera parte de este proceso; la adoración, la segunda.

Bertrand Russell.

Hasta aquí he presentado los principales puntos de desacuerdos entre quienes sostienen una perspectiva deliberativa de la democracia y aquellas teorías que fundamentan sus

principales premisas en nociones competitivas, adversativas y agregativas del proceso democrático. Como resultado de ese intento, el lector debería tener en claro que las diferencias teóricas, institucionales y políticas de los deliberativos no pueden reducirse únicamente a aquellas sostenidas contra las perspectivas agregativas, aún cuando tal reducción del debate, ha sido la estrategia dominante en los estudios académicos sobre el tema. La incorporación de los supuestos decisionistas y racionalistas así como aquellas perspectivas que incorporan nociones de ciudadanía sustentadas en la incapacidad o en la racionalidad mermada de los ciudadanos, también son un blanco en las objeciones de quienes otorgan un rol central al intercambio público de razones en el foro democrático. Detrás de la ampliación de los ámbitos de disputa académica, se encuentra mi intención de sostener que aquellos que concentran sus replicas a las perspectivas agregativas, terminan por dejar fuera de consideración relevantes aspectos problemáticos.

Sin embargo, de la presente estrategia argumental no debería deducirse que entre la comunidad teórica que aboga por la deliberación y su importancia para la legitimidad del proceso democrático en contextos de pluralismo, existe un consenso de perspectivas teóricas y políticas. Como he mantenido a lo largo de la sección anterior, conviven en la defensa de la deliberación pública, teóricos liberales, republicanos, pragmatistas, aquellos que postulan modelos normativamente exigentes, así como también quienes prefieren una versión minimalista o menos pretenciosa de los alcances de la deliberación. Mi intención en la sección precedente fue dar voz a cada una de las perspectivas en aquellos puntos en que fuera pertinente, aunque en ciertos casos, al costo de no lograr la exhaustividad necesaria dada la enorme extensión que esa tarea demandaría.

Es por esta razón que la segunda parte de este trabajo monográfico se concentrará en el abordaje, esta vez sí con pretensiones de exhaustividad, de dos autores claves del debate deliberativo, a saber, John Rawls y Jürgen Habermas. En este sentido, parece haber sobradas razones para considerar que los desarrollos analíticos de ambos autores pueden ser considerados bajo la denominación heurística de normativamente exigentes o maximalistas de la deliberación democrática.

Tal como adelantara al principio de este trabajo, la rehabilitación de lo dialógico en el panorama de la filosofía política contemporánea se debe en gran medida a las teorizaciones realizadas por Habermas y Rawls, que parecen confirmar aquella vieja sentencia de Aristóteles que sostenía la importancia que tiene para la publicidad de determinadas ideas o conceptos, el contar con la voz de un ilustrado filósofo.

Sin embargo, esta razón si bien nos provee una buena justificación para la relevancia de los autores en el debate deliberativo, poco nos dice acerca del porque deberíamos incluirlas en las perspectivas maximalistas o normativamente exigentes.

Sostengo que el relato que encontramos en ambas formulaciones, deben ser incluidas en esta perspectivas principalmente por su intento de fundamentar normativamente la deliberación a partir de premisas distintivas de un discurso claramente filosófico y escasamente político.⁵⁸ En ambas, la comprensión normativa del proceso democrático incorpora como insumos claves la utilización de conceptos tales el cognitivismo, el formalismo, el universalismo y el constructivismo político de raíz kantiana, que son tomados del discurso filosófico y adaptados a la comprensión de fenómenos típicamente políticos. Tales sustentos teóricos extraídos desde la filosofía se hallan siempre presentes y determinan significativamente los diseños deliberativos de ambas perspectivas.

El impacto de la utilización de dichas nociones sobre los modelos deliberativos, se hace evidente en las pretensiones normativas exigidas a los actores que participan en los intercambios discursivos, en el intento de sostener un alto grado de idealización de categorías tales como los límites y potencialidades del consenso, en la intención de establecer el tratamiento deliberativo acerca de los fines últimos, en la consideración de que las cuestiones practicas morales puedan ser discernidas en discusiones argumentadas o en cambio deberían ser excluidas, y finalmente, determinando el carácter procedimental y formalista que asume la deliberación pública en los dos autores.

En Habermas, además, se justifica su incorporación en estas perspectivas maximalistas por las expectativas puestas en las potencialidades del lenguaje y su capacidad (dadas determinadas condiciones y empleos de éste) para generar lo que el autor denomina “racionalidad dialógica”, es decir, la posibilidad de dirimir los desacuerdos racionalmente a partir de argumentaciones fundamentadas en buenas razones. De hecho, mostraré que su modelo deliberativo así como su comprensión procedimental de la democracia, se sustentan en que el logro de acuerdos y la posibilidad de entenderse comunicativamente en un contexto de conflicto y disenso permanente, recae principalmente en determinadas características que posee el lenguaje ordinario en si mismo. La tarea fundamental de la teoría será entonces garantizar su buen desempeño democrático, dependiendo para eso de una correcta institucionalización de los procesos comunicativos con el fin de neutralizar

⁵⁸ Otras caracterizaciones que podrían ser útiles para la consideración de estos esquemas deliberativos amplios la ofrece Javier Gallardo en *“El dialogo en la república”*. Op cit. 2005

todos aquellos factores exógenos que perturban el logro de una deliberación genuinamente argumentativa.

No obstante, afirmando el carácter contrafáctico de ambos modelos a la hora de posicionar el rol del diálogo en sus respectivas teorías, el lector podrá encontrar además la fundamentación de algunas tesis polémicas. En el caso específico de Rawls, sostendré que las premisas fundamentales con la cual el autor desarrolla su constructivismo político en su *Teoría de la Justicia*, hacen de este primer Rawls un autor decididamente antideliberativo. Solo luego de corregir significativamente en “*Liberalismo Político*” algunas de sus principales afirmaciones, es que podemos hablar de un acercamiento, aunque restringido y acotado, a perspectivas mas deliberativas.

En cuanto a la teoría discursiva de Habermas, presento allí un modelo compuesto en cuatro etapas que busca arribar a un entendimiento más cabal de las pretensiones discursivas del autor. También en ese apartado, intento refutar la tesis de que la teoría discursiva del alemán se construye de espaldas a la disputatividad política y se sustenta en la unanimidad. Tales intentos configuran los esfuerzos de las próximas páginas.

CAPITULO IV.

III. EL ROL DELIBERATIVO EN UNA SOCIEDAD BIEN ORDENADA: EL CONSTRUCTIVISMO POLÍTICO DE J. RAWLS Y LA PERSPECTIVA DELIBERATIVA.

Si bien existe un relativo consenso académico en sostener que la “*Teoría de la Justicia*” publicada por John Rawls en 1971, constituye uno de los hitos fundamentales de la filosofía política contemporánea, debemos ser mas cuidadosos en extrapolar el hecho de que también se constituya en una razón fundamental para el desarrollo del debate académico sobre la democracia deliberativa. En algunos casos, la literatura especializada ha identificado entre las razones de este revival deliberativo, la influencia ejercida por la obra del primer Rawls.

En las páginas que siguen, analizo el rol otorgado a la deliberación en el contractualismo constructivista de Rawls a partir de un análisis de sus dos obras fundamentales, a saber, “*La teoría de la Justicia*” y su “*Liberalismo Político*”. Las variaciones conceptuales en sus premisas fundamentales ocurridas entre la publicación de una y otra, justifican a mi

entender esa estrategia argumental, en tanto nos muestra que el papel asignado a la deliberación, sus alcances, límites, así como los ámbitos en donde es plausible su aplicación, han sido radicalmente reformulados.

En base a este esquema, el lector encontrará en primera instancia, un análisis de la *Teoría de la Justicia* que arriba a conclusiones polémicas. Entre ellas, sostendré que en esta primera obra de John Rawls, la discusión colectiva asume un rol débil y marginal en la determinación de los acuerdos básicos de una sociedad. En realidad, y para los propósitos de esta exposición, trataré de demostrar que existen claros elementos en su construcción conceptual que son no-deliberativos e incluso opuestos a la idea de ejercicios discursivos, tanto en su función de legitimación de las normas primeras así como en la búsqueda de principios de justicia plausibles de encontrar consenso en el contexto de sociedades pluralistas. Estoy convencido que este status relegado otorgado a la deliberación en el primer Rawls, debe buscarse en las características fundamentales de su constructivismo político y en la dependencia a los supuestos Kantianos que sirven de sustento del mismo. Precisamente, es el apego en esta primera etapa de Rawls a las premisas Kantianas de la autonomía moral y a las potencialidades de la razón práctica cuando se ejercita en la autorreflexión, el hilo conductor por el cual presentare mis principales objeciones, que se basarán en tres aspectos que entiendo claves.

En primer lugar, la adscripción de Rawls a la teoría de la elección racional y su materialización en los rasgos que el autor le atribuye a los sujetos participantes en la posición original, al entenderlos como sujetos racionales, mutuamente desinteresados y poseedores de una racionalidad exclusivamente instrumental. En segundo lugar, entiendo que conspiran contra una concepción deliberativa, las pretensiones de autonomía moral que son atribuibles a los ciudadanos y que sirven como test de validación de los principios de justicia contempladas en su famoso “equilibrio reflexivo”.

Finalmente y estrechamente relacionado con lo anterior, la adscripción de Rawls a la premisa formalista Kantiana de que los principios generales de justicia que son susceptibles de ser consensuados por todos, dependen exclusivamente de condiciones formales que aseguren a los individuos una correcta autorreflexión como manera de alcanzar esos principios. Estos tres componentes, que combinados constituyen las bases de su constructivismo procedimental, **entiendo que son suficientes para sostener que este primer Rawls es un autor que excluye sistemáticamente la posibilidad de pensar discursivamente la convivencia política en una sociedad plural (I).**

La aparición de “*Liberalismo Político*”, significó en cambio la reformulación significativa de esas premisas no deliberativas y por tanto nuestra indagación debe concentrarse, en el análisis de si este nuevo Rawls acerca su esquema constructivista a modelos más deliberativos de democracia. La importancia que adquiere en este sentido la relativización de la premisas kantianas de la autorreflexión moral, el status clave que lo razonable asume en este nuevo esquema rawlsiano y el rol que ocupan las tradiciones públicas compartidas como ámbitos desde las cuales distintas doctrinas comprensivas pueden lograr acuerdos básicos, producirá a un concepto de deliberación democrática acotado y restringido, determinado en gran parte por la apelación al recurso conceptual kantiano de razón pública (II).

I. Las potencialidades del sujeto: los argumentos no deliberativos de la Teoría de la Justicia.

“The proper study of mankind is the man”

Pope.

Antes de comenzar directamente con el tratamiento de las objeciones antideliberativas en esta primera obra de Rawls, presentaré esquemáticamente algunos de los conceptos básicos de su constructivismo con el fin de ganar claridad en la exposición.

Lo primero que tenemos que señalar es que para el Rawls de la “*Teoría de la Justicia*”, una sociedad en contextos de pluralismo y caracterizada por conflictos de intereses que resultan inherentes a la vida democrática misma, corre riesgos de estabilidad sino logra encontrar principios de justicia que puedan regular los aspectos básicos de esa sociedad y que sean plausibles de contar con un consenso general. No obstante, para el objetivo que persigue esta argumentación, el problema que nos ocupa no resulta de la relevancia que pueda tener encontrar normas y criterios que operen a favor de la cooperación justa entre ciudadanos y la pertinencia de esa indagación. El problema en si, es determinar cuál es el método mas apropiado por el cual logramos ponernos de acuerdo y consensuar

esos básicos principios de convivencia, y en definitiva cual es el rol otorgado a libre intercambio dialógico en ese proceso. (Rawls, 1971; Rawls, 1993). Con este fin, Rawls adoptará una perspectiva constructivista como *el* camino metodológico normativamente deseable y posible de ser validado en contextos de pluralismo estructural.

Esencialmente, lo que le da a su teoría el carácter constructuivista, es el hecho de sostener que los principios de justicia básicos y capaces de lograr consenso, son el producto de un determinado procedimiento de construcción. En otras palabras, la estructura, (es decir, el procedimiento), determinara el contenido sustantivo de los principios de justicia. (Rawls, 1971; 1986; 1991).

Este procedimiento capaz de generar hechos morales en condiciones *fair*, es lo que Rawls ha denominado posición original: un ámbito contrafáctico en donde los individuos eligen las reglas básicas que determinarán el contenido esencial de las instituciones que regirán la convivencia y la cooperación entre ciudadanos libres e iguales en una democracia. Sin embargo, para que la adopción de estos principios reguladores por parte de los agentes no redunde en el propio beneficio de su posición o interés actual, el procedimiento debe asegurar determinados requisitos de trascendencia a fin de lograr que los participantes, operen en un contexto de desconocimiento de cuestiones vitales trascendentes. Informaciones relevantes, tales como su posición en la sociedad, la clase, el status, las ventajas o desventajas en materia de capacidad e inteligencia, así como las concepciones del bien al cual adscribe, son ignoradas por los participantes en la asamblea original. (Rawls; 1971) El instrumento decisivo del procedimiento para restringir el conocimiento previo de las partes, y de esa manera lograr mejores performances de imparcialidad, Rawls lo ha denominado “velo de ignorancia”. Como fruto de ese procedimiento resultarán de esa asamblea ideal dos principios de justicia ya hartamente conocidos y discutidos hasta el cansancio de los cuales no puedo ocuparme aquí.

A fin de aclarar más precisamente el rol deliberativo en la “*Teoría de la Justicia*”, consideremos a continuación los tres argumentos sobre los que, a mi entender, producen lo que podríamos denominar la exclusión deliberativa en esta obra del primer Rawls.

Allí se sostiene que en la posición original, dadas las condiciones de trascendencia exigidas a las partes impuestas por el velo de ignorancia, los dos principios de justicia serian aceptados por unanimidad y convencidas las partes por el mismo argumento, hallando tanto en la caracterización de los sujetos que participan en el acuerdo así como

en la forma por las cuales arriban a las decisiones, **un primer rasgo decisionista y anti-deliberativo del procedimiento Rawlsiano.** (Avritzer, 2000). Sostiene Rawls:

“Para empezar, es claro que, puesto que las diferencias entre las partes son desconocidas y puesto que todos son igualmente racionales y se hallan en la misma situación, **todas serán susceptibles de ser convencidas por los mismos argumentos.** Por tanto, podemos contemplar el acuerdo en la posición original desde el punto de vista de una persona seleccionada al azar. Si cualquiera, después de reflexionar debidamente, prefiere una concepción de justicia a otra, entonces todos lo harán **pudiéndose obtener un acuerdo unánime**”.⁵⁹

Estas dos características excluyentes del diálogo recíproco se derivan fundamentalmente de considerar que los sujetos que participan en la posición original están dotados exclusivamente con la específica racionalidad presupuesta por la teoría de la elección racional y que por tanto, las acciones emprendidas por estos se entienden auto interesadas, egoístas y maximizadoras de su propio beneficio.

Este recurso al auto interés como racionalidad característica de las que son dotados las partes en la asamblea contrafáctica y que son determinantes para la llegada a los principios primeros, es sostenido expresamente por Rawls cuando sostiene que:

“Un rasgo esencial de la justicia como imparcialidad es el pensar que los miembros del grupo en la situación ideal son racionales y mutuamente desinteresados...Mas aún, el concepto de racionalidad tiene que ser interpretado, en lo posible, en el sentido estrictamente tradicional de la teoría económica, según la cual se emplean los medios mas efectivos para fines dados”⁶⁰.

Páginas mas adelante redobla la apuesta y afirma:

“La teoría de la justicia es una parte, quizás la mas significativa de la elección racional”.⁶¹

La adopción de los presupuestos de la teoría de la elección racional (que como veremos mas adelante son explícitamente declarados incorrectos por el autor en obras posteriores) conspiran contra la noción de sujetos deliberantes que forman sus juicios y alcanzan decisiones, desde las mas básicas hasta las mas complejas, a través de un intercambio discursivo, en donde el hablar y razonar juntos nos lleva a resultados mas legítimos y

⁵⁹ Rawls, John. “*Teoría de la Justicia*”. FCE. 1971. Pag 137. Las negritas son mías.

⁶⁰ Rawls, John. “*Teoría de la Justicia*”. FCE. 1971. Pag 31.

⁶¹ *Idem*. Pag 34.

mejor formados. Como sostuve en secciones anteriores, partir de un sujeto estrictamente racional y maximizador de beneficios, no solo es un dato contrafáctico falsable, sino que además, implica un obstáculo teórico para pensar acuerdos normativamente fundados. (Elster, 1998; Habermas, 1992)

Resulta pertinente aquí también, la objeción esgrimida por Hare a la adopción Rawlsiana de la teoría racional y su intento de caracterizar así a los sujetos participantes en la posición original. De acuerdo con este autor, la combinación del supuesto de un sujeto auto interesado pero ignorante de cuestiones esenciales, es equivalente a sostener conjuntamente los principios de conocimiento e imparcialidad. (Hare, 1988, Nino, 1989). En definitiva, el individualismo metodológico y filosófico en esta primer obra de Rawls, determina que los sujetos en la posición original, al concebirlos como portadores exclusivamente de la racionalidad estratégica, alcancen consensos sustantivos sin requerir del diálogo para ello, **haciendo de la discusión un elemento marginal en la tarea de buscar acortar la brecha del desacuerdo moral que rige nuestras sociedad contemporáneas.** Podríamos añadir aún más acerca de las consecuencias que implica la utilización de los supuestos de la elección racional para el análisis de los fundamentos normativos de la democracia. Pero esta es una tarea que ya elaboré en secciones anteriores y que no puedo retomar aquí

No obstante, este primer aspecto que implica la marginación de la discusión colectiva y su potencialidades, tanto legitimantes así como epistémicas, es reforzada en Rawls al presentar su concepto de “equilibrio reflexivo”. Momento clave en su esquema constructivista, el equilibrio reflexivo es presentado como un test de validación de los principios que se logran acordar en la posición original tras los ejercicios de trascendencia que le impone el velo de ignorancia. La idea que lo sustenta, es que la justificación de los principios acordados y que regirán nuestras instituciones básicas a fin de garantizar la cooperación justa entre ciudadanos no puede sostenerse únicamente sobre los principios logrados en la posición original. Para que estos puedan asumirse como validos, debemos contrastarlos con nuestras intuiciones morales primarias y lo que Rawls ha denominado, “nuestro sentido intuitivo de justicia”.

Pero lo relevante aquí es que ese sentido de justicia no es una construcción intersubjetiva que requiera el diálogo y la experiencia compartida con otros, sino que también resulta ser un constructo producto de la autorreflexión y realizada en la soledad característica de “yo moral” kantiano.

“Cada persona después de cierta edad y dotada de la capacidad intelectual indispensable desarrolla bajo condiciones sociales normales, un sentido de la justicia. Adquirimos una habilidad para juzgar a las cosas como justas o injustas y para apoyar esos juicios en razones”.⁶²

Hay aquí un mecanismo pre-reflexivo del sentido de la justicia ya que este constituye un aspecto esencial de la personalidad humana. Tal como lo concibe Rawls, el equilibrio reflexivo es quien nos informará si los principios adoptados en la posición original, gozan de la validez de compartir nuestro sentido de justicia logrado a través de la autorreflexión y en que el actor moral prescinde de toda intersubjetividad y de ejercicios discursivos para su esclarecimiento: **los ciudadanos llegarían a las mismas conclusiones sobre los principios básicos y su posterior validación, sin haberse involucrado en un diálogo con los demás.** Es precisamente en este punto en donde entiendo que se encuentra la segunda fuente antideliberativa en Rawls. Si la validez de los principios de justicia acordados, depende de la consonancia de estos con nuestros juicios morales construidos en el ejercicio de nuestra autonomía reflexiva, podemos concluir que, tanto en la primera etapa en la cual los principios son alcanzados (en la posición original) y luego en su posterior validación (mediante el equilibrio reflexivo) son actos que se producen sin la necesidad de haber dialogado con otros; **ambos ejercicios son realizados en soledad.** Como ha Sostenido Saward:

“As discussed in A theory of Justice, reflective equilibrium is a solitary thought process, engaged in (ideally) by all citizen on their own, conducted in order to reach a specific conception of an initial situation which accords with our considered convictions about the content of justice”⁶³

Coincido además con Nino en su afirmación de que el equilibrio reflexivo Rawlsiano, es presentado como un método o procedimiento de acceder a la verdad moral mediante nuestra autorreflexión, y por tanto, terminan siendo las intuiciones morales del individuo el “último tribunal de apelación sobre la validez de sus principios”, haciendo patente en el autor, el legado de la concepción Kantiana de la autonomía moral.

Fundamentar esta noción de autonomía así como el concepto de razón práctica a partir de las premisas de Kant, no deja otra salida que la marginación de la discusión colectiva y

⁶² *Idem.*

⁶³ En Saward Michael “*Rawls and deliberative democracy*”. En M. Passerin D'Entreves. “*Democracy as Public Deliberation: New perspectives*”. Manchester press. 2002. Pag.116

constituye a mí entender, **la tercera forma de relegar la deliberación de su esquema constructivista procedimental**. Este apego de Rawls a la noción kantiana de autonomía y que será también en obras posteriores relativizada, es declarada explícitamente en su “*Teoría de la Justicia*” al sostener que:

“Kant, mantenía, que una persona actúa autónomamente, cuando los principios de su acción son elegidos por el como la expresión mas adecuada de su naturaleza de ser libre y racional.... Suponiendo que el razonamiento a favor de los principios de justicia es correcto, podemos decir que cuando las personas actúan sobre la base de estos principios, **están actuando de acuerdo con principios que ellos elegirían como personas racionales e independientes en una posición de igualdad.**”⁶⁴

Y aclara posteriormente este sentido al decir:

“La posición original puede ser considerada como una interpretación procesal de la concepción kantiana de la autonomía y del imperativo categórico, dentro del sistema de una teoría empírica”⁶⁵

Es de destacar que en cierto sentido, todos los elementos teóricos que constituyen el constructivismo de Rawls, se orientan a dar forma institucional o procedimental a las condiciones exigidas por Kant para la realización de la autonomía moral del agente. El ser noumenal Kantiano, a diferencia del fenoménico, es capaz mediante el uso de la autorreflexión y despojándose de las constricciones que el mundo social y natural le impone, hallar principios rectores en el ámbito de lo moral capaces de poder universalizarse o convertirse en imperativos categóricos. Tal es la intención de Rawls al configurar los ejercicios de trascendencia que exige en su posición original y al sostener que fuera del procedimiento no existen hechos morales. (Rawls; 1971).⁶⁶

El velo de ignorancia que intenta propiciar procedimentalmente las condiciones para el ejercicio pleno de la autorreflexión moral, al tiempo que asegura que todos razonaran de la misma manera, reduce la aceptación de las instituciones y sus principios rectores, al esfuerzo monológico del sujeto racional excluyendo sistemáticamente a la deliberación de todo el proceso:

“En la justicia como imparcialidad todos están de acuerdo previamente acerca de los principios mediante los cuales tienen que fijarse sus mutuas pretensiones. **Estos principios reciben, pues, una precedencia absoluta, de modo que**

⁶⁴ Rawls, John “*Teoría de la Justicia*”. Pag 288

⁶⁵ *Idem*. Pag 293

⁶⁶ Como expresa Nino al respecto: “[El agente rawlsiano]... debe guiarse finalmente por el resultado de la propia reflexión, ya que el parece adoptar como Kant un concepto de autonomía que incluye la idea de que en materia moral cada uno es su propia autoridad moral.” Nino, Carlos. “*Constructivismo Epistemológico: entre Rawls y Habermas*”. Doxa Vol 5.

regulan las instituciones sociales sin discusión y cada uno construye sus proyectos de acuerdo a ellos.”⁶⁷

Como sabemos, este asumir las premisas formalistas kantianas como fundamento de su constructivismo político, le valió a Rawls las más duras críticas desde diversas tradiciones teóricas y marcó en el debate de la filosofía política de los ochenta el regreso de las objeciones hegelianas embanderadas por la teoría comunitarista.

Entre ellas, la más relevante a efectos de nuestra argumentación es aquella que objeta los esfuerzos de trascendencia exigidos por el velo de ignorancia y que parecen implicar, como ha sostenido Sandel, un compromiso metafísico con una concepción desarraigada de yo de los contextos vitales y compromisos primarios del actor. (Sandel, 1982).⁶⁸

Sin embargo, esta crítica, tal vez de las más famosas provenientes de la crítica comunitarista, es radicalizada desde la tradición liberal misma y en ese sentido Bruce Ackerman ha sostenido.

“La raíz del problema está en que es incorrecto pedir a los ciudadanos afirmar el valor de cualquier ejercicio particular de trascendencia como condición necesaria en la participación discursiva. Cualquier demanda parecida casi seguramente requerirá que algunos ciudadanos hablen de sí de manera denigrante o falsa y es precisamente esta demanda la que desnaturaliza el imperativo práctico.”⁶⁹

Cabe aquí sostener que este proceso auto reflexivo de lo moral y excluyente de la interacción dialógica con los demás, lejos de ser novedoso, trasciende el constructivismo Kantiano y ha caracterizado con ligeras variantes el pensamiento contractualista liberal clásico. La deliberación en esta tradición es concebida como un diálogo del actor con el actor mismo y un claro ejemplo de ello, es el concepto de deliberación vinculado al discernimiento interno y autoreflexivo del agente que encontramos en las formulaciones de Thomas Hobbes.⁷⁰ Más recientemente, Goodin ha sostenido que la reflexión “*in foro interno*” es un ingrediente crucial de la idea de la deliberación democrática, al señalar

⁶⁷ Rawls, John. “*Teoría de la Justicia*” Op Cit. Pag 510.

⁶⁸ Al respecto Sandel objetaba a Rawls su adscripción a la concepción del yo en claves Kantianas de la siguiente manera: “Un yo completamente independiente excluye cualquier concepción del bien (o del mal)...Excluye la posibilidad de cualquier vínculo capaz de ir más allá de nuestros valores y sentimientos para comprometer nuestra identidad misma. Excluye la posibilidad de una vida pública... Y excluye la posibilidad de que los objetivos y fines comunes puedan inspirar auto conocimientos más o menos expansivos y de ese modo definir una comunidad”. Sandel, Michael. “*Liberalism and the limits of Justice*”. Cambridge Press. 1982. Pag 62

⁶⁹ Ackerman, Bruce. “¿Por qué dialogar?”. Rev Metapolitica. Vol 2. Num 6. Pag 214.

⁷⁰ El concepto de deliberación en Hobbes no involucra el diálogo con los demás y es un proceso enteramente internalista. Ver “*Leviatán*” Op Cit. Cap.6 Pag.47 .

que en el término deliberación conviven tanto la referencia proceso individual de autorreflexión como al intercambio dialógico con los demás. (Goodin, 2000).

En esta dirección, es importante destacar que al menos en esta primera obra, la adopción por parte de Rawls a un concepto de deliberación en claves individualistas es sostenida expresamente. El lector debería saber que cuando Rawls se refiere a la deliberación, en realidad esta incorporando a su esquema constructivista el concepto de racionalidad deliberativa de Sidgwick que sirve de fundamento para la explicación de las competencias decisorias del agente racional.

La racionalidad deliberativa, lejos de suponer la reciprocidad comunicativa se presenta así como la motivación esencial del agente individual para la elección de proyectos racionales:

“Podemos decir que el proyecto de elección racional para una persona es el que elegiría con racionalidad deliberativa. (Entre los que son compatibles con los principios contables y con otros principios de elección racional, una vez establecidos estos). Es el proyecto sobre el que recaería la decisión como resultado de una reflexión cuidadosa, en la que el agente reconsideraría, a la luz de todos los hechos pertinentes, lo que probablemente realizaría aquellos proyectos, investigando así el modo de acción que mejor cumpliría sus deseos mas fundamentales.”⁷¹

Sin embargo por lo ya discutido en lo que va de esta tesis, **la deliberación es relevante conceptualmente para nuestra argumentación siempre y cuando incluya la reciprocidad y el diálogo con otros.** Y es precisamente la atención exclusiva a los supuestos internalistas en la obra del primer Rawls que hemos estado analizando, lo que determina la exclusión de los ejercicios discursivos en sus principales instancias constructivistas. Como ha sostenido Carlos Nino:

“En Rawls, la discusión con otros es un auxiliar útil de la reflexión individual, pero de ultima actuamos de acuerdo a los dictámenes finales de la autorreflexión”.⁷²

Como resultado de lo afirmado hasta aquí, podemos concluir que de la combinación resultante de a) la adopción de los supuestos de la teoría de la decisión racional imputadas a los agentes participantes en la posición original como racionalidad suficiente para la adopción de principios de justicia consensuales en contextos de pluralismo; b) de considerar además que solo a través de ejercicios de trascendencia de nuestras

⁷¹ Rawls, John. “*Teoría de la Justicia*”. Op cit. Pag 378.

⁷² Nino, Carlos. “*El constructivismo epistemológico: entre Rawls y Habermas*”. Op Cit.

condiciones vitales, logramos acordar principios de justicia capaces de ser compartidos, sin mediar comunicación y diálogo alguno y finalmente; c) de la posterior exigencia de hacer depender la validación de éstos, con nuestras intuiciones morales basadas en la autonomía moral de un sujeto potencialmente esclarecido en cuanto al obrar justo, **hacen de la *Teoría de la Justicia*, una obra decididamente anti discursiva e incapaz de ser invocada como fuente germinal de la idea de democracia deliberativa.**

II. La teoría de la justicia revisada: hacia un concepto de deliberación acotada en contextos de desacuerdos públicos razonables.

La publicación de “*Liberalismo Político*” al principio de los años noventa produjo un giro notable en la obra de John Rawls. Mientras que para algunos el impacto de las críticas realizadas por los comunitaristas en su arquitectónica conceptual, determinó el abandono de las premisas más virtuosas de la “*Teoría de la Justicia*”, para otros en esta nueva etapa, Rawls ganó en realismo político y en factibilidad institucional.

Sin embargo, no puedo entrar aquí en los detalles analíticos de todas esas transformaciones. Nuestro objetivo, en cambio, debe acotarse fundamentalmente al análisis de aquellos cambios que puedan significar un acercamiento del constructivismo Rawlsiano a perspectivas más deliberativas. En esa tarea, comienzo entonces por plantear una pregunta fundamental que es la que nos debe exigir una mayor rigurosidad analítica, a saber, ¿son los cambios producidos en el “*Liberalismo Político*” significativos para acercar al constructivismo liberal de Rawls a una perspectiva deliberativa de la democracia?; o mas precisamente, ¿podemos inferir que los cambios producidos en las premisas anteriormente señaladas como responsables de la exclusión deliberativa, suponen *per se* un giro discursivo en su obra?.

Precisamente estas tres premisas fueron objeto de sustanciales transformaciones en “*Liberalismo político*”. Esto abre, por tanto, la cuestión de si esos cambios implican un re-posicionamiento al interior de su teoría del status antes relegado que obtenía la discusión razonada y la deliberación, en su importancia para edificar principios consensuados de convivencia entre ciudadanos libres, racionales e iguales.

En las páginas que siguen se analizan cada una de estas transformaciones y su impacto sobre los esquemas constructivistas de Rawls (1). Analizados estos cambios, pasaré luego a exponer, las características fundamentales que asume lo deliberativo en la teoría del segundo Rawls a partir de su apelación al concepto Kantiano de razón pública (2).

1. El impacto de lo razonable y la inclusión de componentes dialógicos en el esquema constructivista de J. Rawls.

Comencemos por analizar las transformaciones ocurridas en la primera premisa que entendemos, supone la exclusión deliberativa, a saber, la adopción de la teoría de la decisión racional y el rol que adquiere en el nuevo trabajo de Rawls.

El derivar los principios de justicia por partes de los agentes en la posición original a partir de una racionalidad proveniente de los supuestos básicos de la teoría de la elección racional clásica supuso, como vimos, uno de los argumentos centrales del constructivismo rawlsiano en la *“Teoría de la Justicia”*. Los participantes haciendo uso de la razón instrumental, podían alcanzar principios de justicia capaces de generar al mismo tiempo los valores de imparcialidad y de unanimidad. No obstante, esta premisa fue radicalmente transformada en *“Liberalismo político”* en donde Rawls, en una nota al pie de página, sostiene:

“Aquí corrijo una observación que hice en mi Teoría de la Justicia, donde se dice que la teoría de la justicia es parte de la teoría de la decisión racional. **Según lo que llevamos dicho esto es simplemente incorrecto**”.⁷³

Frente a la estrechez que suponía una racionalidad entendida monológicamente e independiente de toda intersubjetividad, Rawls les exige ahora a los ciudadanos la disposición a ser “razonables”. **Esto, como intento demostrar, supone algo más que un adjetivo imputado a la racionalidad de los agentes e implica incorporar al análisis constructivista la intersubjetividad y las vinculaciones de los ciudadanos a sus**

⁷³ Rawls, John. *“Liberalismo Político”*. FCE 1992. Pag.70

tradiciones públicas compartidas como disposiciones relevantes para el logro de la estabilidad de una sociedad democrática que debe convivir y perdurar con el pluralismo razonable. Conceptualmente lo razonable es presentado como una doble disposición exigida a los ciudadanos. Por una parte, es entendida como la aptitud para proponer y acatar los términos justos de la cooperación al mismo tiempo que los impele a aceptar que en condiciones de pluralismo las fuentes del desacuerdo intrínseco que caracteriza nuestras sociedades democráticas deben ser aceptadas, no como un ejercicio incompleto o desatinado de la razón práctica, sino mas bien como el resultado de una cultura publica habituada a la libertad y al disenso. (Rawls, 1993). Esta disposición a ser razonables que caracteriza a los agentes que participan en la búsqueda de los principios generales de convivencia democrática y que amplían la estrecha racionalidad que Rawls les había imputado en su obra anterior, **incorpora de un modo muy especial a su teoría constructivista, elementos claramente deliberativos.** Sin embargo, reconozco que esta tesis no deja de ser controvertida y requiere de un mejor sustento argumentativo. Esta tarea debería indagar cual es el impacto que supone la adopción de lo razonable en el esquema constructivista Rawlsiano y como, a través de ese concepto, los ejercicios deliberativos terminan asumiendo una mayor relevancia al interior de la teoría. Para comenzar empezaré a acercarme al centro del argumento por una vía indirecta. Con ese propósito, someto a un examen de consistencia la propuesta de Michael Saward de entender al *“Liberalismo político”* como una imagen espejada de la *“Teoría de la Justicia”*, en donde el autor intenta comprobar que el status relegado de lo deliberativo sigue intacto en los últimos trabajos de Rawls. Entiendo que la deficiencia de su explicación justamente radica en no diferenciar analíticamente las potencialidades discursivas que lo “razonable” le aporta al nuevo constructivismo de Rawls.

Para demostrar su tesis, Saward presenta duras objeciones a aquellas formulaciones que sostienen encontrar en Rawls un autor del cual pueden desprenderse tesis deliberativas. En definitiva, para el autor, Rawls no es ni puede llegar a ser un demócrata deliberativo por que así lo impiden los supuestos constructivistas con los cuales se vale su teoría. (Saward)⁷⁴. Hasta aquí concuerdo con Saward y de hecho toda mi fundamentación

⁷⁴ Sostiene Saward: “I’ll offer some arguments to support the following conjectures: despite claims by Rawls and some commentators, Rawls is not and cannot be a deliberative democrat”. En Saward Michael *“Rawls and deliberative democracy”*. En M. Passerin D’Entreves. *“Democracy as Public Deliberation: New perspectives”*. Manchester press. 2002. Pag.112.

anterior fue dirigida a demostrar esa tesis. Sin embargo, para este autor el giro dado por Rawls en “*Liberalismo Político*”, continua dejando intacta la imposibilidad de acercar los supuestos Rawlsianos hacia una concepción deliberativa de la democracia y así lo sostiene en la declaración de intenciones al comienzo mismo de su trabajo.

“I want to suggest, however, that the arguments of Political Liberalism can properly be interpreted as the mirror image of those in a Theory of Justice. The architectural structure of the early work operates as a metaphor for the structure of the later work and the elements which compromise it. This conjecture in it self, if accurate, cannot alone account for the unworldliness, especially the absence of (the need or desire for) actual deliberation, in the writings on public reason and related concepts, but surely it can go some considerable way in that direction”⁷⁵

Para sostener la tesis de la persistencia de supuestos no-deliberativos en esta nueva obra de Rawls, Saward debe identificar la permanencia de aquellas premisas que lograban excluir sistemáticamente la posibilidad del diálogo razonado y su relevancia para el logro de acuerdos consensuales. A partir de ese objetivo, el examen pormenorizado de un pasaje clave en “*Liberalismo político*”, le permite presentar su tesis de permanencia antidiscursiva, a través de un análisis de las premisas y las inferencias lógicas que de ellas se desprenden y que aquí reconstruyo. De acuerdo con Rawls, sostiene Saward, en las actuales democracias plurales:

- 1 Ciudadanos racionales y razonables concientes del pluralismo
- 2 encontraran principios e ideales aceptables para ellos
- 3 por esta razón ellos adscribirán aquella Constitución que represente esos principios e ideales
- 4 Si el poder político es ejercitado en concordancia con esa Constitución
- 5 Entonces el poder es ejercitado legítimamente. (Saward; 1990)

De las premisas sostenidas, Saward infiere que Rawls sigue presentando el ejercicio político de los ciudadanos como un ejercicio solitario y prescindente de discusión colectiva. Así lo demuestran los puntos 1, 2 y 3 en donde la no reciprocidad y la autorreflexión se mantienen intactas a las pretensiones esgrimidas en “*Teoría de la Justicia*”, quedando reservados únicamente en los dos últimos puntos, el ejercicio del poder político y su vinculación con la legitimidad y la autorización colectiva⁷⁶. Los principios e ideales compartidos, momentos cruciales en el constructivismo de Rawls,

⁷⁵ *Idem* Pag 113.

⁷⁶ Sostiene Saward: “ Note that the location of public reason in the above schema is in point 1-3, and that this is precisely where reasoning is a solitary, inward-looking, thoughtful matter; public decision making only comes into de equation in point 4-5. The affirmation or endorsement of the principal and ideals is done by individuals thinking/”reasoning” alone, not together”. En Saward. Op Cit.

parecen seguir siendo accesibles únicamente en el ejercicio de la autorreflexión y sin mediar diálogo entre los participantes.

Sin embargo, mi discrepancia con el argumento de Saward no se origina en el planteamiento de las premisas sino en la no consideración de algunas diferenciaciones relevantes que el autor omite en su inferencia. **Esta inadvertencia, entiendo, radica precisamente en la no discriminación de lo razonable y lo racional por parte de Saward y que afecta decididamente en su conclusión de que aún persisten ejercicios autorreflexivos en “*Liberalismo político*” que excluyen la deliberación.** La cuestión clave pasa a ser entonces si la categoría “razonable”, ahora exigida a los ciudadanos que participan en la búsqueda de los acuerdos básicos, supone el intercambio dialógico y la predisposición a la discusión razonada y en sentido creo que existen indicios de que esto precisamente es posible de confirmarse aunque con determinadas peculiaridades que busco aclarar.

La categoría razonable y su imputación a los agentes participantes de la posición original, implica en si la idea de reciprocidad y de cooperación entre ciudadanos para debatir los términos justos de ella y así se desprenden de las expresiones del mismo Rawls:

“Las personas son razonables en un aspecto básico cuando, por ejemplo entre iguales, están dispuestos a proponer principios y normas como términos justos de cooperación y cumplir con ellos de buen grado, si se les asegura que las demás personas harán lo mismo. Consideran que esas normas son lo suficientemente razonables para que todos las aceptan y, por tanto justificables para ellos; **y están dispuestos a debatir sobre los términos justos que propongan las demás personas**”.⁷⁷

La reciprocidad y la disposición a deliberar con otros, se opone en este sentido, al exclusivo predominio de lo racional en que los agentes realizan cálculos de utilidad exclusivamente en beneficio del agente mismo. **La posibilidad misma de alcanzar acuerdos de justicia en contextos de desacuerdos razonables, tiene ahora como condición la disposición a someter a juicio público las propias pretensiones a través del diálogo, relativizando fuertemente la relación entre racionalidad estratégica, unanimidad y acuerdos justos que caracterizó el constructivismo rawlsiano de primera hora.**

⁷⁷ Rawls, John. “*Liberalismo Político*”. Op cit. Pag 67

En tanto, un segundo argumento que nos lleva a reafirmar que la categoría razonable acerca al agente rawlsiano a la disposición dialógica, lo constituye el vínculo que el autor le otorga a este concepto con el ámbito de lo público, dimensión ausente en trabajos anteriores y, como hemos argumentado ya extensamente, es hostil a la idea de un predominio de la racionalidad estratégica como motivación del actor. El espacio público compartido obliga a los agentes a someter sus juicios ponderados a la consideración de los demás y solo es a través del diálogo en donde presentamos y criticamos pretensiones de validez, que podemos llevar con éxito esa práctica política de la convivencia.

“Una diferencia sustancial entre lo razonable y lo racional es que lo razonable pertenece al ámbito de lo público de una manera que lo racional no. Esto significa que es a través de lo razonable como entramos como iguales al mundo público de los demás y que nos alistamos para proponer o aceptar, según sea el caso, los términos justos de la cooperación con ellos. Estos términos, establecidos como principios especifican las razones que hemos de compartir y reconocer públicamente ante unos y otros, como base de nuestras relaciones sociales”.⁷⁸

Si la razonabilidad, por tanto, nos conduce al diálogo, la búsqueda de acuerdos básicos debe concentrarse en la exploración de consensos que trasciendan nuestras afiliaciones morales, siendo el ámbito de lo público y de las tradiciones compartidas un campo fértil para esa indagación. (Rawls, 1993).

No obstante, estas transformaciones conceptuales que terminan por aportar a la teoría Rawlsiana componentes discursivos en su constructivismo, hunden sus raíces en la distinción analítica efectuada por Rawls entre pluralismo y pluralismo razonable. Expresamente señalado como un aporte realizado por Joshua Cohen, el adjetivo razonable implica sostener la existencia en nuestras sociedades de diferentes doctrinas comprensivas que ofrecen contenidos orientadores para la acción individual y grupal pero que, sin embargo, pueden ser incompatibles entre sí.

Esta aceptación del pluralismo razonable como característica constitutiva de nuestra cultura pública, obligó a Rawls a revisar las ideas de autorreflexión moral con la que sustentaba el test validatorio en el equilibrio reflexivo y en definitiva (por estar estrechamente vinculadas), la idea de convergencia moral presupuestas en la *Teoría de la Justicia*, que como vimos, se sustentaba en los ejercicios de una razón práctica entendida

⁷⁸ *Idem* Pág 71

en claves monológicas⁷⁹. Esto significa para nuestra presente argumentación, que las dos premisas restantes que identificamos como excluyentes del diálogo y la reciprocidad discursiva, a saber, el equilibrio reflexivo y la dependencia a las premisas de la autoreflexividad de los principios morales, son redefinidas en los últimos trabajos de Rawls. Comencemos nuestro análisis en la última de estas transformaciones.

El dato del pluralismo razonable exige a Rawls a buscar nuevas fundamentaciones para la estabilidad de su teoría. Si bien los principios de su constructivismo, en el plano metodológico siguen intactos, el contenido sustantivo de los principios debe ahora apoyar su validez en la concordancia con los valores públicos compartidos por aquellos que crecieron bajo una tradición pública común. En palabras de Rawls:

“Una característica de la concepción política de la justicia es que su contenido se expresa ahora en términos de ciertas ideas fundamentales que se consideran implícitas en la cultura pública de una sociedad democrática”.⁸⁰

De ahora en más, los principios de justicia plausibles de ser acordados por las partes en la posición original no surgirían *ex-ante* y tras la auto-reflexión egoísta de agentes racionales en ejercicios de trascendencia, pues aceptar el pluralismo razonable implica rechazar la posibilidad de la convergencia moral a través del ejercicio de la razón práctica. Como sostiene Cohen:

“...además del puro hecho del desacuerdo, el ejercicio de la razón práctica no genera una tendencia a converger en una filosofía de vida. Ninguna teoría de convincente de la razón práctica predice la convergencia de diversos tipos de moral abarcativa después de haberse considerado suficientes pruebas, reflexiones o argumentos”⁸¹.

⁷⁹ Al respecto afirmaba Carlos Nino “Esta versión de la teoría de Rawls, que la aproxima a la de Kant mucho mas estrechamente que los enfoques alternativos, fuera plausible **podríamos sostener que ella incluye una cierta caracterización de la verdad moral...** un juicio moral es verdadero en Rawls cuando deriva de un principio que sería aceptado en la posición originaria, vale decir, el deriva de un principio general universal, público, final, etc. que sería aceptado unánimemente en condiciones de imparcialidad, racionalidad, conocimiento de los hechos relevantes, etc. En Nino, Carlos. “*Constructivismo epistemológico: entre Rawls y Habermas*”. Op Cit. Pag 91.

⁸⁰ La aceptación de este hecho hizo reconsiderar toda la teoría de la estabilidad presupuesta en la teoría de la justicia. Ver “*Liberalismo Político*” Pag 29-65 y ss.

⁸¹ Cohen, Joshua “*Democracia y Libertad*” en Elster “*Democracia deliberativa*”. Op cit Pag 239.

Abandonando de esta manera las pretensiones universalistas de su primer obra, los principios de justicia no pueden fundamentar ya más su validez normativa en la concordancia moral, dado que en contextos de pluralismo razonable, la razonabilidad de diferentes y opuestas visiones religiosas filosóficas y morales implican la imposibilidad de un consenso unánime: **la razón práctica kantiana muta su significado e incorpora la divergencia y el disenso moral en claves de una hermenéutica de las tradiciones públicas constitutivas.**

De esta manera opera un giro relevante en el constructivismo Rawlsiano, que como ha señalado Habermas, vuelve a esa teoría, no sin ciertas ambigüedades, a buscar ahora sus fundamentaciones normativas en las instituciones políticas consensuadas y en las tradiciones públicas constituyentes:

“Rawls busca en apoyo de esas condiciones abstractas [la de un posible acceso a acuerdos básicos de justicia] la fuerza motivacional de una cultura política favorable, y la encuentra en el lugar privilegiado que representa una tradición constitucional continua, que tiene mas de dos siglo de existencia, que se ha visto desafiado una y otra vez por conflictos de clase y raciales, pero que constantemente se ha visto renovada y revitalizada por interpretaciones radicales. Si se toma esto literalmente, la fuerza de convicción política de la teoría queda reducida a algunos pocos contextos de resonancia”⁸²

La nueva tesis de Rawls puede resumirse entonces, en sostener que la búsqueda en las tradiciones políticas instituidas y en el trasfondo público común de la cultura liberal puede resultar en el logro de concepciones políticas razonables de justicia, aún operando en el marco de divergencia moral. Este acuerdo básico compartido entre las diferentes doctrinas comprensivas razonables; acuerdo que repito es estrictamente acerca de los valores políticos más justos para la cooperación entre ciudadanos libres e iguales, posiciona a la deliberación y al dialogo público en un rol clave para el acuerdo acerca de las cuestiones políticas fundamentales:

“Cuando los ciudadanos comparten una concepción política razonable de la justicia, disponen de una base, **sobre la cual las discusiones publicas pueden llevarse a cabo, para decidir razonablemente acerca de las cuestiones políticas fundamentales**”⁸³

⁸² Tomado de “*Facticidad y Validez*” Op Cit Pag.126.

⁸³ Rawls, John. “*Liberalismo político*”. Op cit Pag.15.

Reformuladas así las premisas del egoísmo moral y la aceptación de la intersubjetividad a través de los fundamentos que nos da un espacio público virtuoso, queda aún el análisis de la tercer premisa que excluía al diálogo y a la discusión razonada, a saber, el status que adquiere ahora el equilibrio reflexivo como instancia de validación de esos principios. Cabe el preguntarnos aquí: ¿Que sucede en cuanto a la validación ex post de esos principios? ¿Incorpora el equilibrio reflexivo a la deliberación como mecanismo de validez de esos principios, aportando de esa forma, un nuevo componente discursivo al constructivismo Rawlsiano? ¿El sentido de justicia que actuaba como el tribunal de validación, sigue entendiéndose como una instancia de autorreflexión de los agentes?

Si bien esta respuesta no ha sido lo suficientemente explorada sostengo aquí que el equilibrio reflexivo abandona los presupuestos de la autorreflexión moral e incorpora también el diálogo público en la instancia crucial de la validación.

El equilibrio reflexivo asume ahora una tarea hermenéutica de las tradiciones públicas compartidas, y su tarea fundamental recaerá en interpretar y buscar colectivamente interpretaciones de justicia que sean capaces de lograr consenso entre quienes profesan diferentes doctrinas comprensivas.. Esta es la conclusión lógica de una inferencia que dimos ya por entendida: la validación de los principios se sustentaba en nuestro sentido de justicia. Pero mientras que en la *“Teoría de la Justicia”* ese sentido de la justicia era una construcción intuitiva y generada por el actor moral en soledad, en este nuevo trabajo Rawls considera que las concepciones de justicia son una variable dependiente de ejercicios deliberativos que son, los que en ultima instancia, nos informan acerca de la plausibilidad y la factibilidad de llevar adelante tales concepciones.

“Cualquiera que sean los principios aceptados por las partes de entre todas las opciones disponibles, las personas a las que representan las partes serán capaces de desarrollar el correspondiente sentido de justicia, **en el grado en que las deliberaciones de las partes demuestran que ese sentido de justicia es posible y practicable**”⁸⁴

Por tanto, el adjetivo razonable impacta sobre el constructivismo rawlsiano y lo acerca a esquemas más deliberativos en tres dimensiones diferentes pero estrechamente vinculadas. Por un lado, al ampliar la racionalidad de los agentes que concientes ahora del desacuerdo endógeno que caracteriza nuestras sociedades, los impulsa a involucrarse

⁸⁴ *Idem.*

en el diálogo y en la cooperación con el fin de generar mayor estabilidad y previsibilidad normativa. Por otra parte, al describir más acertadamente el tipo de pluralismo que gobierna nuestras democracias contemporáneas, el adjetivo de razonabilidad termina por relativizar las pretensiones de convergencia moral, llevando a las partes involucradas a basar sus acuerdos en deliberaciones efectuadas entre diferentes tradiciones constitutivas con el fin de encontrar principios públicos compartidos. **Finalmente, lo razonable establece, y tal vez esta sea la dimensión más importante, las características que la deliberación pública asumirá, al determinar el tipo de dialogo posible, los ámbitos capaces de ser alcanzados por discusiones razonadas, así como en el tipo de razones plausibles de ser admitidas en el foro.**

Esto implica que, si bien Rawls incorpora en su esquema componentes deliberativos con mayor relevancia que en obras anteriores, este sustentará un concepto de deliberación acotada y restringida, tanto en aquellos aspectos sustantivos capaces de ser alcanzados por el dialogo así como en los ámbitos en donde será aplicada y los actores que hacen uso de ella.

Digo que el pluralismo razonable determina el tipo de deliberación plausible porque Rawls entiende que el consenso, en contextos de profundos desacuerdos, no puede ir más allá de los valores políticos más básicos de la sociedad. Precisamente, ésta imposibilidad para el logro de consensos más amplios está determinada por una serie de circunstancias que Rawls enumera y que brevemente reproduzco aquí.

En primer lugar los desacuerdos se plantean en cuanto al tipo de evidencias presentadas en una controversia, aún en aquellas que basan su validez en un discurso empírico y científico. Como mostramos en las primeras páginas de esta tesis, a pesar de los lamentos positivistas la ciencia esta atravesada por serias disputas en cuanto al valor de ciertos argumentos.

En segundo lugar, se pueden generar conflictos en cuanto al peso determinante que adquieren determinadas argumentaciones y pruebas en el desarrollo de una disputa.

En tercer lugar, la mayoría de nuestros conceptos morales y también los políticos están atravesados por una marcada ambigüedad y sus límites nunca son precisos. Lejos de plantearse como un problema lingüístico o de confusiones conceptuales como les gustaría a los analíticos, un mismo concepto moral puede dar lugar a diferentes interpretaciones y puede ser apelado en tanto argumento decisivo por ambas partes enfrentadas en un litigio. En cuarto orden, Rawls entiende que la importancia de nuestra experiencia vital y las

diferentes valoraciones que se pueden desprender producto de nuestra subjetividad, hacen difícil un enjuiciamiento imparcial de determinados problemas. El choque de diferentes argumentos normativos pero que reclaman similar peso y validez en una controversia, hace que el desacuerdo se fortalezca dada la imposibilidad de establecer un orden valorativo consensuado en contextos de pluralismo, constituyendo ésta la quinta razón esgrimida por el autor. Finalmente, Rawls retoma la tesis de Offe (aunque no expresamente) al sostener que las instituciones lejos de ser neutrales, abrazan diferentes concepciones morales y por tanto, al privilegiar determinados valores en detrimento de otros, terminan por recrudecer el conflicto en la etapa de implantación de políticas puntuales.

Resumiendo, las cargas del juicio tal como denomina Rawls a las fuentes del desacuerdo, constituyen serios obstáculos para la construcción de acuerdos básicos en una sociedad y dado este contexto, la misma deliberación puede resultar un instrumento infructuoso en la búsqueda de esos consensos:

“Muchos de nuestros mas importantes juicios se hacen en condiciones en que no es de esperarse que personas concientes del pluralismo, en el pleno uso de la razón, incluso tras una libre discusión, lleguen a la misma conclusión.”⁸⁵

Al transformar la imposibilidad de lograr acuerdos consensuales amplios en la premisa de partida, la cuestión relevante pasa a ser entonces ¿como podemos retomar la idea de la búsqueda de principios que permitan la cooperación entre ciudadanos libres e iguales y que profesan diferentes doctrinas morales, filosóficas y políticas en contextos de desacuerdo estructural?.

La respuesta que dará Rawls es decir que debemos dejar a un lado nuestras preferencias morales en conflicto y solo dialogar en aquellas cuestiones de política básica que permitan una cooperación justa e igual entre ciudadanos. Reducir la brecha del desacuerdo acotando nuestras discusiones solo al ámbito de lo políticamente sustantivo termina por sostener un esquema deliberativo que se sustenta en una estrategia de evitación, única salida para el logro de un consenso traslapado.

“La esperanza es que mediante este método de evitación, como podemos llamarlo, pueden moderarse, sino eliminarse por entero, las diferencias existentes entre puntos de vista políticos que compiten entre si, de modo que pueda mantenerse la cooperación social sobre la base de un mutuo respeto.”⁸⁶

⁸⁵ Rawls, John. “*Liberalismo político*” Op Cit. Pag 75

⁸⁶ Rawls, John “*Justice as Fairness: political not metaphysical*” En “*Philosophy and Public Affaire*”1985.

Este intento de acortar la brecha del desacuerdo a costo de dejar fuera de la discusión las pretensiones de validez normativas controvertidas, se constituye entonces, en la estrategia final adoptada por Rawls y termina por establecer el rol que ocupará la deliberación pública en su esquema constructivista.

El fundamento de tal comedimiento discursivo, se apoya en un concepto de razón pública que determinará un modelo deliberativo restringido, dados los fundamentos claramente Kantianos que la rigen. Este concepto y su vinculación con los márgenes estrechos otorgados a la deliberación por parte de Rawls, ocupan las siguientes páginas.

2. Restricciones discursivas y razón pública: un modelo acotado de deliberación democrática.

Rawls debe volver sobre Kant ahora para buscar el fundamento de una exclusión deliberativa que exige el hecho mismo del pluralismo moral. Para esta tarea, el concepto de razón pública sirve a Rawls en la tarea de justificar restricciones al ejercicio del diálogo público. En esta dirección es que la idea de la razón pública Kantiana es reformulada por Rawls y pasa a ser entendida como una concepción política de la justicia dotada de contenido liberal. Esta es en palabras de Rawls:

“[la razón pública] es la razón de los ciudadanos en pie de igualdad que, como cuerpo colectivo ejercen el poder político final y coercitivo unos sobre otros, al poner en vigor las leyes y al hacer enmiendas a su Constitución”⁸⁷

El contenido específicamente público de la misma viene determinado por tres características esenciales. En primer lugar, por constituir la razón de todos los ciudadanos considerados como libres, racionales e iguales; en segundo instancia porque su objeto específico es el bien público y finalmente, por la razón que su contenido versa “exclusivamente” sobre los principios de justicia política básicos, que de acuerdo con Rawls, lo componen los “elementos constitucionales esenciales”. (Rawls; 1971).

Esta idea de una razón pública ejercida en el marco de democracias liberales, tiene además un sustento deliberativo que se fundamenta en una predisposición moral de los ciudadanos hacia el diálogo y a la reciprocidad, que Rawls ha denominado “deber de civilidad”. (Rawls, 1992) .Este concepto carga al ejercicio de la razón pública con un componente claramente deliberativo al sostener que los ciudadanos, en la búsqueda de

⁸⁷ Rawls, John “*Liberalismo Político*” Op Cit Pag, 205.

principios de convivencia política y de normativa básica, deben ejercer el diálogo a fin de buscar los puntos de encuentros entre las diferentes perspectivas morales y religiosas.

De esta forma, los deberes de civilidad rawlsianos relativizan las premisas kantianas que imponían procesos auto-reflexivos, haciendo que su equilibrio reflexivo, (entendido como etapa de validación de los principios de justicia), incorporen actos de habla intersubjetivos y procesos deliberativos entre sus participantes.

Ciertamente, ésta conexión entre los deberes de civilidad y los sustentos deliberativos de la razón pública en Rawls, son afirmados por Javier Gallardo al sostener que:

“La razón publica debe regirse, según Rawls, por reglas de indagación y por criterios de argumentación o de juicio así como por deberes de civilidad, por virtudes que hacen posible la discusión racional, tales como el deber de explicarse y de escucharse mutuamente, de suministrar razones que otros puedan razonablemente suscribir, junto a la disposición a hacer ajustes o alteraciones razonables entre los puntos de vista propios y los de los demás ciudadanos”⁸⁸

Pero si bien los deberes de civilidad incorporan un aspecto deliberativo en su concepto de razón pública, Rawls realiza restricciones importantes al ejercicio de ésta al menos en tres ámbitos claves y que terminan por determinar un modelo de deliberación limitado y claramente minimalista.

En primer lugar, existen **restricciones discursivas en cuanto a los ámbitos y temas plausibles de ser abordados en el foro**. En este sentido Rawls sostendrá que, dado el pluralismo razonable y la imposibilidad que este supone de convergencia entre diferentes doctrinas comprensivas, el diálogo debe restringirse a aquellas cuestiones de justicia básica y a los elementos constitucionales esenciales de una sociedad democrática.

“El primer punto importante es que los límites que impone la razón publica no se aplican a todas las cuestiones políticas, sino solo aquellas que implican lo que podemos llamar elementos constitucionales esenciales y cuestiones de justicia básica.... Solo los valores políticos han de resolver tan fundamentales cuestiones como: quien tiene derecho a votar, o que religiones, o a quien se asegurara la igualdad de oportunidades, o la tenencia de propiedades.”⁸⁹

⁸⁸ Gallardo Javier. “*El dialogo en la Republica*”. Op Cit. Pag. 17

⁸⁹ Rawls, Op Cit Pag 205

En segundo lugar, Rawls propone **restricciones a los actores que participan en su ejercicio**. De esta manera, a su concepto inicial de una razón pública que incluye a todos los ciudadanos, Rawls posteriormente establecerá que se aplica a principalmente a militantes de partidos políticos, a los candidatos cuando se encuentran en contiendas electorales y a los demás grupos que de una u otra forma apoyan a estos. (Rawls, 1993). Así considerado, el espacio reservado a los ciudadanos en este ejercicio, se limita únicamente a los momentos en que votamos cuestiones que involucren cuestiones constitucionales esenciales. En esta parte sin embargo, Rawls que asume explícitamente un vínculo estrecho con el “*Contrato Social*” de Rousseau, no logra explicitar como los ciudadanos profanos podrían justificar públicamente y dar las razones de sus preferencias al votar en cuestiones políticas trascendentes, ya que el voto secreto y los impedimentos de escala implicarían importantes restricciones a ese ejercicio público de fundamentación discursiva de la voluntad. (Saward, 1990).

Finalmente, **la tercera restricción versa sobre los ámbitos y espacios en donde la razón pública es efectuada**. En este sentido, el *locus* de ésta ejercida deliberativamente, se concentraría fundamentalmente en:

“...foros oficiales, y por tanto, a los legisladores, cuando hablan en el parlamento, y al Ejecutivo en sus actos y pronunciamientos públicos. Se aplica también, al poder Judicial y sobre todo, A la Suprema Corte de Justicia.”⁹⁰

Por tanto, a diferencia de la concepción de Jurgen Habermas, no hay lugar en Rawls para la consideración de los potenciales discursivos de una sociedad civil dispersa y un espacio público informal que pueden en determinadas condiciones, afectar el contenido de las decisiones que toman esos circuitos institucionalizados del poder.

Estas “limitaciones discursivas” que Rawls expone, se condicen bien con el pretendido sustento liberal de su doctrina. Profundizando aún más que el mismo Rawls, Bruce Ackerman ha sostenido que en el caso de profundos disensos morales y en aquellos ámbitos en donde no podríamos ponernos de acuerdo, simplemente deberíamos dejar de lado nuestras controversias y comedirnos de dialogar. (Ackerman, 1994)

Pero estas restricciones dialógicas claves, hacen que una posible veta deliberativa en un esquema teórico se vea cercenada en sus fundamentos mismos. Pensar la convivencia política en un trasfondo de profundas divergencias morales, religiosas y

⁹⁰ *Idem*. Pag 206

filosóficas, no debería restringir la posibilidad misma de hablar sobre nuestros desencuentros. Aún sabiendo que el consenso resulta escaso y muchas veces imposible, el dialogar es la única forma de dejar claros nuestros puntos de desacuerdo, adquiriendo este “*conocimiento de las divergencias*”, un valor normativo fundamental en sociedades plurales.

Estos comedimientos discursivos bien pueden ser fundamentados además, en el principio de la neutralidad, es decir, que en contextos de desacuerdos estructurales, la prioridad debe ser de lo justo sobre lo bueno.⁹¹ Pero aún aceptando esta premisa, el principio de neutralidad no nos lleva lógicamente a que debamos dejar de dialogar sobre cuestiones de la vida buena o asuntos prácticos-morales que nos conciernen como comunidad. El error, y en esto comparto la tesis de Habermas, pasa por confundir neutralidad con regulación.

“El hablar sobre algo, no es lo mismo que inmiscuirse en los asuntos del prójimo....Antes, todos los asuntos que han menester de una regulación política deben discutirse públicamente, pero no todo lo que justificadamente es objeto de una discusión pública, queda ya también controvertido en objeto de una regulación política. Con ayuda de estas distinciones puede uno caer fácilmente en la cuenta de que las reservas liberales contra la deslimitación de espectro público de tema, resulten superfluas, mientras que queda protegida la integridad personal del individuo particular”.⁹²

Esta misma lógica es la que sirve de sustento a autores como Roberto Gargarella, para objetar los aspectos que limitan la posibilidad del diálogo público. El autor defiende la tesis de que los modelos constructivistas como lo de John Rawls implican de alguna manera un tutelaje por parte del filósofo, quien parece ser en última instancia, el que decide que aspectos debe un procedimiento aceptar y cuales dejar fuera de consideración.

A manera de conclusión resumamos lo visto hasta aquí. La transformación y relativización de las tres premisas que determinaban el rol devaluado y auxiliar que tenía la deliberación pública en la *Teoría de la Justicia*, **acerca el nuevo constructivismo Rawlsiano, tímidamente quizás, a una perspectiva deliberativa de la democracia.** La aparición de la disposición de la razonabilidad imputada a los ciudadanos, no solo debilita

⁹¹ La neutralidad como criterio de la restricción discursiva es el fundamento mismo de Ackerman para su modelo. La neutralidad de acuerdo con el autor se condice mejor con el dato del pluralismo ya que no exige a los ciudadanos esfuerzos de trascendencia que si exige Rawls a través de su velo de ignorancia. Para una comparación de los dos modelos ver Ackerman Bruce. “*Liberalismos Políticos*”. Doxa 17-18. Pag 34 yss.

⁹² Habermas, Jürgen. “*Facticidad y Validez*”. Op Cit. Pag 391.

las exigencias de la razón estratégica sino que supone la disposición a conversar con otros cuando está en juego la cooperación entre ciudadanos libres e iguales. A su vez, la ampliación del equilibrio reflexivo, entendido ahora como un mecanismo hermenéutico de nuestras tradiciones públicas compartidas, hace depender la validez de los principios ya no en un sentido de justicia sustentado sobre las premisas de la autonomía moral kantiana. La deliberación juega en ese aspecto, tal como intento mostrarlo, un papel preponderante en la conformación de ese ámbito del cual se desprenden la validez de los principios. El pluralismo razonable no lleva a la convergencia moral y por tanto en un trasfondo de desacuerdo persistente, el contenido sustantivo de los principios pueden rastrearse en nuestra cultura pública compartida, en donde la deliberación aproxima las diferentes perspectivas a través de un diálogo basado en la reciprocidad.

Sin embargo, al tiempo que se produce un acercamiento discursivo en la obra del segundo Rawls, este termina por fundamentar esquemas acotados de deliberación pública. Los apegos al concepto de razón pública que hunde sus raíces en fundamentos claramente Kantianos, hace que desde la teoría se establezcan límites temáticos, de actores pertinentes y de lugares en donde esta pueda ser desarrollada plenamente, determinando así un modelo de deliberación democrática excluyente y acotado, que renuncia al diálogo abierto y extenso en muchos de los asuntos que desvelan a las sociedades que se construyen sobre un trasfondo de pluralismo razonable.

CAPITULO V.

BASES Y FUNDAMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCURSIVA DE LA VOLUNTAD DEMOCRÁTICA: EL MODELO PROCEDIMENTAL DE J. HABERMAS.

Cuando nuestra intención reflexiva busca abordar los modelos normativamente exigentes de la deliberación democrática, la inclusión de la teoría democrática de Jürgen Habermas es una tarea que se presenta ineludible. No obstante, la tarea de tratar de sistematizar bajo el formato de lo que aquí denomino “modelo”, representa por momentos una tarea titánica dada la enorme acumulación de Habermas, en un desarrollo que lleva implícitos más de 30 años de trabajo teórico. En este intento de lograr un esquema lo más claro posible para el lector, el presente capítulo está estructurado en cuatro secciones. En la primera de ellas abordo las premisas de su modelo en una discusión sobre el rol del lenguaje y la racionalidad bajo el supuesto de que resultan categorías imprescindibles de ser abordadas si lo que buscamos es la cabal comprensión de su modelo democrático-deliberativo. También en esa sección presento esquemáticamente algunas de las principales críticas a su teoría, en el entendido que algunas de ellas impactan sobre el esquema teórico del alemán y otras no resisten mayor fundamentación. Si lo que buscamos es profundizar sobre la deliberación democrática en tanto régimen de dominación política, son menester diferenciaciones importantes que la crítica ha ignorado. (1). En la segunda sección presento su modelo deliberativo, estructurado sobre la base de tres puntos centrales. En primer lugar, la redefinición discursiva del concepto de soberanía popular y las consecuencias que se derivan de esta transformación conceptual para la comprensión del proceso democrático (2). El segundo eje central del modelo deliberativo, lo constituye la institucionalización de los presupuestos comunicativos en los procedimientos democráticos y el modelo contrafáctico de la formación de la voluntad política. El carácter procedimental que asume el proyecto democrático en Habermas, lo abordaré como un apremio político que nos impone el contexto pluralista de nuestras sociedades

complejas. En esta sección además, relativizo las críticas consensualistas y a la unanimidad del modelo, a través de la presentación de dos vías que dan a Habermas el giro realista ampliamente reclamado: la importancia de las negociaciones y la regla de la mayoría. (3). Completa este trabajo, una exposición sobre el rol de los espacios informales, los espacios públicos débiles y las potencialidades políticas de una sociedad civil plausible de generar presión sobre el sistema decisorio a través de su capacidad de influir en los contenidos fundamentales del proceso de producción normativa.(4).

I. Las premisas del modelo deliberativo. Racionalización de los mundos de vida y las potencialidades del lenguaje en las democracias plurales.

El punto de partida para una comprensión más precisa y teóricamente más rigurosa del proceso político deliberativo en Habermas, debe comenzar por subrayar la estrecha correlación entre los fundamentos discursivos del proceso democrático y la problemática de la racionalidad. Es por esta razón que debemos prestar especial atención a la ampliación de este concepto efectuada por el autor, la cual consistió básicamente en trasladar el énfasis analítico desde el sujeto entendido monológicamente a la comunicación intersubjetiva. En esta tarea, cuya materialización es su *“Teoría de la acción comunicativa”*, Habermas importa al análisis normativo de la democracia algunas premisas radicales que se sostuvieron en la filosofía política tras el giro lingüístico operado en la Europa insular y que significó un verdadero cambio explicativo de la acción y la racionalidad. Como resultado de esta transformación analítica, al concepto de acción estratégica o teleológica por la cual los actores se orientan directamente por su propio éxito y maximizando los posibles beneficios de su acción, Habermas le contrapondrá el concepto de acción comunicativa, definida como la capacidad de establecer vínculos que tiene el lenguaje ordinario y que permite a los sujetos involucrados en un intercambio comunicativo, orientar su acción a la búsqueda del “entendimiento”. **Este último, cuenta para su logro, con la fuerza ilocucionaria que se encuentra presupuesta en la estructura misma del lenguaje ordinario.**⁹³

Desprendida de la pragmática universal, es decir, de la posibilidad de reconstruir racionalmente la capacidad de hablantes y oyentes de comunicarse entre sí, la acción comunicativa hace depender la posibilidad de lograr acuerdos o entenderse con otros, ya

⁹³ El concepto de vínculo ilocucionario es tomado de J. Austin y denota la intención de un hablante que tiene intención comunicativa, es decir, que busca arribar a un entendimiento con el otro. Para un profundo análisis de estos conceptos ver Habermas, Jürgen. *“Teoría de la acción comunicativa”*. Vol. 1.351-432. Taurus.1981.

no en las predisposiciones de una moral autónoma accesible por un “yo” desligado de todo intercambio con sus pares o por la mutua gratificación interesada de participantes que actúan estratégicamente. En cambio, **la eficacia de la fuerza ilocucionaria del vínculo lingüístico se sustentará en la aceptación inevitable de los participantes en la comunicación, de una serie de pretensiones de validez implícitas en todo acto de habla y que son susceptibles de fundamentación argumentativa en caso de disenso.**

Podemos inferir de estos supuestos, una cierta naturalización del acuerdo depositado ahora en el uso de una comunicación idealizada que produce (contrafácticamente), la neutralización de todos aquellos elementos exógenos que violenten potencialmente el consenso comunicativo. No obstante, no podemos concluir por esto que el solo hecho de embarcarnos en una conversación nos llevará al buen puerto del acuerdo: **carece de todo realismo el pensar que en todo ejercicio conversacional cotidiano emprendemos prácticas argumentativas.** (Muguerza,1988)

En Habermas, la argumentación fundamentada en base a razones, núcleo normativo de su acción comunicativa y que es presentada como una forma de resolver los desacuerdos que surgen de cualquiera de las pretensiones de validez impugnadas, depende del cumplimiento de dos requisitos previos.

Primero, Habermas tiene que afirmar que la plausibilidad del vínculo que posee el lenguaje solo es posible si los participantes suspenden la actitud estratégica y orientada a su propio éxito por una actitud “realizativa”, es decir, por una predisposición al entendimiento con el otro.⁹⁴

En segundo lugar, además de esta predisposición a un uso comunicativo del lenguaje, la posibilidad que tiene la acción comunicativa para la construcción de acuerdos y procesos de entendimiento, solo se libera luego que hayan perdido fuerza vinculante las orientaciones normativas tradicionales o dogmáticas. Esto resulta un prerrequisito democrático, en tanto la racionalización de los mundos de vida implica la devaluación de los modos de orientación no reflexivos como la tradición o la religión, dejando por tanto a los miembros de una comunidad frente a la posibilidad de crear vínculos mediante sus

⁹⁴ Habermas no profundiza en las bases motivacionales de la actitud realizativa. Podríamos asimilar esta capacidad con el concepto de razonabilidad del segundo Rawls, aunque éste lejos de vincularlo como una capacidad del lenguaje, lo presenta como una predisposición moral del agente en contextos de pluralismo razonable.

propios esfuerzos comunicativos: **la racionalidad así entendida prepara el camino para la formación discursiva de la voluntad democrática.**⁹⁵

Este pre-requisito que exige un trasfondo postradicional como forma de garantizar acuerdos argumentativos, se condice claramente con el hecho de que nuestras sociedades democráticas inmersas en contextos de complejidad son esencialmente plurales. En ellas conviven diferentes concepciones de la vida buena así como numerosas doctrinas morales, filosóficas y religiosas. Esta premisa que da lugar a las preguntas rawlsianas por la justicia y la estabilidad de las sociedades democráticas, es también el punto de partida de Habermas para su concepción deliberativa de la legitimidad democrática. Pero a diferencia de Rawls, quien parte del pluralismo como un dato, Habermas ha realizado un esfuerzo teórico por comprender los procesos por los cuales las sociedades occidentales han llegado al punto de desligarse de los lazos tradicionales y demás fuentes no reflexivas de la justificación, buscando fundamentos de justicia y legitimidad en procedimientos democráticos que garanticen resultados racionales y *fair* simultáneamente.

Excede a esta argumentación la descripción de ese proceso y partiré por tanto de la aceptación de la premisa del pluralismo en Habermas, el cual lo encontramos bajo las denominaciones “trasfondo post-metafísico” o “contexto postradicional de justificación”. De todas formas y cualquiera sean los vocablos empleados, lo que importa saber es que el dato pluralista supone en Habermas problematizar dos ámbitos claves para la convivencia democrática y que responden a lógicas completamente distintas: a) por una parte, la fundamentación de los derechos fundamentales en un sistema jurídico que opera en el contexto de pluralismo y por otra parte b) la cuestión de cómo fundamentar un sistema de dominación política y cuales son la razones que se pueden invocar para esa legitimidad (Habermas; 1992)

Esta última distinción solo cobra relevancia en esta tesis, para desacreditar algunas de las principales críticas formuladas a Habermas en cuanto al carácter utópico que asume su proyecto democrático y que aquí solo puedo abordar de forma acotada.

El autor no ha logrado explicar satisfactoriamente, al menos hasta la publicación de “*Facticidad y Validez*”, por que el fundamento de esa corroboración discursiva debería ser el consenso. Como ha sostenido S. Luckes:

⁹⁵ Esto relación la he trabajado en “*Racionalidad y deliberación: ¿es el pluralismo un requisito para la formación discursiva de la voluntad?* Mimeo.

“La hipótesis contrafáctica lograría acreditarse pero solo porque ha sido formulada de manera que necesariamente tenga que ocurrir así, es decir, actores idealmente racionales en una situación ideal del habla no podrán sino alcanzar un consenso racional. Todo hace suponer que no ocurriría tal cosa, pues los actores en cuestión continuarían exhibiendo todos aquellos rasgos de su personalidad, prejuicios, limitaciones, miedos, vanidades que conducen a distorsionar la comunicación entre ellos”.⁹⁶

El sustento crítico de esta argumentación, se basa en que resulta altamente improbable poder alcanzar acuerdos consensuales en la vida política y democrática de una sociedad compleja, si el precio que debemos pagar es la emancipación de la experiencia y la despreocupación con respecto a los intereses y preferencias primeras del actor. **No solo es improbable, sino que también resulta normativamente delicado suponer un acuerdo consensual como coronación última del diálogo político.**⁹⁷

Pero en definitiva, tanto en su imposibilidad como en sus rasgos esenciales así como en sus riesgos normativos potenciales, creo que la lectura hegemónica proveniente desde la ciencia política malentiende a Habermas en este punto. Si bien es cierto que existen componentes utópicos en toda fundamentación política que tome a la pragmática universal como sustento trascendental del orden democrático, debemos esclarecer mejor algunos puntos críticos preliminares en este sentido.

En primer lugar, pensar un modelo idealizado de comunicación en la que es posible arribar a acuerdos fundados consensualmente, es un artificio teórico y una estrategia para identificar aquellas variables que obstaculizan, y en último caso impiden, el logro de acuerdos racionalmente motivados. En todo caso, es un insumo relevante para el diseño de instituciones y procedimientos que busquen un marco para la toma de decisiones y que pretendan reclamar de los resultados obtenidos la presunción *fair*.

Entendida así, la tan criticada miopía Habermasiana hacia las instituciones adquiere una nueva lectura: la institucionalización aparece como un constructo que tiene como finalidad corregir o al menos intentar neutralizar inequidades, prejuicios y desbalances de poder a fin de lograr decisiones racionales y justas en contextos de pluralismo. Al respecto Habermas señalaba:

“ Como quiera que los discursos estén sometidos a limitaciones....son necesarias medidas institucionales con el fin de neutralizar las *limitaciones empíricas*

⁹⁶ Lukes, St. “Of gods and demons. Habermas and practical reasons” En Mugerza J. “Ética y comunicación. Un discusión sobre el pensamiento ético-político de Habermas”. En J.M Gonzalez y F. Quesada (comp). “Teorías de la Democracia”. Anthopos. 1988. Barcelona.

⁹⁷ Como sostiene da Silveira: “... como regla general, allí donde aparezcan consensos muy sólidos, lo mas probable es que alguien le este imponiendo su punto de vista a los demás”. da Silveira, P. “Una Introducción a la teoría de la argumentación”. Taurus 2004. Pag 35.

inevitables y las evitables interferencias externas e internas, de modo tal que por lo menos puedan alcanzarse en un grado razonable las condiciones ideales previstas siempre por los participantes en la argumentación. *Estas necesidades triviales de institucionalización* de discursos no contradicen en modo alguno el contenido parcialmente contrario a la realidad de los presupuestos del discurso. Antes bien, los intentos de institucionalización obedecen por su parte a planteamientos de fines normativos que nosotros extraemos de modo automático de la comprensión intuitiva previa de la argumentación”⁹⁸

En segundo lugar, afirmo que las principales objeciones al modelo democrático deliberativo de Habermas toman como objeto fundamental de su crítica, la posibilidad esgrimida por el autor de resolver consensualmente y mediante ejercicios discursivos, pretensiones de validez normativas que devienen problemáticas.

Pero en cambio, si de lo que se trata es de explorar su modelo de democracia basado en la libre discusión y asumir la faceta deliberativa, **en tanto fuente de legitimidad de las normas en un régimen de dominación política**, las críticas a su consensualismo no pueden extrapolarse naturalmente. Operando a favor de esta tesis, veremos mas adelante que resultarán fundamentales en el diseño deliberativo del autor, el rol que asumen las negociaciones y la constatación de que el conflicto resulta inherente a la dinámica política. Pero permítame el lector presentar de manera tentativa las claves de este debate a fin de esclarecer la estrategia argumentativa de esta tesis.

El fin normativo que persigue la teoría democrática de Habermas, es el de cómo debemos afrontar el reto teórico de abordar el conflicto de intereses en un trasfondo democrático caracterizado por el pluralismo valorativo y extraer fundamentos de validez para las normas vinculantes que superen la mera aceptación inmotivada de estas. Como forma de resolver este problema inherente de la legitimidad democrática, es que ya en “*Problemas de legitimación del capitalismo tardío*”, Habermas distinguió dos tipos de normas de acuerdo al grado de universalización que estas potencialmente podían asumir. En primer lugar, se encuentran las normas que expresan lo que el autor denomina “intereses generalizables” y que llevan implícita la posibilidad de ser alcanzadas en un consenso racional alcanzado argumentativamente. (Habermas; 1973)

En segundo lugar, se encuentran aquellas normas que regulan intereses que no son posibles de generalizar dado que el conflicto de intereses y el tipo de preferencias que están en juego, no parecen ser susceptibles de ser superados a través de consensos

⁹⁸ Habermas, Jürgen “*Ética del Discurso. Notas sobre un programa de fundamentación*”. En “*Conciencia moral y acción comunicativa*”. Plantea Agostini 1983. La cursiva es mía.

fundados. La opción que parece quedarnos es el logro de compromisos a través de la práctica extendida de la negociación. En estas últimas, el énfasis se traslada a los procedimientos que regulan dichos compromisos y acuerdos parciales. El objetivo normativo que subyace es el de dotarlos a estos de las garantías necesarias para que el intercambio argumentativo entre las partes en conflicto no reflejen las asimetrías de recursos y de poder, neutralizando *en lo posible* las variables que *ex ante* violentan un acuerdo comunicativo *fair*.

Por tanto, solo son susceptibles acuerdos fundados consensualmente, de acuerdo con Habermas, aquellas pretensiones de tipo normativo no valiéndose entonces esa pretensión para aquellos conflictos que en su mayor parte son los que caracterizan nuestra vida política en una democracia compleja. En otras palabras, **no guardo dudas en sostener que los procesos de idealización mas fuertes y que revisten un cierto grado de pretensión utópica en su fundamentación, responden a teorizaciones del autor con respecto a la pretensión cognitiva de las normas morales y no se aplica a los alcances de la deliberación como núcleo normativo de una practica de dominación política, objeto de análisis de este documento.**

Al no ser esta una tesis que tenga como finalidad el abordaje de el cognotivismo de las normas prácticas, es que sencillamente dejare esa problemática fuera de toda consideración y **me concentraré exclusivamente en las características que debe asumir un modelo de dominación política legitima en contextos plurales de justificación.** Las razones que me asisten para justificar esta acotación temática entonces, se pueden resumir en tres corroboraciones:

En primer lugar, es en este aspecto en donde la lógica de lo político hace ceder y minimiza las pretensiones contrafácticas de una fundamentación filosófica de la deliberación democrática. En segundo lugar, la teoría del discurso redefine en este ámbito categorías claves del pensamiento y la praxis política como por ejemplo la legitimidad de las normas, un concepto de soberanía popular que se sustenta ahora en el poder comunicativo de los ciudadanos, el concepto mismo de división de poderes, el Estado de Derecho y las nociones de opinión publica y de sociedad civil.

En tercer lugar, la deliberación pública reclama en este espacio específico la exigencia de darle forma institucional a los presupuestos comunicativos; y finalmente, como trataré de argumentar en los próximos apartados, el tratamiento de la cuestión específicamente política de la democracia deliberativa en Habermas, desmiente el carácter utópico del

consenso y relativiza las fuertes idealizaciones que supone una teoría discursiva de la democracia.

Hechas estas aclaraciones previas, estamos en condiciones de presentar el modelo de democracia deliberativa propuesto por Habermas. Opto en esta tarea, por una fundamentación distinta a lo que comúnmente la literatura especializada identifica como la característica general de su modelo deliberativo. En estos trabajos, la deliberación democrática es presentada como un proceso que se sustenta en la interacción de un centro institucionalizado y una periferia profana que intenta presionar discursivamente para afectar el contenido de los resultados. Esto sin embargo, entiendo que constituye el eslabón final de una cadena que tiene al menos dos pasos previos.

2. El poder comunicativo y la autorización colectiva para ejercicio del poder político: la redefinición de la soberanía popular en Jürgen Habermas.

Todo intento de repensar nuevas fundamentaciones para una teoría democrática debe prestar especial atención al concepto de soberanía popular y la teoría del discurso no es ajena a esa pretensión. La soberanía popular, es decir, el sustento primero de la justificación de la idea democrática como forma de coexistencia política y moral de los ciudadanos, ha sido redefinida hasta el cansancio en los diversos relatos teóricos que buscan justificar la idea de una autorización proveniente desde el pueblo para el ejercicio político de la dominación. Si bien desde la Atenas clásica hasta nuestros días podemos rastrear los diferentes modos en que dicha autorización ha sido teorizada y defendida normativamente, no es mi intención realizar aquí una genealogía del concepto. En cambio, lo que estoy buscando explicar es por qué la teoría del discurso de Habermas sostendrá que en contextos de sociedades plurales y complejas, la legitimidad de las decisiones y las normas nos exige una nueva fundamentación de la soberanía popular y cuales son sus nuevas dimensiones, alcances y límites.

Para esto, parto por sostener que su modelo de democracia deliberativa hunde su fundamento primero en afirmar que la autorización colectiva para el empleo del poder político, depende del influjo de deliberaciones y del poder comunicativo que surge de los ciudadanos, que logran a través de ejercicios discursivos, la autonomía política que reclama la noción misma de democracia en contextos pluralistas.

En esta tarea presentaré en primer lugar las objeciones de Habermas a las teorizaciones de Kant, Rousseau y Hanna Arendt acerca de autogobierno y la soberanía popular, para luego presentar su tesis de una autorización colectiva entendida comunicativamente, que recoloca el peso de la soberanía en las argumentaciones mismas y en la importancia política que asumen las deliberaciones, cuando éstas impactan sobre los contenidos normativos de las decisiones democráticas.

2.1. Tres caminos objetables: la crítica Habermasiana a los fundamentos de la autolegislación en Kant, Rousseau y Hanna Arendt.

La premisa de partida de Habermas es que un contexto de pluralismo cultural, social y valorativo, la única forma de entender la idea de auto legislación, es decir, el hecho que los ciudadanos se entiendan como autores mismos de las normas que los obligan, es buscando nuevas formas de fundamentación del derecho. Esto sin embargo no es para nada novedoso. Desde dos tradiciones políticas encontradas como son el liberalismo Kantiano y el republicanismo de Rousseau, hemos consensuado que la libertad esta asociada con el imperio de la ley. Sin embargo, ambas concepciones parten de premisas completamente diferentes. Para Kant y los liberales en general, la legislación nutre sus contenidos normativos a partir de una moral dada que poseen los hombres en “virtud de su humanidad” y por tanto esa autonomía es previa al acto de legislar. Bajo esta afirmación, el legislador tiene la tarea de positivizar las convicciones morales que resultan para el externas y exógenas con respecto al proceso legislativo: **las normas jurídicas vienen a resguardar y a institucionalizar esa moral autónoma que está presente *ex ante* de toda legislación.**

En cambio, Rousseau presenta la validez de las normas jurídicas como dependientes de un procedimiento de formación de la voluntad racional, que permite que los intereses particulares sean neutralizados en virtud de una legislación que encarna el interés general. Las decisiones y leyes que un cuerpo deliberativo adopte luego de cumplir con los requisitos de excluir los “obstinados y miopes” intereses particulares, tendrán la presunción de ser justas, y redoblando la apuesta teórica hasta un limite normativamente peligroso, asumen el status de verdad. Esta apelación al interés general por parte de Rousseau a la hora de pensar la validez y justicia de las normas, se encuentra sostenida además sobre la premisa de que su procedimiento de legislación permite la coincidencia de las leyes resultantes con un *ethos* compartido y homogéneo, supuesto que cae indefectiblemente ante el dato pluralista.

Estas dos versiones de la autonomía y del ejercicio de la soberanía popular, que de forma extremadamente breve reproduje aquí, son desacreditadas por Habermas a través de diferentes caminos y por distintas razones. No comparte con Kant la idea de una moral autónoma capaz de ser revelada al agente por el uso de la reflexión: la autonomía no puede descansar en las potencialidades reflexivas de un sujeto aislado.

Si bien sobre esta concepción se sostiene toda la teoría de derechos subjetivos y delimitan los ámbitos privados de libertad, Habermas entenderá que de esta manera la idea de auto legislación queda vulnerada.

“En Kant encontramos una subordinación del derecho a la moral, y esto es incompatible con la idea de una autonomía realizada en el medio mismo del derecho. La idea de autolegislación del ciudadano exige que aquellos que estén sometidos al derecho como destinatarios suyos, puedan a su vez entenderse como autores del mismo. **La idea de auto legislación de los ciudadanos no puede reducirse pues, a la auto legislación de las personas particulares**”⁹⁹.

En cambio, contra Rousseau el reproche viene dado por los peligros normativos que supone vincular la idea de autolegislación con una exclusión sistemática de los intereses que son incapaces de soportar un test de universalización.

También son objetables para Habermas, tanto el status que en la obra del ginebrino asumen las mayorías numéricas y que podría redundar en un aumento de las posibilidades de que una minoría pueda ser objeto de grandes coerciones, así como el hecho de hacer depender su modelo democrático del supuesto poco realista de una homogeneidad valorativa de fondo y que se condice mal con el contexto post-metafísico que caracteriza nuestras sociedades democráticas.

“Rousseau lleva al extremo las exigencias y aun sobre exigencias a las que queda sometido el ciudadano las cuales vienen ya inscriptas en el propio concepto republicano de comunidad. Rousseau no puede explicar como cabría establecer una mediación entre la postulada orientación de los ciudadanos hacia el bien común y las diferentes constelaciones sociales de intereses de las personas privadas: como sin represión cabría establecer una mediación entre la voluntad general construida normativamente y el arbitrio de los individuos.”¹⁰⁰

Un camino diferente a estos dos revisados anteriormente, surge de aceptar que el derecho legítimo requiere para su cumplimiento, **que tanto su estructura formal así como sus**

⁹⁹ Habermas, Jürgen. “*Facticidad y Validez*” Op Cit Pag 185 y ss.

¹⁰⁰ *Idem*, Pag. 167.

contenidos específicos, resulten permeables y dependientes del poder comunicativo que surge de los ciudadanos que actúan y dialogan en el foro público. En esta dirección, las leyes e instituciones políticas reciben la autorización para operar, tal como sostiene Hanna Arendt, “del encuentro concertado con los demás y del actuar de común acuerdo con ellos”. (Arendt;; 1993).

En la perspectiva de la autora, la soberanía popular nutre sus principales contenidos de un dialogo no interrumpido y libre que se produce en espacios públicos no hipotecados por la presión externa de poderes sociales e intereses que puedan violentar deliberaciones *fair*: **la praxis comunicativa es, por tanto, la manifestación más clara de la autonomía política.**

Hasta aquí, Habermas comparte las premisas comunicativas de Hanna Arendt y su vinculación con la idea del ejercicio discursivo de la soberanía popular. No obstante, objetará que el argumento así presentado, reviste tintes de dogmatismo sino se profundiza y realizan mediaciones imprescindibles. Básicamente tres objeciones son las que, desde la teoría del discurso recaen sobre la fundamentación de H. Arendt.

En primer lugar, Habermas entiende que si bien de esta manera comprendemos como surge y donde se localiza el poder comunicativo de los ciudadanos, no arroja explicación alguna acerca de cómo éste se vincula con el ejercicio fáctico del poder institucionalizado. En segundo lugar, no parece quedar lugar en la teoría de Arendt para una concepción competitiva y adversativa del poder, dato por cierto realista y que choca con una fundamentación que exagera normativamente las virtudes del encuentro y la comunicación.

Finalmente, Arendt no teorizó sobre el impacto de ese poder comunicativo en relación a la implantación de leyes y regulaciones jurídicamente institucionalizadas. La autonomía política y la influencia de la ciudadanía deliberante sobre los centros tomadores de decisión y fundamentalmente sobre el derecho, resulta ya imposible de hacerla depender del encuentro físico, asambleísta y participativo del cual Hanna Arendt parece no poder despegarse teóricamente.

“La política no puede coincidir y con la practica de aquellos que hablan entre si para actuar de forma políticamente autónoma.... Si bien la decisión fundada y vinculante acerca de políticas y leyes exige, por un lado deliberación y toma de acuerdos *face to face*, por otro lado no todos los ciudadanos en el plano de las

interacciones directas y simples pueden unirse en tal practica ejercida en común”.¹⁰¹

Pues bien; si rechazamos entonces los supuestos Kantianos sobre la fundamentación de la legislación en base a la autorreflexión moral de los agentes; así como la homogeneidad ética-valorativa que requería Rousseau para normas que pretendan encarnar intereses generalizables y la posibilidad de una participación soberana en claves assembleístas, de acuerdo con las exigencias de Arendt, la interrogante que surge es : ¿qué opción nos queda para pensar la autorización colectiva en un trasfondo marcado por el pluralismo razonable y democracias que soportan altos grados de complejidad?. Tal es la respuesta que Habermas intenta brindar al vincular soberanía popular, autonomía política y el rol de la deliberación democrática en el proceso de legitimación política.

2.2. Soberanía popular y teoría del discurso. Pluralismo, representación y espacios públicos deliberativos.

La teoría discursiva de Habermas sostendrá que en contextos postmetafísicos de justificación, el principio de soberanía popular debe considerarse de acuerdo al cumplimiento de tres exigencias normativas relacionadas entre si. En primer lugar solo puede expresarse bajo las condiciones discursivas de un proceso de formación de la opinión y de la voluntad democrática que se presuma racional y fair. En segundo orden, la soberanía popular no se encarna más en los sujetos físicos reunidos en asamblea o través de resultados obtenidos agregativamente: la autorización y el contenido de esta se deriva del poder comunicativo de los ciudadanos. Finalmente, *debe institucionalizarse en procedimientos democráticos de formación de la voluntad política* que garanticen deliberaciones sustentadas en el aporte de razones ante pretensiones de validez controvertidas. (Habermas, 1992).

Pero esgrimidas las exigencias normativas, queda aun por presentar cuales son los requerimientos que una soberanía popular entendida comunicativamente, exige para su consolidación en un sistema democrático de partidos. La primera cuestión que surge, es saber cuales son los formatos institucionales que son compatibles con esta idea de una autorización colectiva entendida discursivamente. En este sentido, Habermas sostendrá

¹⁰¹ Habermas, J. “*Facticidad y Validez*” Op cit pag. 238ss.

que ante la imposibilidad de una reunión colectiva o de esquemas de asambleas directas, la teoría del discurso debe adscribirse al **principio de representación parlamentaria**. Dados los constreñimientos de escala que adquieren las democracias contemporáneas y la enorme complejidad decisoria que implica la regulación colectiva de nuestras sociedades plurales, la imposibilidad de la reunión colectiva en claves asambleístas debe dar paso a una revalorización del principio representativo, en el cual el parlamento adquiere nuevamente un status fundamental en el esquema decisorio. Pero este principio representativo, para dejar de ser considerado como causante de distender las relaciones políticas entre profanos y elite política, debe incluir en sus estructuras componentes discursivos fundamentales en los procedimientos que regulan la formación de la voluntad en estos cuerpos. En esta tarea, la teoría del discurso sostiene que en estos ámbitos, debemos prestar especial atención a los modos de elección, el status de sus miembros, que tipo de mandatos (libres o imperativos) y cuales son los marcos adoptados para la toma de decisiones en estos cuerpos.

Todas ellas deben ser funcionales al logro de deliberaciones y negociaciones que garanticen resultados *fair*. Se entiende, en la consideración de estos relevantes ítems, que la decisión por una u otra formas afecta la calidad deliberativa y por tanto la presunción de legitimidad de las mismas.¹⁰²

El segundo criterio subsidiario de este concepto de soberanía popular discursiva lo constituye el **principio de pluralismo político**. Este afirma la importancia que adquieren los partidos políticos para el proceso de formación discursiva de la opinión pública, al aportar una gran cantidad de voces y discursos al proceso de legislación. En el ejercicio de la libre competencia democrática, los partidos políticos se constituyen en estructuras formadoras de opinión pública insoslayables a la hora de garantizar la requerida *polifonía* de diferentes discursos y argumentos en el proceso democrático.

En definitiva y tal como señala Habermas:

“Solo el principio de de garantías de espacios públicos autónomos y el principio de la competencia entre partidos agotan, junto al principio parlamentario, el contenido del principio de soberanía popular”¹⁰³

¹⁰² Tal es la hipótesis que me encuentro desarrollando en “*Mayorías automáticas y deliberación pública. Una aproximación empírica desde la teoría del discurso*” Mimeo.

¹⁰³ Habermas, J. “*Facticidad y Validez*” Op cit. Pag 239.

Así, la soberanía popular entendida comunicativamente, que deposita el peso de la autorización en los discursos y argumentaciones, se constituye en el sustento de un modelo de democracia deliberativa que se organiza en la interacción de dos grandes estructuras. Por una parte se encuentran los organismos formales encargados de la toma de decisiones vinculantes, los cuales deben institucionalizar procedimientos institucionalizados de toma de decisiones y garantizar deliberaciones *fair*, mientras que en segundo lugar, el modelo deliberativo exigirá que esos espacios formales, a fin de que no generen procesos de autonomización con respecto al poder comunicativo emanados de espacios públicos profanos y no procedimentalizados, se encuentren abiertos a los aportes de una sociedad civil entendida discursivamente. Esta última, debe enfrentar la tarea de impactar a través de la “influencia” sobre los ámbitos decisorios más relevantes e intentar determinar así, los contenidos políticos fundamentales que adquiere la normativa en una sociedad democrática plural. Precisamente las próximas dos secciones se ocupan de cada uno de estos aspectos.

3. En busca de la institucionalización deliberativa: las dimensiones de lo político discursivo en Facticidad y Validez.

En su “*Teoría de la acción comunicativa*”, Habermas había dejado varias cuestiones sin resolver. Entre las más relevantes se encuentra la de no haber considerado cuales son las oportunidades reales que tiene un mundo de vida racionalizado y reflexivo de sus tradiciones, para hacer posible los logros de un poder comunicativo que se orienta a la obtención de consensos a través de la deliberación pública.. **En otras palabras, Habermas desestimó los componentes institucionales en sus primeros trabajos y no teorizó sobre como podría ser posible plasmar en procedimientos los presupuestos comunicativos contrafácticos de su “base ideal del habla”.** ¹⁰⁴

La redefinición del principio de soberanía popular, que exige ahora la institucionalización de los presupuestos comunicativos de la teoría de la acción comunicativa al interior de los procedimientos democráticos, no podría ser fundamentada sin una nueva valoración del componente institucional por parte de Habermas, que debe relativizar aquellas

¹⁰⁴ De más está decir que poco hay de nuevo en esto. Si tuviéramos que identificar dos críticas persistentes que recorren toda la carrera teórica de Habermas no dudaríamos en señalar por un lado la alta idealización tanto de sus conceptos básicos y premisas de trabajo así como también la escasa atención prestada por este al componente institucional de su teoría.

pretensiones primeras de entender la institucionalización como una mera “*necesidad trivial*”.

Es en esta dirección que la aparición de “*Facticidad y Validez*” supuso un giro notable en la obra de Habermas. Tan importante es el cambio, que efectivamente muchos de sus lectores pueden haberse sentido desorientados ante una obra, que si bien mantiene las complejidades intrínsecas del discurso habermasiano y conserva intactas sus pretensiones de erudición, parecen terminar con las raíces hegelianas al mostrar un acercamiento mucho mas profundo a Kant: el remolino que supuso la “*Teoría de la Justicia*” de Rawls había afectado así el discurso teórico del alemán. Sin embargo, este aspecto no pasó inadvertido por sus críticos quienes en algunos casos se preguntan, cómo ante tal transformación la imagen académica de Habermas no sufrió alteraciones en cuanto a su prestigio académico¹⁰⁵. Otros, en cambio, profundizan aún más y critican a Habermas el hecho de haber debilitado ciertas pretensiones normativas, expulsando aspectos sustantivos de la idea democrática a través de su insistencia por lo procedimental. (Cohen, 1999).

Pero lo cierto es que Habermas propone ya desde el principio mismo de “*Facticidad y Validez*” su pretensión de darle un carácter institucional a los presupuestos básicos de su acción comunicativa:

“Por lo demás, por esta vía trato de desmentir realizativamente la objeción de que la teoría de la acción comunicativa es ciega frente a la realidad de las instituciones, o de que tiene consecuencias anárquicas”¹⁰⁶

La cuestión central pasa a ser entonces, el determinar como es posible institucionalizar en el contexto de nuestras democracias, los exigentes presupuestos comunicativos que permiten el desarrollo de deliberaciones con pretensiones *fair*. **En esta dirección resulta indisociable, de acuerdo a nuestro parecer, que el producto institucional en Habermas esta condicionado por la relación entre pluralismo y procedimentalismo.** La apuesta por el procedimiento no es una opción teórica en el caso de Habermas sino que es el resultado de los apremios que el pluralismo valorativo le impone a los arreglos democráticos. Pero expliquemos esto con más detalle.

¹⁰⁵ En este sentido da Silveira expresa: “Lo intrigante del caso Habermas es entender como un cambio de perspectiva tan notable tuvo tan poco efecto sobre el proceso de difusión de su prestigio como filosofo” en da Silveira: “*Política y tiempo. Hombres e ideas que marcaron el pensamiento político*”. Taurus. 2000 Pag 251.

¹⁰⁶ Habermas, J. “*Facticidad y Validez*”. Op cit Pag.58

3.1. Los apremios del pluralismo: los fundamentos normativos del procedimentalismo democrático.

El pluralismo social y valorativo que caracteriza nuestras sociedades modernas nos exige pensar nuevas formas de fundamentar la legitimidad y la validez de las normas básicas que rigen nuestra convivencia democrática. Pues bien, **sobre este trasfondo plural es que se sostiene en Habermas una visión procedimental del sistema de legitimación democrática.** Cabe señalar que esta apuesta por las virtudes del procedimiento, lejos de representar una renuncia normativa producto de un giro realista efectuado por Habermas, hunde sus raíces en un discurso filosófico altamente abstracto que lo posiciona y lo legitima dentro de este grupo que denominamos normativamente exigentes. Un claro ejemplo de esto, lo aporta el derivar la apuesta procedimental como una consecuencia de la reformulación de uno de los conceptos más caros de la filosofía moral, a saber, el de la razón práctica.

La teoría del discurso partirá de sostener que ésta, entendida como la capacidad subjetiva que orienta la acción, la pasa a ocupar ahora la razón comunicativa y esto mantiene una estrecha relación con el trasfondo pluralista que caracteriza nuestras sociedades. Si como vimos éste implica el agotamiento de los fundamentos clásicos que nutrieron de contenido la razón práctica, esta ya no puede fundamentarse ni en una teleología trascendental de la historia (Hegel; Marx) ni en una determinada constitución natural o antropológica del hombre (Ghelen) ni tampoco por haber pertenecido a una tradición afortunada que hubiese logrado buenos desempeños democráticos (Rawls del liberalismo político; Rorty) Incluso, agentes capaces de alcanzar principios morales universales en el ejercicio de la autorreflexión, tal como la considero Kant, adquiere para Habermas un status metafísico dada las condiciones de pluralismo estructural. (Habermas; 1992).

El lugar de la razón práctica, sostendrá Habermas, lo ocupa ahora una razón comunicativa que impacta significativamente en nuestra auto-comprensión del sistema democrático. La razón práctica entendida comunicativamente, al no ofrecer ninguna orientación para la acción ni tampoco pretender (por estar impedida) brindar contenido practico alguno; **lo que nos ofrece es un procedimiento que nos permite obtener simultáneamente tres valores tan imprescindibles como escasos en el contexto de las democracias pluralistas: validez, justicia y racionalidad.**

“La razón comunicativa posibilita, pues, una orientación por pretensiones de validez, pero no da ninguna orientación de contenido determinado para la resolución de tareas prácticas, no es informativa ni directamente práctica... Solo tiene un contenido normativo en la medida que quien actúa comunicativamente no tiene mas remedio que asumir presupuestos pragmáticos de tipo contrafáctico”¹⁰⁷

La imposibilidad de brindar orientaciones subjetivas para la acción es una condicionante que nos impone el pluralismo y por tanto, debemos despegarnos de todas aquellas formulaciones que partan de un consenso normativo compartido como fundamento de nuestros principios de convivencia. De esta forma, Habermas toma distancia con respecto a la tradición republicana en su versión más exigente. De acuerdo con el autor, el republicanismo demanda requerimientos excesivos al actor deliberante y fundamentalmente cuenta entre sus prerequisites para la deliberación democrática, la necesidad de contar con un trasfondo ético compartido a nivel de la comunidad, consenso que resulta contrafáctico dadas las condiciones pluralismo¹⁰⁸.

Un claro ejemplo de esta tradición y del rol consensual necesario para el buen desempeño deliberativo de la ciudadanía lo ofrece F. Michelman al sostener:

“Argumentos persuasivos y discusiones persuasivas parecen irreconciliables sin una referencia conciente por parte de los implicados a su mutuo y reciproco apereibirse de ser coparticipes, no justamente de ese debate particular, sino de una vida en común mucho mas comprensiva, que exhibe también las huellas de un pasado común, dentro de la cual y partir de la cual surgen y cobran sentido los argumentos, pretensiones y demandas”.¹⁰⁹

Por el contrario, Habermas sostendrá que en contextos post convencionales, debemos focalizar nuestra búsqueda normativa en algún principio capaz de operar con neutralidad en cuanto a los contenidos prácticos que pudiera sugerir.

Esto permitiría a las deliberaciones desarrollar sus potencialidades racionalizadoras a fin de que los resultados obtenidos a través de éstas, puedan reclamar las condiciones de validez, justicia y racionalidad. Habermas denominará a este principio regulador, “principio del discurso” (D) y sostendrá que en contextos postradicionales constituye el fundamento de legitimidad, tanto de las decisiones más relevantes así como de las

¹⁰⁷ Habermas, Jürgen. “*Facticidad y Validez*”. Pag 66.

¹⁰⁸ Esta lectura del republicanismo como teoría que supone la armonía cívica y el consenso social, es desacreditada por Javier Gallardo y Cass Sustein. Ambos intentan proponer la reconciliación de los presupuestos republicanos con los componentes de pluralismo, conflicto y competitividad que son inherentes a la vida política. Ver. Gallardo, Javier: “*El dialogo en la Republica*” y Sustein, Cass: “*Interest Groups in American Public Law*”. En “*Stanford Law Review*”. 1985

¹⁰⁹ Michelman, F. “*Law’s Republic*” tomado de Habermas, J. “*Facticidad y Validez*” Op cit Pag 354

deliberaciones que operan en el circuito democrático. Su expresión en modo de principio sostiene que:

“Validas son aquellas normas (y solo aquellas normas) a las que todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su asentimiento como participantes en discursos racionales”.¹¹⁰

Este principio de validez de las normas, principio que sustenta la visión mas normativa de la democrática deliberativa en el mundo académico, tiene incorporado en sus supuestos pretensiones normativas altamente exigentes de las cuales solo quiero enumerar aquí algunas de forma breve.

En primer lugar, el principio D implica que todas las materias son plausibles de ser sometidas a discusiones racionales. La exclusión deliberativa, típica de los modelos deliberativos liberales, queda descartada por Habermas quien entiende que no existen razones fuertes para suponer bloqueos discursivos a ciertos temas y materias controvertidas.¹¹¹ En segundo lugar y vinculado estrechamente con lo anterior, Habermas vuelve a sostener su tesis que las cuestiones prácticas pueden ser resueltas argumentativamente, rechazando de esta manera tanto las premisas del intuicionismo racional así como los modelos privatistas que sostienen que las cuestiones morales pertenecen al ámbito de lo privado y por tanto, imposibles de ser esclarecidas a través de discusiones racionales fundamentadas en razones. (Habermas; 1973; 1983; 1992).

En tercer lugar, este cognotivismo de las normas morales y éticas dependen de que sean tratadas argumentativamente de forma diferenciadas. Esto significa que en cada ámbito en donde surge una pretensión de validez controvertida, las mismas deben ser tratadas con su correspondiente tipo de argumento y dependiendo de la materia a discutir¹¹².

Finalmente, resulta problemático también, el hecho de que Habermas insista que la resolución de pretensiones normativas conflictivas pueden ser discernidas discursivamente de manera *consensual*; dato que por cierto, ha disparado nuevamente las críticas hacia el modelo del alemán.

¹¹⁰ Habermas, J. Op Cit Pag 172

¹¹¹ Como ejemplos de bloqueos discursivos en formatos teóricos liberales, puede señalarse tanto los trabajos de Rawls como los comedimientos deliberativos de Bruce Ackerman.

¹¹² Tal es, entiendo, la pretensión utópica del modelo democrático de Habermas y que sin embargo la crítica ha ignorado en gran parte y sobre la que me detengo en la próxima sección.

Tampoco resulta menor, el hecho que Habermas sostenga que a partir de la formulación de este principio y sus efectos reguladores sobre las deliberaciones y posteriores decisiones, logra reconciliar los conceptos de autonomía pública y privada históricamente desvinculados en el pensamiento teórico, presentándolos ahora como interdependientes. De esta manera a la institucionalización de la autonomía privada que Habermas ve materializada en la positivización de los derechos subjetivos, el principio D reclama también para su correcto desempeño democrático la institucionalización de los presupuestos comunicativos que garantizarían una robusta autonomía pública.

“Los derechos políticos buscados tienen que garantizar la participación en todos los procesos de deliberación y decisión relevantes para la producción de normas, de modo que en ellos pueda hacerse valer por igual la libertad comunicativa de cada uno de posicionarse frente a pretensiones de validez susceptibles de crítica. De igual forma que la libertad comunicativa antes de toda institucionalización, esta referida a condiciones de un empleo del lenguaje orientado al entendimiento y depende de esas condiciones, así también los derechos a hacer uso público de la libertad comunicativa dependen de formas de comunicación y de procedimientos discursivos de deliberación y decisión asegurados jurídicamente”¹¹³

Surgen aquí preguntas relevantes tales como ¿Cuáles son los requerimientos que debe contener el procedimiento deliberativo si queremos generar resultados que sean justos y que además gocen de legitimidad? ¿Cómo es posible plasmar en esquemas institucionales los requerimientos de neutralidad que exige la comunicación libre de distorsiones?, ¿Como generar discusiones argumentativas institucionalizadas en contextos de complejidad decisoria, que discriminen entre las pretensiones de validez controvertidas y que a su vez exigen un tratamiento argumental diferente según la pretensión que se trate? Los intentos de dar respuestas a estas y otras interrogantes, están plasmadas en su modelo de formación de la voluntad democrática. Este se constituye en una instancia clave de su modelo democrático de deliberación pública al buscar generar legitimidad y racionalidad a través de la institucionalización del principio D. Este esfuerzo, sin embargo, no parece estar a salvo de altas idealizaciones susceptibles de ser objetarse por su escaso realismo político. Pero visto en su totalidad, el modelo de Habermas produce aquí el giro realista tan ampliamente reclamado, al incluir a las negociaciones y a las resoluciones mayoritarias como instancias claves del proceso político.

¹¹³ Habermas, J. " *Facticidad y Validez* " Op cit Pag 193

3.2. Un modelo idealizado de la formación de la voluntad en claves deliberativas: la institucionalización de los presupuestos comunicativos.

El principio D instituye un principio por el cual las deliberaciones pueden pretender validez en condiciones de pluralismo. **Pero si bien Habermas gana en realismo, al pretender enmarcar en instituciones un mecanismo capaz regular las discusiones de forma de lograr que estas generen razonabilidad, el autor transfiere las idealizaciones al procedimiento mismo.** Así se comprueba al sostener que para el correcto cumplimiento de D, las normas a decidir deben ser tratadas discursivamente a través de argumentos pertinentes para esa materia o ámbito en cuestión. Tal presupuesto contrafáctico, tal vez el de mayor idealización en *Facticidad y Validez*, se explica mejor si reproducimos el modelo de formación de la voluntad democrática que sustenta su concepto de democracia en claves deliberativas y que se encuentra enteramente determinado por los pre-supuestos que el principio D le impone. La premisa que esta detrás de este argumento podría reproducirse así: si el fundamento de la legitimidad de las normas y decisiones que un ámbito deliberativo toma se basa en los aportes que la discusión argumentada le otorga, debemos entonces institucionalizar procesos que garanticen que éstas se aproximan lo mas posible a su base ideal del habla: **la democracia depende así de la calidad de las deliberaciones y estas a su vez de una correcta institucionalización que debe respetar las exigencias de D.**

Para eso, Habermas presenta su modelo de formación discursiva de la voluntad democrática en aquellos organismos institucionalizados como una secuencia de cuatro etapas. En las tres primeras de ellas, el autor hace coincidir cada etapa con el tratamiento discursivo de distintos tipos de pretensiones de validez, exigiendo además para cada pretensión en pugna, formas de discusión y de tratamiento argumental específico para cada una de ellas. Este requisito se complementa con el recurso que implican las negociaciones y que completan el cuarto nivel de su modelo contrafáctico. Estas tienen lugar, como veremos, en aquellos casos en que la resolución consensual, (exigencia que Habermas reclama para la resolución de las tres pretensiones anteriores) sea de difícil o imposible logro. Veamos cada uno de esos niveles.

En la primera etapa, Habermas parte por señalar que a los organismos deliberativos formales se le pueden presentar cuestiones pragmáticas. En este tipo de asuntos el autor aborda la elección que tiene que realizar un agente (por ejemplo un legislador) cuando

tiene que elegir entre los fines adecuados para el cumplimiento de ciertas metas. Son claves aquí los informes de los expertos y los argumentos validados con una racionalidad científica que orientan acerca de los posibles desarrollos de determinados cursos de acción. No hay aquí conflictos valorativos profundos y lo que está en juego en cambio, es el rol del conocimiento experto en tanto insumo relevante para la toma de decisiones políticas.

No obstante, sería una simplificación excesiva suponer que quienes deliberan en ámbitos encargados de tomar decisiones vinculantes agotan su tarea en la elección de determinados cursos de acción en detrimento de otros. Si consensuamos que la democracia y sus instituciones producen normatividad en un contexto de pluralismo extendido y de alta complejidad, muchas veces resultan ser las metas mismas la que se constituyen en el objeto de problematización discursiva. En este caso, cuando un colectivo se enfrenta a este disenso sobre el orden valorativo adecuado a perseguir, nos encontramos en un segundo nivel de fundamentación que Habermas denomina **cuestiones ético-políticas** y para el cual resultan decisivos aquellos argumentos que plantean una autocomprensión de un colectivo sobre la forma de vida que quiere llevar adelante. Tales diferenciaciones son expuestas por Habermas cuando sostiene:

“En los discursos pragmáticos examinamos si las estrategias de acción son o no conducentes a un fin, y ello bajo el presupuesto de que sabemos lo que queremos. En los discursos éticos nos cercioramos de la configuración de valores, bajo el presupuesto de que aun no sabemos que es lo que en realidad queremos propiamente”¹¹⁴

Pero en este modelo de formación deliberativa de la voluntad democrática, queda aún por resolver la cuestión de si las decisiones que adoptemos cumplen con **el requisito de ser justas**. Con este fin, Habermas parte de afirmar que una norma cumple con el requisito *fair* siempre y cuando sea deseable ser cumplida por todos los afectados y para eso resultan adecuados discursos basados en argumentos morales que asumen la forma de un imperativo categórico. Para el cumplimiento de la pretensión de justicia, una norma debe superar argumentativamente lo que Habermas ha denominado, siguiendo la pragmática de Apel, un test de universalización. Este implica la posibilidad de que la decisión resultante, pueda encarnar un interés que supere las diferentes constelaciones de intereses privados y conflictivos que impiden el logro de un consenso fundado racionalmente. Con

¹¹⁴ Habermas, Jürgen. “*Facticidad y Validez*”. Op Cit. Pág 229.

esta pretensión, Habermas no hace más que reafirmar su tesis de que las cuestiones prácticas pueden ser resueltas argumentativamente. Ante tal carencia de realismo político a la hora de presentar un modelo político de formación de la voluntad, Habermas sostendrá además, que ante las controversias que puedan suscitarse en cualquiera de los tres ámbitos que hemos presentado, estas pueden ser susceptibles de una resolución de carácter consensual.

Presentado de esta forma, su modelo de formación deliberativa de la voluntad democrática cae en idealizaciones significativas, haciendo al procedimiento democrático una abstracción tan exigente que parecería no haber espacio para prácticas políticas concretas en un mundo caracterizado por la lucha de intereses, la persecución de fines auto interesados y la permanencia de conductas adversativas bajo la lógica de la competencia electoral. El modelo deliberativo en esta etapa de formación de la voluntad de los ámbitos institucionalizados, se parece más a una corte de justicia que un parlamento u otros foros políticos de toma de decisiones vinculantes.

Este modelo de la formación discursiva de la voluntad democrática en Habermas, produjo el revival de viejas críticas y curiosamente la omisión de otras relevantes. Es momento de presentar esas objeciones y de tratar de desacreditar otras a partir de la presentación de las negociaciones en el esquema deliberativo del alemán.

3.3. Tres críticas al modelo. Argumentaciones diferenciadas, consenso y unanimidad en el modelo deliberativo de Habermas.

De las tres principales críticas que el modelo de formación de la voluntad democrática Habermasiano ha sido objeto, entiendo que aquella que puede ser criticada por su escaso realismo y de imposible aplicación en esquemas institucionales, es la de sostener la posibilidad que un organismo deliberativo formal deba discriminar determinados tipos de discursos y argumentos dependiendo del asunto a normar. Si como vimos, el principio “D” supone que la razonabilidad de los ejercicios deliberativos depende en gran medida de esta práctica de argumentación diferenciada, en contextos de sociedades altamente diversificadas en donde un mismo ámbito decisor se enfrenta a cuestiones tan diversas como complejas, **resulta un supuesto demasiado simple el entender que las cuestiones y asuntos puedan ser tratadas únicamente bajo consideraciones pragmáticas, éticas-políticas o morales.** Las decisiones y los problemas a que debemos enfrentarnos suelen implicar todos estos aspectos a la vez y resulta imposible abordarlos exclusivamente bajo una de las tres dimensiones analizadas por Habermas.

Pero si hay algo de lo que Habermas hábilmente escapa es a responder a las críticas que señalan las escasas posibilidades de aplicación institucional que poseen sus supuestos teóricos. Una muestra clara de esto lo constituye el intercambio crítico mantenido con John Rawls y que dio lugar a la publicación del libro *“Debate sobre el liberalismo”*. (Habermas y Rawls, 1998).

Allí Rawls, al final de su réplica objetaba al alemán, entre otras cosas, el poco realismo de sus principales premisas procedimentales en las actuales condiciones políticas de nuestras democracias:

“Una democracia constitucional nunca podría, en la práctica, ordenar sus procedimientos y debates políticos de modo suficientemente próximo al ideal comunicativo del discurso de Habermas para tener la confianza de que su legislación no excede la indeterminación que permite la legitimidad. Las actuales políticas en la que los parlamentos y otros cuerpos llevan a cabo sus tareas exigen grandes desviaciones de este ideal”.¹¹⁵

Sin embargo, resulta en un dato curioso que si bien Habermas contesta cada uno de los puntos en discordia, curiosamente deja fuera de consideración el tratamiento de este punto crucial de su contrafáctico modelo institucional. Mas tarde en cambio, y solo a prueba de lectores minuciosos, el autor termina por asumir lo desacertado que resulta su elevada exigencia procedimental a los organismos políticos formales. En una nota al pie de su epílogo a la cuarta edición de *“Facticidad y Validez”*, sostiene:

“Normalmente las cuestiones políticas son tan complejas, que han de ser tratadas simultáneamente bajo aspectos pragmáticos, éticos y morales. Ciertamente estos aspectos solo pueden separarse analíticamente; **por eso ha de considerarse confuso mi intento de ejemplificar distintas formas de discurso haciéndolas corresponder linealmente cuestiones concretas**”.¹¹⁶

Habermas confirmaría de esta manera que resulta un intento fallido pensar en arreglos institucionales capaces de poder juridificar esta pretensión del principio D, ya que parece lograr buenos desempeños democráticos en cuanto a justicia y racionalidad de las normas, solamente en un plano estrictamente analítico.

No obstante, su modelo de formación discursiva de la voluntad política también reavivó las viejas críticas a las pretensiones consensualistas y de unanimidad que marcaron todo el desarrollo teórico de Habermas. Pero si bien he argumentado que el autor hasta su

¹¹⁵J. Rawls. “Replica a Jurgen Habermas”. En J.Rawls y J.Habermas. *“Debate sobre el liberalismo político”*.Ed. Paidós.1998. Pag 138.

¹¹⁶ Habermas; J “Facticidad y Validez” Op cit. Pag 650.

teoría de la acción comunicativa no explico los alcances y la fundamentación de su exigencia consensual como criterio de legitimidad de las normas, a partir de “*Facticidad y Validez*” **la extrapolación de las objeciones hacia el rol del consenso y la unanimidad sencillamente las considero injustificadas.** Esto, no obstante me exige una mejor fundamentación argumentativa.

El status de las objeciones acerca del rol consensual que rigen los trabajos académicos mas críticos con Habermas, entiendo, **siguen siendo imputadas a un modelo que el alemán va ha reformulado en las principales dimensiones políticas del mismo.** De esta manera preguntas relevantes tales como, ¿por qué debería ser el principio de coordinación consensual el núcleo normativo de la deliberación política?, o ¿no peca de escaso realismo político presuponer la llegada de acuerdos consensuales, solo por el hecho de embarcarnos en ejercicios argumentativos?, parecen omitir diferenciaciones relevantes en cuanto a la conformación de su modelo de formación discursiva de la voluntad en su dimensión estrictamente política.

En esta dirección, Javier Muguerza ha sostenido que el alcance de la noción de consenso en Habermas, está sujeta a ciertas confusiones lingüísticas plausibles de ser imputadas a ciertas anfibologías, esto es, ambigüedades sintácticas por la disposición de ciertas palabras o conceptos. Pero aún superando estas dificultades técnicas de la traducción, Mugerza va mas allá y objeta a Habermas la exageración contrafactica que este hace de las posibilidades del dialogo y el acuerdo en la vida política. De acuerdo con el autor, la premisa de partida es que el consenso al que hace referencia Habermas es un consenso fundado. Esto, por tanto, supone excluir de esta categoría no solo a los consensos que se llegan por presión o por cualquier intervención de un elemento ajeno a la libre argumentación, sino que además se descartan aquellos acuerdos en que la discusión se saldase con un compromiso entre las partes a lo que Mugerza reacciona sosteniendo:

“No queda claro por que debería ser así, un compromiso puede ser un honesta forma de concluir el debate cuando el intercambio argumentativo no da mas de sí”.¹¹⁷

Desde nuestra academia también se han producido criticas sustantivas que van dirigidas en la misma dirección. Javier Gallardo ha objetado en su artículo “*El dialogo en la republica*”, a las visiones maximalistas de la deliberación, basándose en la escasa atención que estas reservan a los componentes mas adversativos y competitivos de la vida

¹¹⁷ Muguerza, J. “*Ética y Comunicación*”. Op cit Pág 128

política fundamentando pretensiones filosóficamente robustas y normativamente atractivas pero de espaldas a la facticidad de las lógicas de lo político.

Como sostiene el autor, todo intento de implementar esquemas deliberativos como forma de justificar la legitimidad y de regular los procesos de toma de decisión en nuestras democracias, no puede ignorar los componentes de conflicto, pluralidad y orientación interesada que son inherentes a la dinámica política:

“El problema de las teorías que procuran llevar al buen puerto del consenso, de naturaleza contractual o basado en el “mejor argumento”, es que postulan la exigencia de una actitud deliberativa o comunicativa desencarnada, asociando la legitimidad de las decisiones colectivas a un consentimiento unánime, inspirado mas en sustentos filosóficos que políticos o democráticos”.¹¹⁸

Comparto con Gallardo, y así lo fundamente al inicio mismo de esta sección, que la teoría discursiva en Habermas se sustenta en premisas extraídas de un discurso filosófico. Repito, todo modelo democrático sustentado sobre las premisas de la pragmática universal lo condiciona a desarrollos altamente contrafacticos que desatienden inevitablemente las lógicas de lo político.

No obstante, creo que podemos identificar dos ámbitos en la teoría democrática de Habermas que permiten refutar las críticas orientadas a la pretensión consensualista y a la unanimidad como criterios últimos de la legitimación de las decisiones. Para esto recurro a aclarar argumentativamente por un lado, el rol que ocupa en la teoría del discurso las negociaciones y la formación de compromisos (1) y en segundo lugar, el status que asume la regla de la mayoría como mecanismo democrático fundamental en la solución de controversias en el proceso político.(2)

1. Con respecto a las relaciones que se pueden establecer entre las nociones de deliberación y de negociación, una buena estrategia es comenzar con las aclaraciones terminológicas y conceptuales pertinentes. **Esta tarea facilita mi argumentación que se orienta a sostener que no existe *incompatibilidad* teórica ni práctica entre el modelo discursivo de Habermas y la inclusión en este de las negociaciones.**

Sostener que no hay incompatibilidad, implica desestimar que hay un problema de consistencia lógica en el argumento que sostiene la posibilidad de contemplar

¹¹⁸ Gallardo, Javier. “El dialogo en la Republica”. Op Cit. Pág. 75.

negociaciones y esquemas deliberativos, en un mismo proceso de formación racional de la voluntad política.

La objeción de que el formato discursivo que nos presenta el autor, implica que la meta final es el consenso sin coerciones, solo considera una parte del modelo y en definitiva omite la relevancia que asumen las diferentes formas de comunicación que registran nuestras democracias contemporáneas.

Por tanto, atacar el esquema argumentativo de Habermas a partir de sostener que las negociaciones por sus diferencias conceptuales, y fundamentalmente, por ser un modo comunicativo que lleva implícita la no resolución consensual en base al mejor argumento, parte de una premisa incorrecta: **El modelo de formación racional de la voluntad democrática no se sustenta únicamente en procesos de entendimiento que buscan el acuerdo por el consenso del mejor argumento.** Este último es en todo caso, un modo comunicativo relevante en el modelo, pero debe convivir en el esquema con otras formas diversas de comunicación, entre ellas las negociaciones. En este sentido es claro Habermas al afirmar la pluralidad de vías comunicativas de las cuales se vale su formación racional de la voluntad democrática:

“El concepto de política deliberativa solo recibe referencia empírica cuando se toman en cuenta la pluralidad y diversidad de formas de comunicación.”¹¹⁹

En otro pasaje es aún más contundente:

“El procedimiento democrático, que institucionaliza formas de comunicación necesarias para la formación racional de la voluntad política, **ha de tener en cuenta de forma simultánea condiciones de comunicación diversas. La producción de normas se efectúa en una compleja red de procesos de entendimiento y prácticas de negociación.**”¹²⁰

Toda mi estrategia argumental se encamina a sostener que lo que si debe realizar Habermas para no caer en objeciones de consistencias, es una redefinición normativa de los procesos transaccionales superando la facticidad definitoria de estas como procesos sustentados en amenazas y lógicas de imposición de poderes desiguales. En este sentido, son aquí relevantes las siguientes preguntas: ¿Cuales son las diferencias conceptuales entre procesos de argumentación y negociaciones? ¿Cómo se definen estas últimas en el esquema de discursivo del alemán?; ¿Cuáles son los prerequisites que llevan a su

¹¹⁹ Habermas, Jürgen. “*Facticidad y Validez*”. Op cit. Pag 358.

¹²⁰ Idem. Pag. 248

realización?; ¿Qué características fundamentales asumen?, y finalmente, ¿Cuál es su rol y que importancia adquieren en el modelo deliberativo de Habermas?. Intentar responderlas es el propósito de las siguientes páginas.

Para comenzar argumentar no es lo mismo que negociar. Como Sostiene Elster:

“To argue is to engage in communication for the purpose of persuading an opponent to make the other change belief about factual or normative matters. In such discussions the only things that is supposed to count is “the power of better argument””.¹²¹

También el concepto de negociación que usará Habermas en primer instancia es tomado de Jon Elster, que define a estas de la siguiente manera:

“To bargain is to engage in communication for the purpose of forcing or inducing the opponent to accept one’s claim. To achieve this end, bargainers rely on threats and promises that will have to be executed outside of the assembly itself. Bargaining power does not derive of the power of better arguments, but from material resources, manpower and the like””.¹²²

Las negociaciones en este esquema surgen cuando actores con preferencias en conflicto muestran intenciones de cooperación, pero dada la naturaleza de los intereses en pugna, **no cabe esperar que la discusión logre generar acuerdos racionalmente fundados.**

Entendidas de esta manera, las negociaciones surgen cuando ante la existencia de los dos requisitos fundamentales, a saber, preferencias conflictivas y disponibilidad a la cooperación, los actores buscan alcanzar un compromiso¹²³.

En esta dirección es que Habermas entiende que las pretensiones consensuales que se exigen para la resolución de las pretensiones de validez normativas, tanto éticas como morales, no siempre pueden tener lugar, ya que no todos los intereses son susceptibles de superar un test de universalización de los mismos. No lo permite el contexto pluralista de nuestras sociedades así como algunos componentes inherentes de la vida política como la

¹²¹ Elster, Jon. “*Arguing and Bargainig. In the federal Convention and the Assemblée Constituante*” Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe. Working paper N° 4. 1991. Pag 2

¹²² *Idem*, Pag 3.

¹²³ Define Elster el motivo de las negociaciones: “Las negociaciones se producen cuando varios dispositivos para la cooperación y las partes implicadas muestran respecto a ellos preferencias en conflicto”. En Elster, Jon. “*El cemento de la Sociedad*”. 1991. Pag 30. También en nuestra academia Romeo Perez le asigna a las instancias de negociación un componente cooperativo por parte de los agentes con preferencias en conflicto. A través de una fundamentación, tanto factica como normativa de los procesos transaccionales en los foros parlamentarios, Perez sostendrá la interrelación de estas instancias con los procesos deliberativos-argumentativos y los momentos decisorios. En Romeo Perez Antón, “*La Productividad de la negociación*”. Cuadernos del Claeh. 73-74.

disputatividad y el conflicto. Bajo estos supuestos sostendrá entonces la importancia de las negociaciones para el logro de acuerdos políticos:

“En las sociedades complejas puede que, ni incluso en condiciones ideales, estén abiertas ni la primera ni la segunda alternativa, como ocurre siempre que todas las regulaciones propuestas afectan de muy distinto modo y maneras a intereses muy diversos, sin que quepa fundamentar un interés generalizable o el predominio univoco de un determinado valor. En estos casos queda la alternativa que representan las negociaciones, alternativa que ciertamente exige la disponibilidad a la cooperación por parte de los agentes que actúan orientados a su propio éxito.”¹²⁴

Para que un acuerdo transaccional sea aceptado por las partes en conflicto son necesarias la aceptación de algunas condiciones básicas. En primer lugar, la solución que ofrece un proceso de negociación debe ser mas ventajosa para los participantes de la misma que la no-solución, al tiempo que además, logre frenar tanto la acción de *free-riders* y las tendencias a la explotación de una de las partes, que por la posesión factica o simbólica de recursos diferenciados, puedan alterar el buen curso del acuerdo.

Pero estas negociaciones “espontáneas”, tal como las define Habermas, plantean un serio inconveniente a los presupuestos de la teoría del discurso, ya que el elemento distintivo de éstas resulta de la composición desigual de recursos y de poder, y por tanto los resultados posibles del compromiso estarían determinados sobre una base normativamente débil. Como dice el mismo Habermas:

“La cadena discursiva de la formación racional de la voluntad política tendría, empero, que romperse por el eslabón que representan tales compromisos si en las negociaciones, siquiera de forma indirecta, no pudiera hacerse aun valer el principio del discurso”¹²⁵

La respuesta pasa por la diferenciación que hace Habermas entre negociaciones espontáneas, anteriormente definidas y las negociaciones reguladas por procedimientos. Para que las negociaciones cumplan con los presupuestos de validez que requiere el principio del discurso (D), son los procedimientos que regulan los intercambios negociados los que cobran especial protagonismo, debiendo estos cumplir

¹²⁴ Habermas, Jürgen . *Facticidad y Validez*” Op. Cit. Pag 233.

¹²⁵ *Idem*, Pag. 234.

con determinados requisitos normativos, a fin de que los acuerdos resultantes cuenten con la presunción de haber sido obtenidos de modo *fair*.

“De forma directa, es decir dentro de las negociaciones mismas, ello no es posible, porque las partes, mediante amenazas y promesas, introducen en la interacción un poder de negociación que pueden privar al lenguaje empleado en común de sus efectos ilocucionarios de vinculo y restringir el uso del lenguaje a la consideración estratégica de efectos perlocucionarios... Así pues, el principio del discurso, que tiene por fin asegurar un consenso sin coerciones, solo puede hacerse valer en este caso indirectamente, a saber, mediante procedimientos que regulen las negociaciones de suerte que estas resulten justas.”¹²⁶

De esta manera es que entiendo que se produce en primer término, el giro realista en la teoría del discurso, que al no poder neutralizar las diferencias *ex ante* (por que la naturaleza de las preferencias en conflicto lo impide) y esperar el logro de un consenso argumentativamente fundado, vuelve su mirada a los procedimientos que regulan las negociaciones. Asumen aquí un status fundamental, las regulaciones orientadas a asegurar la igualdad de oportunidades para afectarse entre las partes y las normativas que se orientan a reducir las diferencias estructurales que pueden afectar el resultado de la negociación. Mas específicamente Habermas detalla algunos de los componentes esenciales que deben contemplar esos procedimientos: a) normativas orientadas a los derechos de participación; b) procedimientos consensuados de elección de delegados así como también sobre la composición de los delegaciones c) procedimientos sobre los modos de desarrollar la negociación; d) pautas que regulan el turno de intervención de las partes; e) estableciendo la duración de la misma por los imperativos de decidir; f) tipos de temas e intervenciones admisibles así como también previendo las sanciones necesarias en caso de incumplimientos tanto en el procedimiento como *ex post* del acuerdo obtenido.

También como un ejemplo de ciertos formatos procedimentales que constriñen el protagonismo que pueden asumir la búsqueda de intereses particulares y su imposición por lógicas sustentadas en la amenaza o en la maximización de un beneficio, están las obligaciones de hacer publicas sus pretensiones en conflicto. La publicidad y la apertura de los ámbitos resolutorios, permiten influenciar en las preferencias consideradas relevantes, en las informaciones pertinentes y en las razones que apoyan y legitiman tales

¹²⁶ *Ídem*. Pag 234.

preferencias. Opera en ellas, lo que Elster ha denominado brillantemente la *“fuerza civilizadora de la hipocresía”* para referirse a los constreñimientos que una marco deliberativo ejerce sobre la emisión de los actores embarcados tanto en una argumentación así como en un proceso de negociación.¹²⁷

En segundo lugar, una aproximación realista del proceso de formación racional de la voluntad política en Habermas y el rol que en este sentido juegan las negociaciones, se desprenden del contexto plural y heterogéneo que implican nuestras sociedades democráticas, y que como ya vimos, **implica en Habermas el compromiso con el sistema representativo y el fortalecimiento del parlamento como institución política neurálgica a la hora de la formación de la voluntad política.** Esta relación entre pluralismo no dominado, negociaciones y sistema parlamentario es también crucial a la hora de comprender el lugar que ocupan las negociaciones en el alemán. Es tal vez en este punto en donde Habermas mejor concilia en su modelo de formación racional de la voluntad política, tres instancias democráticas fundamentales, que si bien responden a distintas lógicas y supuestos, deben ser comprendidas como de necesaria complementariedad, a saber: instancias agregativas, instancias deliberativas y finalmente procesos transaccionales y de negociación parlamentaria.

Según el autor, el principio de representación parlamentaria se sustenta en la pretensión normativa de tratar de que queden representados allí las principales voces e intereses que son constitutivos de una sociedad democrática, y esto se logra en primera instancia a través de la institucionalización de procesos electorales basados en el sufragio libre, secreto e igual.

Luego de compuestos los esquemas representativos, los representantes en diversas instancias emprenden tareas que son típicamente deliberativas y de intercambio razonado de argumentos y razones. Si la resolución consensual no puede alcanzarse, o no se produce la persuasión trascendental del mejor argumento por parte de los participantes en la argumentación, al menos la instancia deliberativa puede operar en la no menos relevante tarea de dejar en claro nuestros desacuerdos y puntos de vista encontrados. Esta lógica esclarecedora de nuestros principales desacuerdos tiene tal vez mejores créditos normativos que la de la búsqueda de la unanimidad y ha sido un pilar clave del concepto

¹²⁷ “Un contexto publico promoverá el uso de un comprometerse de antemano con principios, sirviendo esa audiencia mas amplia como caja de resonancia de tal pretensión y haciendo así mas difícil desdecirse u echarse atrás”. Elster Jon. Tomado de Habermas, Jurgén Op Cit. Pag 420.

de deliberación que ha manejado la teoría democrática desde Atenas hasta hoy, tal como ya he demostrado en discusiones anteriores de este documento.

Ante esta situación, los actores concientes de los desacuerdos y de la imposibilidad de alcanzar consensos fundamentados pueden decidirse por lograr un acuerdo negociado. En este punto específico, Habermas es claro al sostener la interrelación que existe entre el sistema representativo, las relaciones que operan entre el parlamento y la opinión pública y finalmente, el rol normativo de las negociaciones.

Fundamentalmente, sostendrá que del principio representativo con el que se organiza el foro parlamentario (bajo el supuesto democrático de intentar contemplar las distintas valores e intereses que atraviesan las sociedades democráticas) **no puede deducirse que los representantes sean mandatados en cada punto específico de controversia pública.** Como acertadamente Dahl ha afirmado, el mandato que les conferimos a nuestros representantes es difuso y nunca podrían ser acotados, restringidos y basados en una lógica de instrucciones específicas. (Dahl, 1989).

Sobre esta imposibilidad factica pero también normativa, el papel de la transacción y la negociación política en el foro parlamentario es fundamental e inevitable y en esa dirección Habermas es contundente:

“Los diputados son elegidos normalmente por sufragio libre, secreto e igual. **Este procedimiento tiene un sentido inmediatamente convincente en lo que respecta a la elección de delegados a los que se transfiere un mandato para negociar compromisos.** Pues la participación en una práctica de negociación, equitativamente regulada, exige que todos los afectados estén igualmente representados; y tiene por fin asegurar que los intereses y orientaciones valorativas relevantes puedan hacerse valer con el mismo peso. Mientras que por ejemplo en las negociaciones salariales el mandato está rigurosamente circunscrito, el mandato de los representantes del pueblo queda bastante indeterminado aun en el caso en que a las negociaciones parlamentarias las consideremos exclusivamente bajo el aspecto de ponderación y arreglo de intereses, pues las elecciones políticas generales de las que surge la representación popular, tienen por consecuencia un amplio agavillamiento de intereses o generalización de valores”¹²⁸

Por tanto en el modelo deliberativo de Habermas, las pretensiones de un entendimiento en base a las potencialidades de las capacidades comunicativas idealizadas, quedarían descartadas en la mayoría de los diferendos típicamente políticos de una comunidad en que no quedaría margen más que para acuerdos, pactos y negociaciones normativamente

¹²⁸ Idem. Pag 249.

validas. Con esto al tiempo que desacredita las objeciones a las pretensiones utópicas sobre el consenso, Habermas gana en realismo político y factibilidad institucional.¹²⁹

Así, el modelo deliberativo del alemán que busca institucionalizar la formación racional de la voluntad política debe ser abordado considerando la importancia que este le guarda a diferentes formas de comunicación posibles, entre las que se encuentran las negociaciones. Si en cambio atendemos únicamente a la pretensión de arribar a consensos fundados basados en la neutralización de los componentes extra comunicativos, estaríamos atendiendo únicamente a una parte y dejando fuera del análisis el principal elemento que hace a su modelo una búsqueda normativa de la *dominación política*.

2. Por otra parte, el rol que asume la *regla de mayoría* en el esquema democrático de Habermas, constituye la segunda vía por la cual es posible relativizar las críticas dirigidas hacia la unanimidad como criterio último de legitimidad de las normas.

El mecanismo mayoritario, como forma institucional de marcar la conclusión de un ejercicio deliberativo, resulta para Habermas susceptible de ser aplicado a todos los ámbitos encargadas de la toma de decisiones, fundamentando esto en al menos cuatro razones.

En primer lugar, la norma mayoritaria encuentra su principal sustento en la premisa de la fabilidad de las cuestiones humanas, fundamento para nada novedoso y que hecha sus raíces en la obra de Stuart Mill. La fabilidad supone aceptar que la decisión adoptada por la mayoría no se equipara, tal como lo entendiera Rousseau, a una pretensión de verdad. Por tanto, la decisión a la que se arriba no asume el carácter de *cosa juzgada*, lo cual implicaría que el debate queda cancelado de una vez para siempre, sino que solo representa un momento en el proceso decisorio, pudiendo ser revisado con posterioridad a la luz de nuevas informaciones y argumentaciones pertinentes.

¹²⁹ Cabe sostener que una aproximación más realista a las prácticas comunicativas en las democracias actuales, la ofrece el concepto de “regateo” de Bernard Manin. Para el autor las diferencias entre las nociones de regateo y de negociación, supone considerar dos dimensiones. El regateo supone una apelación al individuo y su horizonte es el corto plazo mientras que en procesos de negociación, las propuestas son impersonales y el horizonte es el largo plazo. Para Manin, un análisis político en claves realistas no puede dejar de reconocer que la vida política se sustenta mucho más en regateos entre actores que en la presuposición de discursos ideales orientados al consenso y con la esperanza de llegar a acuerdos sobre la base de buenos argumentos. Ver. Manin, Bernard. “*Los principios del gobierno representativo*” Alianza Editorial. Pag. 242 y ss.

“La decisión tomada por la mayoría solo representa una cesura en una discusión ininterrumpida, que no fija por así decir, sino el resultado provisional de una permanente formación discursiva de la opinión. Solo debe considerarse su contenido como el resultado racionalmente motivado, pero falible de una argumentación que ha sufrido una interrupción en vista de la necesidad institucional de decidir, pero que en principio puede retomarse.”¹³⁰

En segundo lugar, la regla de la mayoría así entendida supone un modo de preservar la autonomía de la minoría derrotada. En ese sentido y entendiendo el carácter falible de toda decisión, los argumentos minoritarios constituyen un acervo de razones y argumentos plausibles de ser nuevamente puestos en circulación en el espacio público de formación de la voluntad.¹³¹

Cabe señalar como tercera razón justificatoria, que dada la imposibilidad fáctica de alcanzar la unanimidad, el resultado factible en la inmersa mayoría de nuestras discusiones políticas, implicará la votación mayoritaria como un mecanismo decisorio democráticamente atractivo dada la imperiosa necesidad de decidir.

Finalmente, no solo por el hecho de existir un tiempo institucional que presiona a la decisión se justifica una decisión mayoritaria. El tratamiento de pretensiones de validez controvertidas, en que las preferencias en conflictos no son plausibles de ser zanjadas por el mero hecho de la argumentación, deben en algún punto concluir la discusión y la regla mayoritaria se presenta con mayores credenciales normativas que otros mecanismos agregativos de voluntades.

Presentadas así las dos vías por el cual es posible relativizar las pretensiones consensualistas y de unanimidad imputada al modelo deliberativo del alemán, queda allanado el camino para el último eslabón del esquema democrático-discursivo en Habermas. Este supone abordar la importancia que asumen las deliberaciones y presiones discursivas provenientes de una sociedad civil políticamente inquieta, que busca influenciar sobre los ámbitos decisorios formales, reposicionando de esta manera, el rol de la ciudadanía profana en el circuito oficial del sistema político.

¹³⁰ Habermas Jürgen. “*Facticidad y Validez*”. Op Cit Pág 247.

¹³¹ En consonancia con esto véase el concepto de evaluaciones compartidas de Phillip Pettit. En “*Democracia y evaluaciones compartidas*”. En Isonomía. N°23. 2005.

4. El autogobierno como influencia: el rol de los espacios públicos no formales en la teoría discursiva de la democracia.

“Trataré de hacer plausible que la sociedad civil puede en determinadas circunstancias cobrar influencia en el espacio de la opinión pública, operar sobre el complejo parlamentario y obligar al sistema político a retornar a asentarse sobre la circulación oficial del poder”.

J. Habermas.

Si bien Habermas adopta a su modelo discursivo el esquema deliberativo propuesto por Joshua Cohen para regular los ámbitos institucionales formales, sostendrá que éste último desacreditó el rol de los espacios públicos no formales y el peso decisivo que una sociedad civil deliberante, puede adquirir sobre los ámbitos centrales de toma de decisiones y de producción normativa. Si bien este aspecto puramente institucionalista de la democracia en claves deliberativas se hacía entrever, como ya vimos, en la redefinición discursiva de una soberanía popular que trasladaba el peso de la autorización política a los discursos mismos, **quedaba en el deber de la teoría las posibles competencias democráticas de una ciudadanía profana para afectar los cursos de decisión política en una comunidad.** Sin esas imprescindibles mediaciones, por más que lograríamos que los ámbitos formales de deliberación procedimentalizaran los presupuestos comunicativos imprescindibles para el logro de buenas discusiones, no quedaría lugar en el modelo para que una ciudadanía pudiera participar en la toma final de decisiones. En todo caso, si

solamente nos esforzáramos en generar mayor legitimidad en parlamentos y foros institucionales implantando estos requerimientos discursivos, no hacemos otra cosa que mejor la calidad de una democracia que fortalece los fundamentos normativos de su esquema representativo, pero pagando el costo democrático de dejar intactas las posibilidades de que la ciudadanía pueda influir sobre los centros de poder.

Precisamente es “influencia” lo que Habermas le atribuye a los actores, discursos y espacios públicos que deliberan, formando opinión pública política y presión desde una sociedad civil robusta y políticamente inquieta. Tal es la posibilidad que tienen las esferas públicas no formales, para poder ejercer el poder sobre los ámbitos centrales de decisión y producción normativa en una sociedad democrática, que convive con la complejidad y el pluralismo valorativo.

“Una práctica de autodeterminación de corte deliberativo solo puede desarrollarse en un juego de interacciones entre la formación de la voluntad en los organismos parlamentarios, programada para la toma de decisiones e institucionalizadas en términos de derecho procedimental por un lado, y la formación política de la opinión en circuitos informales de comunicación política por otro.”¹³²

Cabe destacar que la importancia democrática que tiene la interacción de ámbitos formales e institucionalizados con espacios libres de procedimientos de formación de la opinión, no es algo para nada novedoso en la teoría política. De hecho, el rol que cumplen las asociaciones informales, los públicos dispersos y la opinión pública deliberativa sobre las estructuras encargadas de la generación de normas vinculantes en una sociedad democrática fue teorizado entre otros por F. Michelmann, que encuentra en esta interacción las fuentes republicanas de las prácticas constitucionales Norteamericanas.¹³³

Esta práctica política descrita por la teoría republicana, es ahora transformada por Habermas en pretensión normativa de su modelo deliberativo, al entender que la

¹³² Habermas, Jürgen “*Facticidad y Validez*”

¹³³ Sostiene Michelmann al respecto: “No quiero decir que esas esferas (Congresos, Estados, Parlamentos) sean prescindibles o carezcan de importancia. Lo que quiero decir es algo que es obvio, a saber, que buena parte del diálogo con consecuencias normativas se produce en el país, ocurre fuera de esos principales canales formales de política electoral y legislativa y que es posible que en las sociedades modernas esos canales formales no pueden ofrecer a buena parte de los ciudadanos demasiada experiencia directa de lo que son un compromiso y una implicación dialógica. Buena parte, quizás la mayor parte, de esa experiencia ocurre en las múltiples esferas de lo que conocemos como vida pública en un sentido lato. En los encuentros, choques y conflictos, en las interacciones y debates que se producen en torno a asambleas locales, en las asociaciones cívicas voluntarias públicas y privadas, en los clubes sociales y recreativos, en las escuelas, en los puestos de trabajo y en los locales de tiendas, en los eventos públicos y en la vida de la calle.....todas deben figurar entre las fuentes y canales del autogobierno republicano y de la política generadora de derecho”. Idem. Pág 349.

legitimidad de las normas tomadas en los ámbitos parlamentarios y la participación de la ciudadanía en las prácticas políticas de autogobierno que parten de un espacio público no reglamentado, deben ser complementarios y mutuamente dependientes. Así entendido, entre el sistema político, el administrativo burocrático y los espacios públicos de formación de la opinión política se realiza una división de funciones que lejos de ser antagónicos o conflictivos, deben sustentarse sobre una lógica de complementariedad:

“Solo el sistema político puede actuar. Es un subsistema especializado en la toma de decisiones vinculantes, mientras que las estructuras comunicativas de la opinión pública constituyen una vasta red de sensores que reaccionan a la presión de problemas o situaciones problemáticas que afecten a la sociedad global y estimulan opiniones influyentes. La opinión pública así elaborada y transformada en poder comunicativo **no puede ella misma mandar, sino solo dirigir el uso del poder administrativo en una determinada dirección**”.¹³⁴

Este rol que Habermas les reserva a los espacios públicos informales y en definitiva, las posibilidades de la ciudadanía de afectar los procesos de toma de decisión, únicamente a través de la influencia, ha devenido en duras críticas hacia el alemán. Entre ellos L. Avritzer, señala que Habermas ha caído en una contradicción teórica inversa a la cometida por Rousseau, al dejar intactas las posibilidades de una institucionalización de los arreglos comunicativos y por tanto de un poder más específico y efectivo a la ciudadanía: **nuevamente la sombra anárquica de la acción comunicativa vuelve sobre los argumentos de Habermas:**

“Existe una contradicción en la forma como Habermas recupera el concepto de deliberación argumentativa. Por un lado funda todo el proceso de legitimación de los sistemas políticos contemporáneos en la deliberación argumentativa, en la medida que para él, el poder de las estructuras administrativas no es capaz de generar legitimidad. Por el otro, su formulación no es capaz de producir arreglos institucionales porque su forma no supone más que la influencia en relación al sistema político”¹³⁵

Avritzer critica entonces a Habermas por el hecho de otorgarle únicamente la propiedad de influencia a la ciudadanía, asumiendo de esta forma un concepto normativamente débil de los potenciales democráticos del espacio público informal. La propuesta implicaría, de acuerdo al sentido que Avritzer le otorga al término “influencia”, una renuncia en cuanto al poder que podemos esperar de ese público que es portador y creador de la opinión

¹³⁵ Avritzer, Leonardo. “*Democracia deliberativa*”. Rev. Metapolítica N° 14..

publica ; en otras palabras, **la influencia parece ser poca cosa en un proyecto de democracia que se jacta de poseer pretensiones de radicalidad.**

Sin embargo, permítame el lector que discrepe con la argumentación de Avritzer. Entiendo, y creo que así se desprende de un análisis detallado en este aspecto, que Habermas apela a esta propiedad de influencia de los públicos informales, no como una renuncia normativa obligada ante la facticidad de la despolitización, el creciente desinterés ciudadano por la cosa pública o apelando a la escasa especialización cognitiva de un ciudadano que carece de las destrezas técnicas mínimas que exige una sociedad compleja. Todo lo contrario. La apuesta a la influencia, a la no procedimentalización y al resguardo de procesos de institucionalización, hunde sus raíces en fundamentaciones normativas más que exigentes. Para el autor en definitiva, de lo que se trata es que las esferas de lo público no formalizadas **no deben estar institucionalizados ni sustentarse en lógicas procedimentales, ya que solo de esa manera podrá mantenerse al abrigo tanto de las lógicas sistémicas y del poder social, así como también de todas aquellas variables que atentan contra el libre intercambio discursivo y que restringen en definitiva el logro de acuerdos o de procesos de entendimiento en nuestra vida política.**

Para precisar aún más esta pretensión, Habermas recurre al concepto de N. Frazer de “público débil”, es decir, aquel ámbito en que en palabras de la autora: “... su práctica deliberativa consiste exclusivamente en formación de la opinión y no incluye la toma de decisiones”. (Frazer; 1992). Es en estos ámbitos precisamente donde Habermas entiende que pueden realizarse el logro de comunicaciones irrestrictas con buenos desempeños democráticos, siempre y cuando estas vengan aseguradas por un catálogo de derechos privados que garanticen la libre expresión y la formación de opiniones en contextos de libertad comunicativa. De esta manera, Habermas cree reconciliar las nociones de autonomía pública y privada, desgajadas históricamente por la concepción liberal y la republicana respectivamente.

En la visión del autor, estos públicos débiles que se caracterizan por la pluralidad de voces que concurren, por las diferentes pretensiones de validez que son impugnadas en ellos, así como por la desorganización y anarquía comunicativa que los atraviesan, representan la mejor forma de aportar a los centros institucionalizados y regidos por procedimientos, lo que denomina “contextos de descubrimiento”. Este concepto tomado del discurso filosófico y que lo distingue del contexto de justificación, implica sostener que dada su

estructura no procedimentalizada, estos espacios espontáneos son mas sensibles para encontrar y resaltar problemas, de tematizarlos correctamente y fundamentalmente, son capaces de introducirlos en los circuitos encargados de la toma de decisiones, afectando así el rasgo burocrático y rutinizado que caracterizan los espacios de decisión institucionalizados.

Entendido así, la anarquía comunicacional que se pretende en las esferas de una sociedad civil deliberante y caótica en cuanto a los flujos de discusiones y debates que la atraviesan, resulta en pretensión normativa y no en una renuncia política, tal como sostiene Habermas:

“La autonomización ilegítima del poder administrativo y del poder social frente al poder comunicativo generado democráticamente solo se impedirá en la medida que la periferia sea capaz de a) rastrear y husmear los problemas latentes (y solo políticamente elaborables) de integración de la sociedad, de identificarlos y de tematizarlos eficazmente y a través de las esclusas del complejo parlamentario (o de los tribunales) introducirlos de tal suerte en el sistema político, que se vea perturbado su modo rutinario de trabajar”.¹³⁶

En definitiva, si a la garantía extendida de las libertades de expresión y asociación, le sumamos los esfuerzos por consolidar y proteger una cultura política habituada a la libertad, podemos esperar de los espacios públicos informales, libres y no reglamentados, la espontaneidad requerida para afectar estructuras burocráticas autonomizadas e inmunes a los aportes deliberativos de los ciudadanos.

Bajo estas condiciones parece resolverse la tarea inconclusa que había dejado Habermas en la teoría de la acción comunicativa, a saber, la de no haber teorizado sobre cuales eran las posibilidades que debería disponer un mundo de vida racionalizado para desafiar las lógicas invasivas de los sistemas y resistir además a las hipotecas que el poder social privado, económico y político institucionalizado imponen a la discusión libre y argumentativa en una sociedad democrática que pretende repensar el autogobierno en la complejidad y el pluralismo.

¹³⁶ Habermas, Jürgen. “*Facticidad y Validez*” Op Cit Pag.

CONSIDERACIONES FINALES.

Llegados a este punto, sería imprudente enfrentar al lector con un resumen de las principales afirmaciones vertidas a lo largo de este trabajo monográfico. En cambio, sí presentaré algunos de los desafíos teóricos e institucionales que entiendo resultan pertinentes y que pretenden dejar abiertas para el debate cuestiones fundamentales.

He partido todo mi trabajo, de la constatación que nuestras democracias se las deben arreglar con la existencia de al menos cuatro desafíos: a) un pluralismo cosmovisivo extendido y estructural, b) con un progresivo crecimiento de la complejidad técnica en la tarea de toma decisiones vinculantes, c) con la existencia de profundas e injustificadas desigualdades que ponen en jaque la estabilidad de las instituciones republicanas en el largo plazo, y finalmente, c) con la constatación de un creciente privatismo ciudadano que ve con extrañez el ámbito de lo público.

Este particular contexto, nos obliga a repensar las categorías más básicas del pensamiento político como son: la validez y legitimidad de las normas, los conceptos de soberanía popular, el proyecto de democracia como autogobierno del demos, así como también la creación de ámbitos y mecanismos para el tratamiento de nuestros desacuerdos básicos, al tiempo que respeten nuestra condición de iguales y libres.

Desde luego, la idea de la deliberación fue presentada en esta tesis como una de las nociones, tal vez la menos novedosa, pero sí con mayores virtudes que otros mecanismos para poder hacer frente a todos estos retos presentados anteriormente.

En mi opinión, considero a la democracia como uno de los proyectos éticos más ambiciosos que el hombre ha creado para la convivencia justa entre sus miembros. Consolidarla requiere cada vez mas para su buen funcionamiento y estabilidad, de ciudadanos fortalecidos en sus capacidades participativas y deliberativas, a fin de que puedan influir con éxito en los principales centros tomadores de decisiones. Bajo esta premisa, la construcción de ciudadanía es la construcción de la democracia misma y la deliberación es un componente esencial para el cumplimiento de ese objetivo.

La perdida de confiabilidad en los ámbitos públicos, el progresivo sentimiento de extrañez de la ciudadanía con respecto a las potencialidades de la participación y los procesos crecientes de apatía y desafección, **hacen entrever que en nuestros esquemas normativos se relativizan y desarticulan aquellas virtudes cívicas que fueron rasgos centrales de nuestra socialización democrática.**

En esta tarea, el reto ineludible de una teoría de la deliberación debería ser el repensar las formas y contenidos de la invitación al ágora, lo cual requiere replantear los desafíos de la socialización de las virtudes republicanas en un contexto de creciente apatía y de retiro a lo privado.

Una teoría de la ciudadanía en claves deliberativas, debe integrar también entre sus pretensiones normativas, además de las condiciones formales, exigencias de virtud y de obligaciones que contemplen también las responsabilidades de los ciudadanos cuando participan en la toma de decisiones. Esto implica generar herramientas y ámbitos participativos dialógicos en donde puedan tomar decisiones que los vinculen y los hagan responsables de las mismas, fomentando así procesos de autonomía y fortalecimiento ciudadano en detrimento de patrones asistencialistas que terminan produciendo actitudes políticas de pasividad.

Creo firmemente que la adopción de mecanismos deliberativos, implica para nosotros recuperar la concepción de que el ciudadano común tiene potencialmente la capacidad de tomar decisiones e influir, tanto en la construcción de una agenda pública de políticas que afecten la vida de su comunidad, así como en los contenidos de la misma.

La deliberación pública con sus correctos diseños institucionales, puede constituirse también en una poderosa herramienta en la reducción de la vulnerabilidad social de los sectores mas excluidos. Finalmente, su consolidación en espacios locales de participación, puede mejorar el potencial negociador de los ciudadanos, frente a las estructuras burocráticas estatales encargadas de la toma de decisiones.

El análisis de la racionalidad de los ciudadanos y sus diferentes interpelaciones, ilustró sobre las consecuencias democráticas que produce el partir de presupuestos cognoscitivos débiles de los sujetos, así como el de imputarle una racionalidad exclusivamente instrumental. Ambas consideraciones terminan por producir serios inconvenientes para el proceso democrático y su legitimidad. Al mismo tiempo, la asunción de ambas premisas debilita significativamente las pretensiones de lograr acuerdos fundamentales, en base a la práctica de un diálogo ininterrumpido. Tales afirmaciones son el sustento de las discusiones emprendidas en gran parte del capítulo segundo y posteriormente en la teoría de John Rawls.

Mi objeción en estos casos, se basó en que al considerar únicamente a los agentes dotados de tal racionalidad, resultaba posible alcanzar principios de justicia sin necesidad de haber entablado ejercicios deliberativos con los demás. Por tanto, el diálogo público para el logro de normas de convivencia compartidas en contextos de pluralismo, excluía desde los supuestos mismos de la teoría, **la necesidad misma de hablar**. De esta manera, un posible sustento deliberativo en Rawls se veía truncado ya en el tipo de racionalidad que la teoría imputaba a los agentes participantes.

He intentado defender también, la idea que la deliberación no agota su labor específica en la resolución consensual de los desacuerdos políticos. La conflictividad y la disputatividad que resultan inherentes a la dinámica de la vida política, no encuentran en la consolidación de prácticas discursivas un mecanismo democrático que amenace su naturaleza adversativa. Si bien la deliberación implica ya en su definición, la intención de los participantes de cambiar las preferencias de sus interlocutores, **no fracasa su práctica si al final de un intercambio argumentativo esto no se ha producido**. El contexto pluralista con el cual debemos convivir desestima, por su escaso realismo, la pretensión de arribar a consensos fundados en la unanimidad y además lo presupone normativamente peligroso. En esta dirección, fue que la discusión del tratamiento de la disputatividad política en la teoría de Habermas, sirvió para sentar posición con respecto al rol de las negociaciones y los compromisos entre partes con preferencias en conflicto. Aun así, la teoría debe prestar especial atención a los requisitos procedimentales que pautan el

desarrollo de tales ámbitos, a fin de generar condiciones mas justas y equitativas para su realización.

Junto con estas afirmaciones, emprendí también la discusión que busca acercar las propuestas deliberativas con los componentes agregativos de la democracia. En ese momento, sostuve que pecaríamos de estrechez institucional y de escaso realismo político, si planteamos el vínculo entre ambas perspectivas como una relación dilemática y no sustentadas en la reciprocidad.

Algunas derivaciones institucionales del *approach* teórico hacia la deliberación democrática quedaron en el tintero. Entre ellas, la más significativa y plausible de ser exploradas en futuras investigaciones es la que aborda la estrecha vinculación existente entre la noción deliberativa de la democracia y la generación de espacios de poder local. En esta dirección, existen argumentos que sostienen que los procesos de empoderamiento deliberativo y la generación de ámbitos locales de participación ciudadana, desafían los inconvenientes que producen modelos centralistas-burocráticos de toma de decisión. Tal como sostiene Archon Fung, el modelo burocrático ignora las preferencias locales, desconoce las iniciativas de la comunidad y se pierde del insumo fundamental que aporta el conocimiento de los afectados para el diseño de políticas públicas que sean efectivas y justas. La presencia de estas dificultades en los diseños de políticas típicas de un modelo centralista, terminan por impactar significativamente en los procesos de implementación, produciendo una distancia insalvable entre las metas diseñadas y las necesidades que los afectados entienden relevantes. Como contrapartida, los diseños de procesos de empoderamiento deliberativo deben esforzarse en: (a) Lograr una mayor participación e inclusión de los miembros en la toma de decisiones. (b) Fortalecer y mejorar los modos de acceso a la información. (c) Fomentar la capacidad de organización local, y por último, (d) deben privilegiar y consolidar ámbitos de toma de decisiones fuertemente deliberativas y dialógicas.

Así, es que la deliberación guarda una relación intrínseca con la noción de empoderamiento y democracia. La deliberación pública es una instancia capaz de revitalizar las capacidades participativas de los ciudadanos, aún cuando esta deba operar en contextos de alta vulnerabilidad social y profunda inequidad. Ahora bien, **la deliberación solo podrá generar actitudes participativas cuando los afectados que se involucran en las discusiones, pueden apreciar los impactos de su participación en políticas concretas que transformen aspectos sustanciales de su vida cotidiana.**

Dicho todo esto, queda en manos del lector la posibilidad crítica de enjuiciar los rendimientos teóricos del presente ejercicio académico.

En lo personal, solo me resta la angustia de despedirme del libro.

BIBLIOGRAFÍA.

Ackerman, Bruce. (1998). “¿Por que dialogar?”. Rev. Metapolítica. Vol. 2. Num 6.

Ackerman, Bruce. (1995) “*Liberalismos Políticos*”. Doxa Nº 17-18.

Almond, Gabriel y Verba, S. (1965). “*La cultura cívica: estudio sobre la participación política democrática en cinco Naciones*” Madrid. Euro América.

Arendt, Hanna. “*La condición humana*”. Paidós. 1998.

Austen- Smith y Feddersen, Timothy. “*Deliberation, Preference Uncertainty and voting rules*”. Northwestern University. 2005.

Avritzer, Leonardo. (2000). “*Teoría democrática, esfera pública y deliberación*”. Rev. Metapolítica. Vol.4.

Avritzer, Leonardo. “*Democracia deliberativa*”. Rev. Metapolítica Nº 14.

Bohmann, James. “*La democracia deliberativa y sus críticos*”. En Metapolítica Nº 14. 2001.

Cohen, Joshua. (1998). “*Democracia y libertad*” en Elster, Jon (comp) “*Democracia deliberativa*”. Gedisa Editores.

Cohen, Joshua. (1989). “*Deliberation and Democratic Legitimacy*”, en A. Hamlin and P. Pettit. “*The Good Politics*”. Blackwell. Oxford.

- Cohen, J. (1999) "*Reflections on Habermas on Democracy*". Ratio Juris. Vol. 12 N° 4.
- Chambers, Simone. (2006) "*Rhetoric, Public Opinion and the ideal of a Deliberative democracy*". Princeton University .2006.
- Dahl, Robert: "*The problem of civic competente*" *Journal of democracy*. Vol 13.
- Dahl, Robert (1971) "*La poliarquia*". Tecnos
- Dewey, John. (1958). "*El publico y sus problemas*" Ed Ágora. 1958.
- Da Silveira, Pablo. (2004) "*Una Introducción a la teoría de la argumentación*". Taurus 2004.
- Da Silveira, Pablo. (2000) "Política y tiempo. Hombres e ideas que marcaron el pensamiento político". Taurus.
- Elster, Jon. (1991). "*Arguing and Bargainig. In the federal Convention and the Assemblée Constituante*" Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe. Working paper N° 4.
- Elster, Jon. (1991) "*El cemento de la Sociedad*". Barcelona.
- Elster, Jon. (1992) "*The possibility of Rational Politics*". Tomado de Habermas, J. "*Facticidad y Validez*". Trotta.
- Elster, Jon. (1986), 'The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory', En J. Elster y A. Hylland ." *Foundations of Social Choice Theory*". Cambridge University Press, Cambridge.
- Fung, Archon. (2004). "*Six questions for iris Marion Young and Jane Mansbridge*" En: *National Civic Review*. Pag 48.
- Fung, Archon. (2003). "Deliberation Before the Revolution: Toward and Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust World". Princeton University.
- Fung, Archon. (2006). "*Varietes of Participation in Complex Governance*". Public Administration Review.
- Fung, Archon. (2004). "Six questions for iris Marion Young and Jane Mansbridge" En National Civic Review.
- Fung, Archon y Wright, Erik. (1999) "*Experiments in Empowered Deliberative Democracy*". Harvard Press.
- Frazer, Nancy. (1992) "Rethinking the Public Sphere" en "Habermas and the Public Sphere". Cambridge Mass.
- Gutman, Amy; Thompson, Dennis. (2004). "*Why Deliberative Democracy*". Princeton University Press.

- Gallardo, Javier. (2005). *"El dialogo en la Republica"*. Rev. Polis. Nº1. Vol 1.
- Honneth, Axel. *"La democracia como cooperación reflexiva. John Dewey y la teoría de la democracia del presente."* Rev. Metapolitica. Vol. 5. Num. 19.
- Hafer, Catherine y Landa, Dimitri.(2006). *"Rules of Debate"*. Conference on Deliberative Democracy". Princeton University.
- Habermas, Jurgen, *"Conocimiento e Interés"*. Taurus.
- Habermas, Jurgen. (1994).*"Tres modelos de Democracia. Sobre el concepto de una Política Deliberativa"*. En Ágora. Nº 1.
- Habermas, Jurgen. (1973) *"Problemas de legitimación en el capitalismo tardío"*. Amorrortu.
- Habermas, Jurgen. (1981). *"Historia y critica de la opinión publica"*. Barcelona.
- Habermas, Jurgen (1983) *"Conciencia moral y acción comunicativa"*. Planeta Agostini.
- Habermas, Jurgen. (1981) *"Teoría de la acción comunicativa"*. Taurus.1981. II Vol.
- Habermas, Jurgen; Rawls, John.(1998). *"Debate sobre el liberalismo Político"*. Paidos.
- Hobbes, Thomas. *"Leviatán"*. 1651. FCE.
- Jaeger, Werner. (1987). *"Paideia"* FCE.1987.
- Johnson, James. *"Argumentos a favor de la deliberación. Algunas consideraciones escépticas"*. En Elster, Jon. (Comp). *La democracia deliberativa"*. Gedisa.1998
- Kant. Immanuel. *"La metafísica de las costumbres"* Madrid. 1989.
- Knight, J; Johnson, J. (1994) *"Aggregation and Deliberation: On the possibility of democratic legitimacy"*. Political Theory. Vol 22. Nº 2.
- Lukes, Steven. *"Of gods and demons. Habermas and practical rehaznos"* En Mugerza J. *"Ética y comunicación. Una discusión sobre el pensamiento ético-político de Habermas"*.
- Luhmann, Niklas. En *"Discusión con Niklas Luhmann"* Tomado de *"La lógica de las ciencias sociales"* Ed. Tecnos Pag 306.
- Mackie, Gerrie. *"Todos los hombres son mentirosos: ¿carece de sentido la democracia"*. En Elster , Jon. *"Democracia deliberativa"*. Gedisa Editores. 1998
- Mackie, Garrie. *"The democracy Defended"* Cambridge Press. 2003
- Manin, Bernard.. *"Los principios del Gobierno representativo"*. Ed. Alianza.

- Mansbridge, Jane. (2005). *"Conflict and Self-Interest in Deliberation"*. Granada.
- Michelman, F. (1992) *"Law's Republic"* tomado de Habermas, J. *"Facticidad y Validez"*. Trotta
- Nino, Carlos. (1988) *"Constructivismo epistemológico: entre Rawls y Habermas"*. Doxa N° 5.
- Offe y Preuss.(1990). *"Instituciones democraticas y recursos morales"*. Isegoria.Num 2.
- Ovejero, Felix. *"Teorias de la democracia y fundamentaciones de la democracia"*. Doxa. N°19. 1996.
- Perez Antón, Romeo. *"La Productividad de la negociación"*. Cuadernos del Claeh. 73.
- Paramio, L. *"Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de preferencias"* Revista española de Ciencia Política N° 1. 1999.
- Pareja, Carlos. *"La cultura política uruguaya enfrentada a los dilemas económicos"* Texto inédito.
- Perelman, Ch y Olbrechts-Tyteca.,(1989) *"Tratado de la argumentación. La nueva retórica"*. Editorial Gredos.
- Pettit, Philip. (2005) *"Democracia y Evaluaciones Compartidas"*. En Isonomia. N° 23.
- Pettit, Philip. (2006) *"The aggregation problem for deliberative Democracy"*. Princeton University
- Platón. *"Georgias o de la Retórica"* en Platón *"Dialogos"* . Ed. Mexicanos Unidos.
- Przeworsky, Adam.. *"Deliberación y dominación ideológica"* En Elster, Jon (comp) *"Democracia deliberativa"* .
- Rawls, John. (1971) *"Teoría de la Justicia"*. FCE.
- Rawls, John. (1993). *"Liberalismo político"*. FCE.
- Rawls, John. (1985). *"Justice as Fairness: political not metaphysical"* En *"Philosophy and Public Affaire"*1985.
- Sanders, L., 1997. *"Against Deliberation"*. Political Theory. Vol 5 N°3
- Saward Michael *"Rawls and deliberative democracy"*. En M. Passerin D'Entreves. *"Democracy as Public Deliberation: News perspectives"*. Manchester press. 2002.
- Sandel, Michael. (1982) *"Liberalism and the limits of Justice"*.Cambridge Press.
- Saward, Michael. (1990) *"Rawls and deliberative democracy"*.
- Sen, Amrtya . (2002) *" Desarrollo y Libertad"*. Editorial Planeta.

Schmitter, (2004) “*Una propuesta para la creacion de una asamblea de ciudadanos*”. Revista “*Lo que vendra*” Año 1 N°1

Schumpeter, Joseph. (1958). *Capitalismo, Socialismo y Democracia*”. Ed. Folios.1958

Shapiro, L., (2002) “*Optimal deliberation*” Journal of political Philosophy. Vol 10 N° 2

Spinoza, Baruch. “*Tractatus theologico-politicus*”

Sustein, Cass “*Beyond the Republican Revival*”. En Miller. “*Sobre la Nacionalidad*” Paidos 1997

Sustein, Cass. (1985). “*Interest Groups in American Public Law*”. En “*Stanford Law Review*”.

Young, Iris., (1999) “*Activist Challenges to deliberate Democracy*” Political Theory. Vol 29. N° 5.

Young, I.M. (2000), *Inclusion and Democracy*, Oxford University Press, Oxford